



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y  
ESTUDIOS SUPERIORES EN  
ANTROPOLOGÍA SOCIAL

---

**ENTRE LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA Y  
LAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS  
LAS DISPUTAS EN TORNO A LOS CULTIVOS  
TRANSGÉNICOS, EL GLIFOSATO Y LA  
POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL EN EL  
GOBIERNO DE LA 4T**

**T E S I S**

QUE PARA OPTAR AL GRADO DE  
MAESTRA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

P R E S E N T A

**WENDY JOCELYN BAZÁN LANDEROS**

**DIRECTORA DE TESIS:  
DRA. GABRIELA TORRES MAZUERA**

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

SEPTIEMBRE 2021

**©WENDY JOCELYN BAZÁN LANDEROS 2021  
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS**



**CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS  
SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL  
UNIDAD PACIFICO SUR**



## **PÁGINA DE FIRMAS**

El presente Comité y Jurado evaluador ha decidido aprobar, como parte de los requisitos para optar al grado de Maestra en Antropología Social, la tesis: **“Entre la construcción discursiva y las prácticas productivas. Las disputas en torno a los cultivos transgénicos, el glifosato y la política de desarrollo rural en el gobierno de la 4T”** presentada por: **Wendy Jocelyn Bazán Landeros.**

---

**Dra. Analiese Marie Richard**  
**Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa**

---

**Dra. Gabriela Torres-Mazuera**  
**CIESAS Península**

---

**Dra. Libertad Chávez Rodríguez**  
**CIESAS Noreste**

---

**Dr. Tlacaelel Aarón Rivera Núñez**  
**Instituto de Ecología A.C.**

Septiembre de 2021

**A mi compañero de vida, por todas las semillas sembradas.**

# AGRADECIMIENTOS

Agradezco a los y las campesinas mayas y menonitas de Hopelchén que, desde que llegué por primera vez al municipio, hace más de cinco años, me recibieron con amabilidad, bondad e interés. Y siempre fueron accesibles para compartirme sus reflexiones y escuchar las mías. Para ustedes el sentido de este escrito. Espero que sus perspectivas y enseñanzas que quedaron plasmadas en este trabajo tengan un eco que aporte a mejorar “la política”.

Infinitas gracias a mi asesora y amiga Gabriela Torres-Mazuera por el ánimo tan inspirador que me transmite, por compartir sus reflexiones, y por siempre invitarme a pensar más allá de lo evidente. A ella mi ánimo por continuar con el estudio tan importante de la vida rural en México.

Gracias al comité maravilloso que convocamos para revisar este trabajo. A Tlacaclé Rivera por aportar con su valiosa experiencia y su tan cercana relación al tema desde una mirada crítica, autocrítica y siempre propositiva. Gracias por los alientos para continuar en el tan privilegiado mundo académico que, como hemos comentado, nos permite posicionarnos sin tantas reservas sobre aspectos políticos de la vida. Gracias por los muchos textos y autorxs aconsejados. Fueron de gran ayuda para ampliar mi comprensión de la vida rural mexicana en el contexto global agroalimentario.

Muchas gracias a Libertad Chávez por la rigurosa lectura que realizó a un primer borrador de este trabajo y por las valiosas sugerencias teórico-metodológicas que, desde su expertise, en la ecología política feminista, realizó a mi trabajo. Sus aportaciones enriquecieron de manera sustancial el producto final. Y me despertaron muchas inquietudes sobre el enfoque de género en las ciencias sociales y en los temas socioecológicos, perspectiva que queda como una gran deuda de este trabajo.

A Analiese Richard que, desde el primer coloquio de la maestría, se mostró interesada en mi trabajo y me sugirió autoras que desarrollaron argumentos muy potentes, que fueron ejes fundamentales en la construcción de esta tesis. Gracias por los comentarios finales a este trabajo que, además de aportar mucho a la versión final, me dejan importantes enseñanzas. Estoy segura, ayudarán a desenredar más de mis ideas en futuros trabajos.

Muchas gracias al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por la beca que me proporcionaron durante mis estudios de maestría, y las oportunidades previas que me ha dado como reconocimiento a mi trabajo. ¡Que no paren las becas!

Gracias a mis profesoras y profesores de CIESAS Pacífico-Sur, todo mi reconocimiento a su trabajo y esfuerzo por esa tan importante y valiosa labor de compartir conocimiento. Por sus aportaciones a mi trabajo final en cada clase.

Muchas gracias a todxs lxs que hacen posible la vida académica del CIESAS Pacífico-Sur. A la parte administrativa, y por supuesto, a quienes se encargan de los asuntos tan importantes y valiosos de la cotidianidad.

Y finalmente quisiera expresar la gratitud que me da el haber coincidido con personas maravillosas y brillantes que, desde sus pensares y hechos, me hicieron ampliar mi perspectiva sobre temas antes no explorados como el feminismo, el género, las violencias y las infancias, la fotografía, el arte. A ellxs mi reconocimiento por querer aportar un granito de esperanza a este mundo que tanto lo necesita.

A mi querida familia, por siempre apoyarme y cuidarme.

A mis compañeros de Maestría que se volvieron mis amigxs. Edgar, Juanin y Bea, les quiero.

A Wilma que no deja de mostrarme las satisfacciones de la vida campesina, siempre con una gran sonrisa.

A Ángel, mi sembrador favorito.

# RESUMEN

**TITULO DE LA TESIS:**

ENTRE LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA Y LAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS. LAS DISPUTAS EN TORNO A LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS, EL GLIFOSATO Y LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL EN EL GOBIERNO DE LA 4T

**FECHA DEL GRADO:**

SEPTIEMBRE 2021

**NOMBRE:**

WENDY JOCELYN BAZÁN LANDEROS

**GRADO PREVIO AL QUE OPTA:**

LICENCIATURA EN DESARROLLO Y GESTIÓN INTERCULTURALES

**INSTITUCIÓN PREVIA:**

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

En 2019 por primera vez un gobierno “de izquierda” fue elegido de manera democrática en el país. El nuevo gobierno generó un panorama de cambio bajo una retórica “pos-neoliberal” que puso al centro del discurso a grupos históricamente marginados: “primero los pobres”. Así también respaldó una serie de demandas relacionadas con el cuidado del medio ambiente que, desde hace algunos años, se venían enarbolando entre grupos de la sociedad civil como la prohibición de semillas transgénicas, y más recientemente, la prohibición del herbicida glifosato.

Este ánimo de cambio, por un lado, se tradujo en nuevos programas y proyectos gubernamentales que introdujeron preceptos de “sustentabilidad” y “agroecología” a la política rural mexicana. Sin embargo, dichos cambios generaron respuestas diversas que, a nivel mediático, se visibilizaron en una serie de disputas entre funcionarios de gobierno y sectores de la sociedad civil, particularmente en relación al uso de semillas transgénicas, el glifosato, y la definición misma de la política de desarrollo rural. Lo que dejó ver, como han expresado algunos autores, el carácter “híbrido” del gobierno autonómico de “la 4T”.

Este trabajo de investigación busca contribuir a dicho debate desde una perspectiva antropológica comparada que toma como “esferas de análisis” el ámbito mediático nacional, es decir, los discursos que se expresan en la prensa y distintos medios de comunicación, y la esfera local del municipio de Hopelchén en el estado de Campeche, un municipio rural del sureste mexicano considerado indígena, en el que coexisten mayas y menonitas que desarrollan una diversidad de esquemas productivos, entre ellos el cultivo comercial de soya transgénica, la milpa, la apicultura, el trabajo asalariado, entre otros.

El análisis de las disputas por la definición de la política de desarrollo rural en el ámbito mediático nacional da cuenta que los discursos que se expresan en diversos medios de comunicación están contruidos desde los “encuadres” de actores hegemónicos; funcionarios y académicos “expertos”, en su mayoría. En los discursos expresados por estos actores se aprecia la construcción de una serie de representaciones sobre “el gobierno” y los sujetos rurales del país que materializan en sus propuestas de política pública rural. Sin embargo, algunas de las representaciones, por ejemplo, sobre “el campesinado”, conllevan una serie de idealizaciones que tienden a escencializar y romantizar a los sujetos rurales y sus realidades.

A través de una mirada etnográfica a un espacio concreto en México, que recuperó las percepciones de funcionarios locales y campesinos mayas y menonitas, y mi experiencia de más de cinco años conviviendo con personas del municipio y con actores de la lucha contra la soya transgénica en la Península de Yucatán, destaco las tensiones y contradicciones entre las prácticas y competencias gubernamentales (de los diferentes niveles), así como entre las construcción discursivas y las prácticas productivas locales y heterogeneidades de productores.

El argumento central de esta tesis es que algunas de las propuestas tanto del gobierno de la “4T” como de grupos de la sociedad civil que se disputan la construcción de la política pública rural son difíciles de anclar en ciertas realidades rurales del país, como la que presenté con el caso de Hopelchén, ya que en su retórica y acción conllevan una serie de supuestos sobre “el campo” que no reflejan la complejidad y heterogeneidad campesina y productiva del país.

Las representaciones suelen ignorar, por ejemplo, las aspiraciones de los productores para sus hijos e hijas. También se invisibilizan las limitaciones económicas y productivas de los sistemas de pequeña escala, el vínculo de la producción campesina e indígena con los mercados comerciales nacionales y globales y sus restricciones, las incompetencias e incapacidades gubernamentales, las evoluciones diversas de los sistemas socioproductivos, entre otras cosas.

Considero que el aporte central de este trabajo es contribuir a reflexionar críticamente de qué manera las propuestas de política pública que se basan en construcciones discursivas que no tienen un anclaje empírico podrían tener serias limitaciones para alcanzar el objetivo de realizar mejorías sustanciales en el ambiente y la calidad de vida de las poblaciones rurales.



# ÍNDICE

<b>CAPÍTULO 1</b> .....	<b>14</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>14</b>
1.1 Disputas por los modelos de desarrollo rural en el México contemporáneo .....	14
1.2 ¿Cómo realicé la investigación? Enfoque teórico-metodológico.....	18
1.3 Disputas por los modelos de desarrollo rural en el México contemporáneo: Una aproximación desde la antropología del Estado, la ecología política y el análisis del discurso .....	20
1.4 Composición de la tesis.....	25
<b>CAPÍTULO 2</b> .....	<b>28</b>
<b>LAS DISPUTAS EN TORNO A LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL EN MÉXICO: ACTORES, DISCURSOS Y POSICIONES</b> .....	<b>28</b>
2.1 La lucha contra los transgénicos en México: de la movilización ciudadana a la institucionalización.....	29
2.1.1 La defensa del maíz mexicano.....	29
2.1.2 Construyendo la coalición por un modelo de desarrollo rural alternativo .....	36
2.2 Las propuestas de la 4T para el campo mexicano: un discurso “antineoliberal”, “inclusivo” y “sustentable”.....	41
2.3 Los funcionarios detrás de la política de desarrollo rural de la 4T.....	54
2.4 Conclusiones .....	61
<b>CAPÍTULO 3</b> .....	<b>63</b>
<b>LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL DE LA 4T EN EL DEBATE PÚBLICO NACIONAL: ¿ENTRE AMIGOS, ALIADOS Y ENEMIGOS?</b> .....	<b>63</b>
3.1 Posiciones en disputa: entre un modelo alternativo, “prácticas agrícolas sustentables” y el mantenimiento del modelo agroindustrial .....	63
3.2 Argumentos de la coalición discursiva por un modelo de desarrollo rural alternativo .....	68
3.2.1 Existencia de un modelo de producción alternativo en México: las agriculturas tradicionales, campesinas e indígenas.....	69
3.2.2 Soberanía alimentaria.....	71
3.2.3 Lo que se dice de su contraparte: la noción de agroindustria en la coalición por un modelo alternativo .....	72
3.3 Argumentos de la coalición discursiva por el mantenimiento del modelo agroindustrial: ideas, conceptos y categorizaciones.....	75
3.3.1 La necesidad de la productividad en un entorno de libre mercado.....	76
3.3.2 La soberanía alimentaria según la Coalición por el mantenimiento del modelo agroindustrial.....	77
3.3.3 Lo que se dice de su contraparte: la noción de la agroecología en la coalición por el mantenimiento del modelo agroindustrial.....	77
3.4 Similitudes argumentativas entre las coaliciones discursivas .....	79
3.5 La construcción discursiva del campesinado, de lo indígena y del gobierno.....	80
3.6 El conflicto en torno al glifosato: disputas discursivas entre las coaliciones.....	84

3.7 Conclusiones .....	92
<b>CAPÍTULO 4.....</b>	<b>94</b>
<b>LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL Y LOS DEBATES EN LA 4T VISTA DESDE LO LOCAL: APROXIMACIONES ETNOGRÁFICAS DESDE HOPELCHÉN, CAMPECHE.....</b>	<b>94</b>
4.1 Contradicciones subnacionales: la política agropecuaria de Campeche.....	98
4.2 La contradicción en el ámbito local: Hopelchén un territorio biocultural maya y “el granero del sureste” .....	102
4.3 Percepciones locales sobre los cambios de la política de desarrollo rural del gobierno de la 4T en el contexto local de Hopelchén.....	106
4.3.1 Percepciones locales sobre Sembrando Vida y Producción para el Bienestar: retos frente a la heterogeneidad campesina y productiva.....	109
4.4 Retos frente a las capacidades gubernamentales: el programa precios de garantía, deforestación, compra y venta de tierras, fumigaciones aéreas y transgénicos.....	115
4.5 La percepción local sobre el glifosato.....	119
4.6 Conclusiones .....	122
<b>CONSIDERACIONES FINALES .....</b>	<b>124</b>
<b>REFERENCIAS.....</b>	<b>128</b>

<b>Ilustración 1.</b> Asamblea Nacional por la Soberanía Alimentaria. Octubre 30, 2008.	30
<b>Ilustración 2.</b> Víctor Suárez junto a líderes campesinos en el inicio del ayuno por la Independencia Alimentaria al pie del Ángel de la Independencia. Diciembre 07, 2009.	56
<b>Ilustración 3.</b> Ubicación del municipio de Hopelchén, en el estado de Campeche.	94
<b>Ilustración 4.</b> Hopelchén en la prensa nacional.	103
<b>Ilustración 5.</b> Doña Wilma comprando elotes a menonita	105

## ÍNDICE DE TABLAS

<b>Tabla 1.</b> Cambios institucionales y nuevos programas en la política de desarrollo rural de la 4T .....	46
<b>Tabla 2.</b> Perfiles de los actores de las coaliciones en disputa.....	65

## **LISTA DE ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS**

“4T” Cuarta Transformación

AMLO Andrés Manuel López Obrador

ANEC Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras

ASERCA Alianza para el Campo y los Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria

CADER Centro de Apoyo al Desarrollo Rural

CCA Comisión de Cooperación Ambiental

CECCAM Estudios para el Cambio del Campo Mexicano

CEDRSSA Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria

CEIIEAPAP Comité Especializado en Identificación e Investigación sobre Efectos Adversos de los Plaguicidas Altamente Peligrosos

CHAPINGO Universidad Autónoma de Chapingo

CIBIOGEM Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados

CICOPLAFEST Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas

CINVESTAV Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

CNA Consejo Nacional Agropecuario

CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos

COFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

COLPOS Colegio de Posgraduados

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ERA Estudios Rurales y Asesoría

GEA Grupo de Estudios Ambientales

GISAMAC Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad

Grupo ETC Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración

INAES Instituto Nacional de Economía Social

INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

INN Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

INPI Instituto Nacional de Pueblos Indígenas  
INSP Instituto Nacional de Salud Pública  
Ma' OGM No a los Organismos Genéticamente Modificados  
OGMs Organismos genéticamente modificados  
ONGs Organizaciones No Gubernamentales  
OSC Organizaciones de la Sociedad Civil  
PND Plan Nacional de Desarrollo  
PY Península de Yucatán  
RAPAM Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México  
SADER Secretaría de Desarrollo Rural  
SEGALMEX Secretaría de Seguridad Alimentaria  
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria  
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte  
T-MEC Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá  
UCCS Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad  
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México  
UZACHI Unión Zapoteco Chinanteca

# CAPÍTULO 1

## INTRODUCCIÓN

### 1.1 Disputas por los modelos de desarrollo rural en el México contemporáneo

En los últimos treinta años grupos económicos con influencia sobre los gobiernos federales de México, impulsaron una serie de políticas y reformas legislativas para promover un modelo de desarrollo rural que impulsó el desarrollo de la agricultura comercial y de exportación favoreciendo con ello al sector agroindustrial del país. Desde la década de 1990, promovieron, incluso, el avance de cultivos transgénicos (OGMs) para supuestamente lograr la seguridad alimentaria nacional y evitar el hambre de millones de mexicanos.

A la par de estas propuestas de desarrollo para el campo mexicano, diversos grupos de ciudadanos, mediante acciones de protesta, mediáticas y legales, hicieron pública su opinión en contra del modelo de desarrollo rural propuesto por los gobiernos mexicanos, y demandaron el regreso de subsidios para los pequeños productores, la recuperación de la soberanía alimentaria, la inclusión de campesinos en la toma de decisiones en las políticas dirigidas al campo, entre otros aspectos.

En años recientes, tras el reconocimiento mundial de la crisis ambiental, las demandas de estos grupos de ciudadanos han sido acompañadas por científicos, activistas, comercializadores, etc., quienes en conjunto han lanzado una serie de críticas respecto a temas ambientales relacionados con los métodos de producción agropecuaria heredados de la Revolución Verde como el uso de plaguicidas y semillas transgénicas. En particular han puesto sobre la mesa los daños a la salud y al ambiente asociados al uso transgénicos y el herbicida glifosato, el agroquímico más utilizado en la producción agrícola mundial.

La entrada de una coalición autonombraada de “izquierda” al gobierno federal mexicano en 2019, con propuestas “alternativas” al desarrollo económico de corte neoliberal, planteó un nuevo panorama para grupos de la sociedad civil cuyas demandas fueron respaldadas en promesas de campaña por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como la prohibición de cultivos transgénicos y el impulso a la soberanía alimentaria. E Incluso algunos de los activistas y académicos que participaron en estas organizaciones fueron incluidos como funcionarios en secretarías vinculadas al desarrollo rural.

La política de desarrollo rural en el nuevo gobierno, dio un giro radical; a diferencia de los sexenios anteriores, los grupos campesinos e indígenas y los pequeños y medianos productores ubicados en las regiones consideradas como “marginadas” del Sur-sureste del país se encuentran en el centro de las políticas y programas dirigidos al campo, y son los más favorecidos en los presupuestos. Además de que se iniciaron programas productivos con contenido social que promueven una transición hacia un modelo productivo ambientalmente más amigable.

Sin embargo, a tres años de la entrada del nuevo gobierno autonombado de la “4T”, un gran número de personas y organizaciones que argumentan riesgos sobre el uso de semillas transgénicas, particularmente la soya, el maíz y el uso del herbicida glifosato asociado a éstos, no han cesado de expresar sus demandas a través de acciones legales, mediáticas y su presencia en diferentes foros de discusión. En estos foros, actores de organizaciones de la sociedad civil (OSC), además de plantear demandas como la protección al ambiente, la salud, la soberanía alimentaria y la importancia del patrimonio biocultural de grupos indígenas y campesinos, han expresado su preocupación respecto a un sector de funcionarios de gobierno de la “4T”, ligados a la agroindustria, que identifican como un peligro para el logro favorable de sus demandas.

El escenario de cambio con la entrada de un “gobierno de izquierda” se torna claroscuro al observar, como han señalado algunos críticos, que este nuevo gobierno es un “híbrido” en el que coexisten personas con posiciones contrastantes y hasta opuestas respecto a ciertos temas. También al considerar el contexto internacional del que el Estado mexicano forma parte, y las características que ha tomado su participación, ahora con el acuerdo comercial T-MEC que el gobierno de la “4T” firmó con los países vecinos del norte. Acuerdo que, según especialistas en el campo mexicano, posiciona al sector campesino en un lugar aún más vulnerable que el que tuvo con su predecesor TLCAN (De Ita; Salgado, 2020).

En este contexto gubernamental heterogéneo y contradictorio, desde mediados de 2020, se desplegó un debate en la prensa nacional y redes sociales entre funcionarios de gobierno aliados y amigos de OSC con posiciones críticas, funcionarios ligados a la agroindustria, empresarios, académicos, activistas, representantes de OSC, entre otros actores, en torno a diversos aspectos vinculados a la política de desarrollo rural a nivel nacional, como al uso de OGMs y plaguicidas, en particular, sobre el herbicida glifosato.

Así vemos cómo la política de Estado, concretamente la política de desarrollo rural en el primer gobierno “de izquierda” en el país, se configura como un espacio social de disputa entre un conjunto de actores que actúan en un escenario público y político abierto internacionalmente.

Las preguntas que me planteé ante este escenario y que busco resolver con esta investigación son: ¿Cuáles son las posiciones de los diferentes actores -dentro del gobierno, sociedad civil, campesinos, actores internacionales, etc.- respecto a la política de desarrollo rural en el gobierno de la 4T? ¿Qué modelos de desarrollo y discursos están en disputa bajo el nuevo gobierno? y ¿Cómo estas disputas y cambios de políticas en el plano nacional cobran concreción y son interpretadas en el plano local? en particular en el municipio de Hopelchén, Campeche, un municipio considerado indígena, donde diversos modelos de producción agropecuario coexisten.

Hopelchén ha sido relevante en el debate público nacional en torno a los transgénicos, el glifosato y la política de desarrollo rural, puesto que es un municipio al que personas y grupos de la sociedad civil toman como referencia para ilustrar las consecuencias ambientales de la implantación del modelo de la Revolución Verde y el uso de semillas transgénicas en el país. En la actualidad Hopelchén es el municipio con más deforestación en la Península de Yucatán y en el país (Global Forest Watch), y a nivel local es considerado “el granero del Sureste”. Algunas organizaciones locales han denunciado que la deforestación, el uso excesivo de plaguicidas y las consecuencias asociadas como la contaminación del agua, la pérdida de fauna y flora, etc., se debe a la expansión de la siembra de soya transgénica (*Munch Kambal* A.C, Colectivo de comunidades mayas de los Chenes, MA’OGM, *Ka Kuxtal Munch Meyaj*).

En el municipio, desde el 2012, cuando el gobierno mexicano al mando de Peña Nieto otorgó permisos para la siembra de soya transgénica, hubo una notoria expansión del cultivo a manos, principalmente, de campesinos menonitas que llegaron al municipio a finales de 1980 y establecieron grandes áreas agrícolas, lo que derivó en la lucha legal y mediática contra la soya transgénica y sus promotores por parte de un conjunto de actores locales y aliados conformados en el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes y Ma’OGM (Echanove, 2016, Torres-Mazuera, 2018).

La lucha de este grupo se enmarcó en una retórica que puso como prioridad a las abejas y la apicultura, una de las actividades de importancia económica y cultural practicada por personas de las comunidades mayas de la Península de Yucatán, y bajo la insignia de Ma’OGM (no a los organismos genéticamente modificados) demanda el cese de la siembra de soya



transgénica, la deforestación, el uso indiscriminado de plaguicidas en la región, la protección de las abejas y la salud de las comunidades, entre otros aspectos vinculados.

El segundo motivo por el cual tomo como caso de estudio Hopelchén, es mi cercanía con campesinos y campesinas de la región, y los recuerdos que guardo del municipio a lo largo de cinco años que trabajé como investigadora y como colaboradora de la Asociación Civil *Muuch Kambal*,<sup>1</sup> una organización conformada por mujeres mayas originarias del municipio que realizan trabajo de base con el objetivo de promover la reflexión en torno a las consecuencias sociales y ambientales del modelo agroindustrial. En 2012, en alianza con diferentes actores (académicos, comercializadores de miel, activistas, abogados, periodistas, etc.), conformadas en el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, las mujeres de esta organización han empujado la lucha contra la siembra de soya transgénica en la Península de Yucatán (PY), y han promovido acciones para posicionar públicamente la importancia de las abejas y la apicultura en el plano nacional.<sup>2</sup>

La presente investigación surge de una serie de reflexiones que tuve en este contexto cuando participé como colaboradora y observadora de la conformación de la Alianza Maya por las abejas de Yucatán *Kabnalo'on*. Esta es una organización creada en 2019 que continua a la lucha contra los transgénicos emprendida por Ma'OGM y el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, que se amplió integrando apicultores y meliponicultoras mayas de los tres estados de la Península de Yucatán, activistas y académicos, y que tiene como fin incidir en políticas públicas agropecuarias (principalmente federales) para mejorar las condiciones de la apicultura y meliponicultura en la Península de Yucatán haciendo frente políticamente a problemáticas como la deforestación, el uso de plaguicidas, los cultivos transgénicos, etc.

En este contexto entre el campo y la incidencia política como parte de organizaciones de la sociedad civil surgió mi interés por indagar sobre la relación sociedad civil-Estado, y los procesos políticos e ideológicos que subyacen a las políticas públicas de desarrollo rural en México. Motivo por el que decidí centrar mi investigación de maestría en las repercusiones políticas de las acciones de la Alianza Maya por las abejas de la Península de Yucatán durante el gobierno de la 4T, que, desde este grupo, se auguraba como un panorama favorable.

Sin embargo, ante la situación de encierro que surgió con la expansión de la pandemia COVID-19, mi indagatoria sobre el tema comenzó en la virtualidad, particularmente en redes

---

<sup>1</sup> En lengua maya: aprendiendo juntos

<sup>2</sup> La Alianza Maya por las abejas de Yucatán *Kabnalo'on*, se desprende de la lucha contra los transgénicos en la Península de Yucatán emprendida por la organización *Muuch Kambal* y Ma' OGM en 2012.

sociales y prensa, lo cual me hizo descubrir el debate “nacional” en torno a los transgénicos, el glifosato y la política de desarrollo rural, que se lleva a cabo en medios de comunicación entre los actores de la lucha contra la soya transgénica en la Península de Yucatán y otros grupos de la sociedad civil situados en diferentes regiones del país, académicos, empresarios y funcionarios del gobierno de la 4T. Lo que me permitió ampliar el horizonte de mi investigación hacia lo que en esta investigación llamo “la esfera pública nacional”.

Considerando mi experiencia de más de cinco años compartiendo con personas en Hopelchén Campeche, me interesó anclar esta serie de discursos y disputas en la realidad del municipio, ya que percibí ciertos contrastes entre las dinámicas productivas que conocí en Hopelchén y lo que se sitúa en los discursos que se debaten en el plano nacional. La concepción de campesino que leí y escuché en la prensa, en discursos de académicos, funcionarios y empresarios, representaban apenas fragmentos de las múltiples realidades que he podido ver y que me transmiten personas de Hopelchén. De ahí mi interés en comprender cómo se construyen discursivamente los sujetos, y cómo estos discursos construyen posiciones y oposiciones que trastocan acciones gubernamentales y que tienen repercusiones a nivel de política pública y en las prácticas y percepciones locales.

La hipótesis de esta investigación descansa sobre la idea de que algunas de las discusiones entre actores del gobierno de la 4T y de actores de OSC que resultan en propuestas de políticas públicas son difíciles de operativizar en ciertas realidades rurales del país, ya que en su retórica y acción conllevan una serie de supuestos sobre “el campo” e idealizaciones esencialistas en torno a diversas categorías (como la de campesino), las cuales sesgan la complejidad y heterogeneidad campesina y productiva del país, puesto que voces representativas de la mayoría de campesinos del país no participan en los debates que tienen lugar en el ámbito público.

Así entonces, el objetivo general de esta investigación es describir y analizar desde un enfoque discursivo las disputas en la esfera pública nacional en torno a la política rural durante los primeros tres años del gobierno de la 4T, y dar cuenta de algunas repercusiones que estas disputas y cambios en el enfoque de la política pública están teniendo en las percepciones locales de campesinos en el municipio de Hopelchén en el estado de Campeche.

## **1.2 ¿Cómo realicé la investigación? Enfoque teórico-metodológico**

Así, en agosto de 2020, en el encierro obligado por la expansión de la pandemia COVID-19, comencé la recopilación de datos empíricos de esta investigación en tiempo real, a través de

medios virtuales, con la revisión y acopio de artículos, libros digitales, notas de prensa, particularmente en los periódicos La Jornada, El Universal y PROCESO, y periódicos independientes como PíedePágina y SinEmbargo. También revisé investigaciones periodísticas independientes de CONTRALINEA, Pumas Atómicas, Mongabay, entre otras. También seguí a periodistas destacados en el ámbito nacional como Carmen Arístegui, así como las redes sociales y páginas oficiales de instancias gubernamentales como SADER, Conacyt, SEMARNAT, la secretaria de Bienestar, y las páginas web de organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace, la Campaña Sin maíz no hay país, Vía Orgánica, la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM), entre otras.

Asimismo, revisé y sistematicé una serie de videos de diversos tipos en la plataforma YouTube (entrevistas, documentales, notas, comunicados de prensa, informes mensuales de instancias de gobierno, etc.) relacionados con temas de la política rural en México como la prohibición sobre el glifosato, el uso de transgénicos, consecuencias del uso de plaguicidas, etc. Participé en distintos “webinarios” relacionados con temas de la política rural en México, y asistí virtualmente al Seminario Internacional “Diálogos hacia la construcción de la *soberanía* y seguridad *alimentaria* en México” realizado por el Instituto de Investigaciones sociales de la UNAM de 20 de octubre al 26 de noviembre de 2020, en el que participaron académicas y académicos expertos en temas de la ruralidad en México y otras latitudes del mundo, funcionarios del gobierno de la 4T particularmente de la SADER, la Secretaría de Bienestar, la Procuraduría Agraria, y de la SEMARNAT, así como personas de organizaciones de la sociedad civil. También revisé planes y programas de desarrollo rural de los distintos niveles de gobierno en el periodo de “la 4T” y anteriores.

A la par realicé 14 entrevistas a productores de Hopelchén que trabajan en los ejidos de Dzibalchén, Xmabén y Cancabchén, además entrevisté por videollamada al encargado del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) de Hopelchén, así como a dos técnicos locales que operan programas federales, uno del programa Sembrado Vida que trabaja en 8 de los ejidos del municipio,<sup>3</sup> y otro del componente “Asistencia técnica” del programa Producción para el Bienestar que opera en los poblados de Xmabén y Chunchintok.

De igual forma pude comunicarme con productores menonitas de Hopelchén, particularmente del campo La Trinidad y Nuevo Durango para recoger sus percepciones sobre los cambios en la política agropecuaria en lo que va del gobierno de la 4T. Esta serie de

---

<sup>3</sup> Dzibalchén, Iturbide, Cancabchén, Ramón Corona, Santa Rita, Xcupil, Chunchintok y Xmabén.

entrevistas fueron transcritas en su totalidad y/o en forma de resúmenes de entrevista, lo cual me permitió hacer un par de escritos sobre los hallazgos de la operatividad de programas de desarrollo rural en Hopelchén, que complementé con información recopilada mediante el seguimiento de páginas web y de Facebook sobre los programas agropecuarios que operan en el municipio. En esta investigación, por cuestiones de confidencialidad y respeto a la confianza que me brindaron los entrevistados, omitiré sus nombres.

La información etnográfica que recolecté de agosto a diciembre de 2019 me sirvió para conformar un *corpus* en formato Excel el cual está integrado por: 1) notas de prensa, 2) documentos de gobierno federal (4T), 3) documentos oficiales Campeche/Hopelchén, 4) Sociedad civil, 5) webinarios y seminarios y 6) entrevistas, que contienen los apartados: Fecha, Instrumento, Fuente, Título, Actores, Resumen, Citas, Categorías de análisis, Notas, Dudas/pendientes, que tienen como fecha más antigua 2001 y como fecha más reciente abril de 2021.

La construcción de este *corpus* me permitió generarme un panorama sobre diversos aspectos discursivos de la lucha contra los transgénicos en México, así como sobre algunos de los cambios a nivel de política pública que introdujo el nuevo gobierno. De igual manera me sirvió para conocer a los perfiles de los diferentes actores que participan en el debate público nacional, sus discursos y sus posiciones respecto a diversos temas relacionados con la política rural.

### **1.3 Disputas por los modelos de desarrollo rural en el México contemporáneo: Una aproximación desde la antropología del Estado, la ecología política y el análisis del discurso**

Para conocer los discursos y situar a los actores participantes en el debate en torno a los transgénicos, el glifosato y la política de desarrollo rural me fue útil el concepto de **Coaliciones discursivas** propuesto por Maarten A. Hajer (1993) quien, a partir del análisis de la construcción de la política ambiental, en particular sobre la lluvia ácida en Gran Bretaña y Países Bajos, propone esta noción para el análisis de aquellos ámbitos en los que los actores sociales no actúan de manera individual, sino que lo hacen a través de grupos o alianzas con base en ideas y perspectivas, como encontré en el caso mexicano.

Para analizar los discursos y las posiciones de los diferentes actores, retomé también la noción de “encuadre” propuesta por Abby Kinchy, quien recuperando a Benford y Snow (2000),

conceptualiza a los cuadros/marcos como “un conjunto de creencias y significados orientados a la acción que inspiran y legitiman las actividades, organización y campañas de movimientos sociales” (2007, p. 21, *traducción propia*). Los marcos, según la autora, son construidos de forma activa (e interactiva) por los participantes de los movimientos sociales, para diagnosticar un problema, proponer una solución y motivar a otros a actuar. En este sentido, las coaliciones discursivas, como las nombro en este trabajo, pueden crear una nueva forma de conceptualizar o categorizar experiencias reuniendo así una multiplicidad de discursos dentro de una “posición de incidencia común” (Kinchy, 2007).

Por otro lado, del análisis de los datos que reuní en el *corpus* obtuve categorías de análisis, las cuales elegí por ser categorías relevantes en la discusión nacional sobre la política rural, es decir, por aparecer con mayor frecuencia como el objeto de los discursos presentes en los diferentes documentos revisados. Estas categorías las analicé retomando aspectos del análisis del discurso empleado en el enfoque de la ecología política. Desde este enfoque se propone que las interpretaciones que los actores tienen sobre aspectos como la naturaleza, la agricultura, los campesinos, el desarrollo, etc., están mediadas por diferentes perspectivas las cuales reflejan las experiencias, los valores culturales y las posiciones de poder de los diferentes actores, comunidades, instituciones y sociedades en cuestión (Escobar, 2008, Durand, 2017).

Los discursos, por lo tanto, generan realidades donde los elementos y prioridades se ordenan con base al contexto sociopolítico de creación del mismo discurso. Actores inmersos en contextos diferentes generan discursos disímiles y, por lo tanto, como analizó Durand (2017), considerando los discursos en torno a la conservación en México, producen naturalezas distintas o desiguales según sus realidades e intereses específicos (p. 16). En este sentido, siguiendo a Norman Long (2007), en este trabajo entiendo que los discursos constituyen “versiones particulares de la verdad” con respecto a objetos, personas o eventos específicos, a través de los cuales los actores sociales van dando sentido y construyendo “la realidad”.

El enfoque constructivista insiste en que no podemos interpretar ni comunicar nada sobre la realidad sin ingresar al mundo de las palabras y conceptos, es decir, a la asignación de significados. Es por esto que, aunque la realidad existe físicamente, no hay una forma inocente u objetiva de describirla, pues está inmersa en una trama permanente de relaciones de poder y conocimiento (Escobar, 1995, Braun y Wainwright, 2001).

El enfoque de la ecología política y el análisis del discurso aplicado al análisis de la política pública me permite explicar cómo las disputas de poder en la sociedad reflejan cambios de

significados en ciertas categorías y en los discursos (Escobar, 2008), lo cual podemos ver, por ejemplo, en ideas asociadas al sistema productivo llamado *milpa*. Para algunos actores este sistema de producción ha sido considerado como una práctica arcaica y de bajos rendimientos agrícolas que debía “modernizarse” mientras que, para otros, en contraste, es considerado parte del “patrimonio biocultural” de las culturas campesinas e indígenas, al cual se le atribuyen cuestiones como la producción de alimentos sanos y ser herencia de conocimientos ancestrales que deberían ser re-valorados.

Así, otro objetivo del análisis del discurso es mostrar que las representaciones de la realidad son parciales y estructuradas de acuerdo a ciertos estereotipos, excluyendo aquellas partes que no encajan o no son útiles para alcanzar cierto fin (Hewitt, 2009). En este sentido retomo también la perspectiva de Tania Murray Li quien en su artículo “*Images of community*” realiza un análisis de los discursos asociados a los imaginarios de comunidad. La autora argumenta que las representaciones producidas en los discursos pueden ser evaluados más que como conceptos con un anclaje empírico, en términos de su eficacia, es decir, en términos de su capacidad para lograr metas estratégicas. En el sentido de que las representaciones brindan un vocabulario de legitimación para realizar solicitudes y presión y pueden tener un impacto tanto en aspectos cotidianos de la vida como en otros ámbitos como las políticas públicas y los programas (Li, 1996).

A este respecto podemos considerar, cómo los discursos en torno al campesinado mexicano que, desde hace unos años, han enarbolado grupos ambientalistas y de defensa de los derechos humanos e indígenas, quienes consideran a los campesinos e indígenas como intrínsecamente ecológicos, es decir que tienden a conservar y utilizar sólo el terreno necesario para producen alimentos “sanos”, han cobrado concreción en el diseño de programas públicos como el Sembrando Vida, el cual se pensó para un pequeño productor o indígena que mantienen un cúmulo de sabiduría (implícitamente ecológica) resultado de haber convivido con la naturaleza y con el territorio (PND, 2019, p 40). Y que está dispuesto a desarrollar prácticas productivas, bajo un esquema de producción “agroecológica”.

Siguiendo este orden de ideas, las representaciones y cambios de significados que se aprecian en los discursos, como menciona Durand (2017), “no son sólo opiniones o sentires vagos sobre una problemática particular, son además proyectos, aspiraciones, acciones y criterios que van cristalizando realidades particulares” (p.117). En tal sentido, los discursos, como “un conjunto de ideas, conceptos y categorizaciones que se producen, reproducen y transforman en

un conjunto particular de prácticas a través de las cuales se da significado a las realidades físicas y sociales” (Hajer, 1993, p.44), juegan un rol importante en la toma de decisiones y acciones políticas, así como en la legitimación de ciertas políticas y percepciones ambientales (Escobar, 2008).

Considerando que lo que está en juego en los discursos de los actores que contempla esta investigación (funcionarios del gobierno de la 4T, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, empresas transnacionales y productores) es la política de Estado, retomo también como enfoque de análisis propuestas de la socio-antropología del Estado, con el fin de teorizar el papel que el Estado mexicano ha tenido en el proceso de desarrollo rural, y su papel en el posible surgimiento de modelos alternativos de desarrollo rural (Kay y Vergara-Camus, 2018, p. 20).

En este sentido, en contra de una visión maniquea que concibe a los Estados como monolíticos u homogéneos, retomo a Wolford *et al* (2013), quienes siguiendo a Bob Jessop (1990, 2007), conceptualizan al Estado como un espacio contradictorio de conflictos de intereses donde los actores despliegan sus estrategias en múltiples niveles. Las estrategias de los diferentes actores se encuentran formadas por una variedad de tácticas, como buscar ubicarse en posiciones estratégicas dentro del Estado, presionar a los actores ubicados en los diferentes niveles de estas posiciones estratégicas y utilizar discursos hegemónicos y contrahegemónicos para convencer o forzar a las autoridades políticas a tomar ciertas decisiones (en Vergara-Camus, 2018, p. 21).

En este trabajo, tal como propuso Gramsci, “el Estado no se restringe al ámbito gubernamental, ni se puede establecer una línea de demarcación clara entre sociedad política y la sociedad civil” (en Escalona, 2011, p. 49). En ese sentido resulta preciso distinguir entre gobierno y Estado, para lo cual retomo a Escalona que considera los gobiernos:

como un conjunto de instituciones expresadas en burocracias de ejecución de programas, de aplicación de justicia y de reelaboración de los marcos legales; y Estado que se refiere a modelos amplios de ordenamiento social, de definición de la ciudadanía y la territorialidad, modelos de los que se pueden derivar las diversas formas de gobierno (Escalona, 2011, p.51-52).

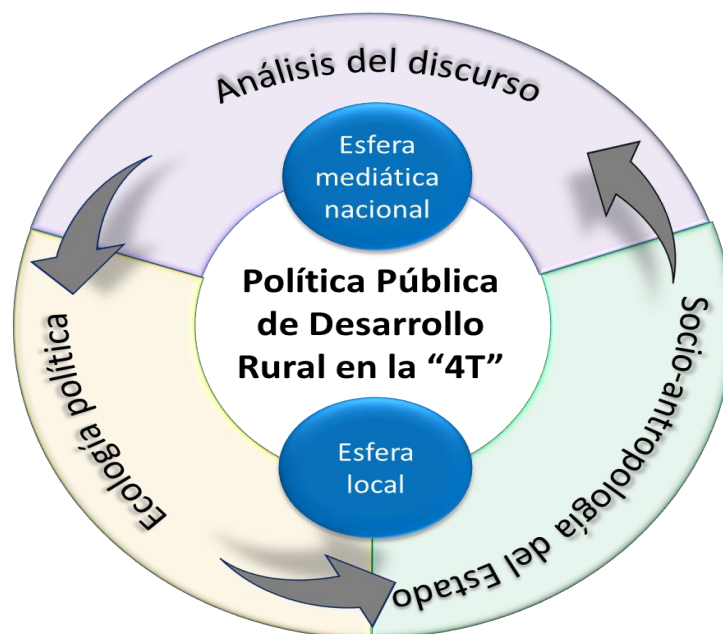
En el caso que describo en este trabajo, la política de Estado se presenta como un ámbito de confrontación y disputa por el ordenamiento de la sociedad, y los agentes de este proceso no son sólo las instituciones gubernamentales en abstracto, sino diversos actores dotados de capacidades diferenciadas o capitales (como diría Bourdieu), actores que son componentes tanto

de la sociedad política como de la llamada sociedad civil (Escalona, 2011:64), y que tienen capacidad de incidir pública y políticamente.

Como se demuestra a lo largo de esta tesis, los conflictos y estrategias que se despliegan en el marco del Estado mexicano se gestan en dinámicas que rebasan el ámbito nacional, por lo cual pensar al Estado mexicano contemporáneo, como apuntan Sharma y Gupta (2006) “*as a multilayered, contradictory, translocalensemble of institutions, practices, and people in a globalized context*” (p. 6), me permite, por un lado reflexionar, sobre la influencia que tanto discursos como acuerdos internacionales (comerciales y de desarrollo) y el modelo económico global han tenido sobre las políticas dirigidas al campo, y ofrecer perspectivas sobre qué tan soberanas pueden ser las propuestas de política pública que se gestan a nivel nacional (Kay y Vergara-Camus, 2018).

Finalmente, para el análisis del caso de estudio que propongo y con el fin de ofrecer una perspectiva comparada entre el debate mediático “nacional” y las percepciones locales de campesinos de Hopelchén, hablo de diferentes “esferas” de la vida pública (Azuela, 2019), relacionadas con la política pública rural. En este sentido, en esta tesis propongo un análisis desde diferentes “esferas” con el fin de distinguir los planos de acción discursiva y remarcar las discrepancias a nivel de discurso que implican las condiciones materiales, sociales y culturales en las que se desenvuelven los diferentes actores.

### Esquema del enfoque teórico-metodológico para el análisis de las “esferas” de investigación





La importancia de enfocarme en la dimensión de la política pública está en que, como menciona Shore (2010), las políticas públicas sirven como discursos, y a la vez como dispositivos de racionalidades de gobierno que pretenden regular la vida social y traducen intereses ideológicos en discursos que se presentan como neutrales, pero que están fincados en relaciones de poder.

Esta idea abre la posibilidad de explorar la densidad de las articulaciones multiescalares observando la redefinición de la adaptación de la política pública a través de las múltiples redes de actores, e intereses que se filtran y materializan en contextos sociohistóricos particulares y realidades heterogéneas. Lo cual supone también que los beneficiarios y facilitadores *in situ* de la política pública no son receptores pasivos, como veremos en el capítulo 3, sino que intervienen en distinto grado en su configuración, ya que son parte de las redes de actores que las ayudan a producir o a ajustar a entornos específicos.

#### **1.4 Composición de la tesis**

Esta tesis está conformada por esta introducción y tres capítulos. El capítulo 2 tiene como objetivo dar cuenta de los antecedentes que hicieron posible plantear alternativas al modelo neoliberal dominante en la política rural en el gobierno de la 4T. En el primer apartado realizo una contextualización del surgimiento del movimiento ciudadano contra los transgénicos en México que busca dar cuenta de los actores y organizaciones que han participado; así también intento explicar de dónde provienen algunos de sus discursos y demandas, y cómo estas han venido modificando ciertas representaciones e imaginarios en torno al campo mexicano, hasta llegar a contexto político de la entrada del gobierno de la 4T (2019), lo que me permite situar al lector en el debate en la esfera pública nacional en torno a la prohibición del glifosato. En el segundo apartado destaco los cambios más significativos en la política dirigida al sector rural en relación a los últimos gobiernos federales de México, a través de algunos de programas dirigidos al campo en el gobierno de la 4T, así como de los perfiles de las personas detrás de estos. De esta manera describo el contexto histórico, político e institucional en el cual se enmarcan las disputas por la política de desarrollo rural en el gobierno de la 4T.

El argumento que desarrollo en estos dos apartados es que el gobierno de la 4T se caracteriza por ser un “gobierno híbrido” en el que participan actores que han formado parte de OSC con posiciones críticas hacia las políticas de desarrollo rural de los últimos treinta años, así como actores que están vinculados directa o indirectamente con la agroindustria y que han participado abiertamente en las legislaciones que guían la política rural actual que, por ejemplo,

han permitido y promovido el uso de semillas transgénicas. Por lo que se concluye que el gobierno de la 4T es, ante todo un “gobierno híbrido” que, inmerso en un contexto global (en el que existen acuerdos comerciales – como el T-MEC- y regulaciones internacionales) se conforma como un marco político e institucional de disputa que ha permitido a sectores de la sociedad civil desplegar nuevas conceptualizaciones, discursos, perspectivas a futuro y propuestas de desarrollo rural (como las propuesta inconclusa de la agroecología, la prohibición de los transgénicos y el logro de la soberanía alimentaria).

En el tercer capítulo, a partir del análisis de los discursos vertidos en notas de prensa, comunicados de organizaciones de la sociedad civil, documentos de gobierno, foros online (webinarios), programas y proyectos de gobierno, situó a los actores participantes en el debate público nacional por la definición de modelos de desarrollo rural para el país en dos coaliciones discursivas. De esta manera, a través del análisis de categorías relevantes presentes en sus discursos, doy a conocer qué modelos de desarrollo defienden, con base en qué nociones, ideas y conceptos, así como sus puntos de encuentro y contrastes. Particularmente destaco el debate mediático e institucional que comenzó a mediados de 2020 (y que se extiende hasta hoy) en torno a la prohibición del herbicida glifosato.

El análisis del debate sobre el glifosato, los transgénicos y la definición de la política rural en México demuestra que los actores participantes son voces en posiciones hegemónicas – funcionarios y académicos “expertos”, principalmente- que, desde sus “encadres” legitiman y dan veracidad a sus propuestas, y haciendo uso de sus diversos capitales extienden sus ideas y discursos hacia el general de la población. Concluyo que en los discursos de los actores de este debate hay categorías esencialistas que romantizan diversas realidades y no dan cuenta de las heterogeneidades, por ejemplo, de los campesinos que existen en el país, ya que este debate carece de una participación de productores locales.

En el capítulo cuatro, considerando lo expuesto en los capítulos anteriores, desde un enfoque de la ecología política, doy a conocer qué ocurre localmente ante estos debates “nacionales” y cambios de política pública en el espacio concreto del municipio de Hopelchén, Campeche. En un primer apartado doy cuenta de las contradicciones que existen a nivel estatal y municipal respecto a los cambios de política rural introducidos el por el nuevo gobierno federal. En un segundo apartado, a partir de las entrevistas que realicé a funcionarios locales y técnicos que operan programas federales como el Sembrando Vida, así como a productores de cuatro localidades del municipio; Dzibalchén, Xmabén, Cancabchén y el campo menonita La Trinidad,

doy cuenta de las percepciones que localmente se tienen sobre algunos temas debatidos en la “esfera pública nacional”.

Desde una perspectiva descriptiva y analítica que considera conversaciones informales que tuve con amigos y amigas de Hopelchén y mi experiencia de cinco años en campo doy cuenta de los retos que enfrenta el gobierno de la 4T y grupos de la SC para transitar hacia un modelo productivo ambientalmente menos perjudicial en un contexto intercultural y con una diversidad productiva tan grande y con una gran disparidad de poderes.

Concluyo que las propuestas de política pública rural de las coaliciones en disputa resultan difíciles de operativizar en realidades tan complejas y heterogéneas como las del municipio de Hopelchén, y que la comprensión de temas relacionados a la producción agropecuaria, como el uso del glifosato adquiere muchos más matices, que las que se pueden leer en prensa, cuando las comparamos con las perspectivas de los productores locales.

La propuesta de esta tesis es contribuir al debate por la política de desarrollo rural, a partir de la problematización desde un enfoque antropológico, tanto de los discursos que circulan en el ámbito mediático como de las percepciones y prácticas productivas locales como ejes de la construcción de la política pública. Considero que los discursos que no reflejen la complejidad y heterogeneidad productiva llevarán al desarrollo de políticas públicas que no tengan un anclaje amplio en ciertas realidades, como demuestro con el caso de Hopelchén. Y, por otro lado, una política sin un discurso con un anclaje empírico que vaya guiando un rumbo tendrán un camino más complejo en el objetivo de realizar mejoras sobre condiciones locales, productivas y con repercusiones positivas tanto en el ambiente y como en la calidad de vida de los y las beneficiarias.

En este sentido destacó la importancia que tienen los estudios etnográficos de las diversas realidades rurales del país para evitar esencializaciones sobre el campesinado y de esta manera evitar posibles consecuencias inesperadas o contrarias, al traducirlas en políticas públicas con fines particulares, tan importantes, como el cuidado del medio ambiente y la salud de las poblaciones.

## **CAPÍTULO 2**

# **LAS DISPUTAS EN TORNO A LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL EN MÉXICO: ACTORES, DISCURSOS Y POSICIONES**

En este capítulo, doy cuenta de las disputas que desde la década de 1990 se generaron en el país en torno a la política de desarrollo rural propuesto por los gobiernos mexicanos, a través de los actores, sus acciones, discursos y posiciones, así como de los antecedentes políticos, sociales, económicos e institucionales, que derivaron en las disputas discursivas en el ámbito mediático nacional respecto a la definición de los modelos de desarrollo rural para el país durante los primeros tres años de gobierno de la 4T (y que se extienden hasta hoy).

En tal sentido comienzo destacando la lucha que, desde finales de 1990, emprendieron un conjunto de actores contra la presencia de maíz transgénico en el país, la cual progresivamente se amplió discursiva y geográficamente al integrar a actores del movimiento contra la soya transgénica en la Península de Yucatán, así como al incorporar los discursos y demandas de académicos-activistas que han destacado una serie de problemas asociados al uso de plaguicidas utilizados en la producción agropecuaria en el país.

Este amplio movimiento encontró cabida en el gobierno de la 4T, debido fundamentalmente a que este gobierno incorporó como funcionarios a activistas y académicos con posiciones críticas, los cuales llevaron a la retórica de planes y programas de gobierno algunas demandas ciudadanas (como la propuesta de la agroecología, la prohibición de los transgénicos y el logro de la soberanía alimentaria). Esto, ha venido cambiando algunos aspectos del discurso gubernamental que por muchos años se enarbolo en torno al modelo de desarrollo rural “ideal” para el país, así como en torno a las poblaciones campesinas e indígenas. También dio lugar a un debate en la esfera pública nacional, entre funcionarios aliados del movimiento contra los transgénicos, ONGs, activistas y funcionarios vinculados a la agroindustria y empresarios con posiciones contrarias que, en esencia, es por la definición de la política de desarrollo rural nacional. Este debate, aunque se despliega en un contexto nacional, se enmarca en un escenario político global del que el Estado mexicano y los actores son parte (Sharma y Gupta, 2016). Y, como veremos, está teniendo una serie de implicaciones a nivel de política pública pero también a nivel social.

## **2.1 La lucha contra los transgénicos en México: de la movilización ciudadana a la institucionalización**

La lucha contra los transgénicos en México tiene más de 20 años, y desde entonces ha tenido diversos logros en el plano político, sin embargo, en lo que va del gobierno de “la 4T”, algunas demandas de este movimiento se han agilizado hasta el punto de su institucionalización, es decir, se han traducido en acciones gubernamentales y políticas públicas (Viola, 1992). Esto, como veremos a lo largo de esta tesis, se debe fundamentalmente a que algunos de los participantes en esta movilización ciudadana se han vuelto funcionarios del gobierno, espacios desde donde han respaldado demandas como la prohibición del maíz transgénico y el glifosato, e incluso han asumido compromisos para hacer posible el objetivo de erradicar el uso de este herbicida hacia 2024.

La historia del movimiento contra los transgénicos en México y los actores detrás de este son un referente sumamente importante para entender cómo se posicionó en la esfera pública nacional el tema asociado a las problemáticas ambientales y sociales del uso de las semillas transgénicas, y más tarde de los plaguicidas, específicamente del glifosato, como elementos utilizados en la producción agroalimentaria. Así como para entender su institucionalización en el gobierno de la 4T, y los aspectos del debate hoy en día en la definición de modelos de desarrollo rural nacional.

### **2.1.1 La defensa del maíz mexicano**

A finales de la década de 1990, en pleno avance del modelo neoliberal, se gestó en el país un movimiento social conformado fundamentalmente por organizaciones no gubernamentales (ONGs), académicos y académicas, organizaciones ambientalistas y organizaciones productivas y campesinas y otras vinculadas al “desarrollo rural” que emprendieron una serie de acciones, desde el ámbito mediático hasta el legal, en oposición a la presencia de maíz transgénico en el país. Estas acciones lograron posicionar en la esfera pública nacional un discurso que ponía en el centro la defensa del maíz, como un elemento de importancia cultural y simbólico para el país y la soberanía alimentaria, y también posicionaron públicamente otros temas, hasta entonces bastante descuidados, como la importancia de la biodiversidad, y el reconocimiento de México como centro de origen del maíz, etc. Mediante esta construcción argumentativa se buscó hacer frente no sólo al maíz transgénico, sino a su principal soporte; las políticas neoliberales

instauradas desde la década de 1980 y particularmente al Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).



**Ilustración 1.** Asamblea Nacional por la Soberanía Alimentaria. Octubre 30, 2008.

Fuente: Carpeta de la Campaña nacional Sin Maíz no hay país

El posicionamiento del tema de los transgénicos en la esfera pública nacional, sin embargo, comenzó en el ámbito académico en 1996 cuando en la revista *Nature* se publicó el artículo del entomólogo de la Universidad de Cornell, John Losey: "*Transgenic pollen harms monarch larvae*", el cual demostró que, en un experimento hecho en condiciones de laboratorio, el polen del maíz transgénico resultó perjudicial para las larvas de la mariposa monarca. Esta publicación causó cierta polémica debido a que la mariposa monarca, por sus dinámicas migratorias, fue considerada el símbolo ambientalista de los tres Estados en la firma del TLCAN (Massieu, 2009, p. 232).

Según Massieu (2009), ante esta publicación un grupo de científicos en México, entre ellos el doctor José Sarukhán, ex rector de la UNAM y reconocido ecólogo solicitaron en una carta al entonces presidente Ernesto Zedillo que tomara las medidas necesarias para regular estos nuevos organismos. En respuesta, en 2002, el entonces presidente, creó la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), con el objetivo de generar un espacio para la formulación y coordinación de las políticas de la administración pública federal relativas a la bioseguridad (como otorgar o no permisos para la

siembra de organismos genéticamente modificados). Quedó al mando de la Comisión, como secretario ejecutivo, el actual titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Víctor Villalobos Arámbula, quien se apoyó en un Consejo Consultivo de Expertos para gestionar esta nueva instancia.<sup>4</sup>

Tres años antes de la creación de CIBIOGEM, la ONG Greenpeace, dio a conocer el hallazgo de contenedores de maíz amarillo transgénico no etiquetado y no regulado, proveniente de Estados Unidos en el puerto de Veracruz (Kinchy, 2007, p.7), lo que puso en evidencia la poca o nula regulación que el gobierno mexicano ha tenido sobre las importaciones de transgénicos, en particular del maíz que, a raíz de los intercambios comerciales con Estados Unidos y Canadá (pactados en el TLCAN), incrementó de manera sustancial (Fitting, 2007).

En tanto, el tema sobre los transgénicos continuó desarrollándose en el ámbito académico. Para inicios del año 2001, el científico Ignacio Chapela y David Quist, ambos de la Universidad de Berkeley, publicaron un artículo, también en la revista *Nature*, en el cual dieron a conocer la presencia de transgenes en variedades nativas de maíz en la región de la Sierra Norte de Oaxaca y en Puebla (Chapela y Quist, 2001). Ante este hecho Greenpeace generó alianzas con académicos, organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas, quienes impulsaron una fuerte campaña mediática, lo que marcó el surgimiento de una movilización ciudadana “nacional” contra el maíz transgénico (Massieu, 2009), bajo la retórica de “defensa del maíz”. Esta movilización se cruza con el descontento de numerosas organizaciones campesinas por las afectaciones causadas por las reformas impulsadas por el modelo neoliberal y el TLCAN, como la migración, el detrimento de subsidios a cultivos como el maíz, frijol, y otros alimentos (Fitting, 2011).

Si bien la investigación de Chapela y Quist fue echada para atrás poco después de ser publicada, una serie de académicos y académicas continuaron la investigación sobre el tema en México. Entre ellas destacan la bióloga molecular, colega del mismo Chapela, Elena Álvarez-Buylla de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En un estudio realizado por el grupo de trabajo de Álvarez-Buylla en conjunto con el Centro de Investigación y Estudios

---

<sup>4</sup> “En el primer consejo están la doctora Michelle Chauvet, del grupo Sociedad y Biotecnología de UAM–Azcapotzalco (la única de ciencias sociales), la doctora Amanda Gálvez, biotecnóloga de la UNAM y el doctor José Luis Solleiro, un personaje polémico porque después de tener una trayectoria en la UNAM de reflexión y discusión sobre biotecnología y transgénicos y promover fondos para investigación al respecto en CamBiotec, con financiamiento proveniente del Internacional Development Research Center (IDRC) canadiense, se transforma en presidente y posteriormente en asesor del consorcio AgroBio. Este consorcio agrupa a las corporaciones agrobiotecnológicas interesadas en la promoción de los transgénicos en México y está conformado por Monsanto, Novartis, Dupont y Savia, esta última mexicana, propiedad de Alfonso Romo” (Massieu, 2009, p. 232).

Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), en 2002, en el contexto del foro “en Defensa del Maíz” organizado por la ONG Centro de Estudios para el Cambio del Campo Mexicano (CECCAM),<sup>5</sup> “la investigadora Sol Ortiz da a conocer resultados parciales del estudio Cinvestav-UNAM, en los que se encuentra que también hay contaminación en Puebla” (Massieu, 2009, p. 233).<sup>6</sup>

A partir de entonces un conjunto de ONGs (Grupo de Estudios Ambientales–GEA, Greenpeace, CECCAM, Unión Zapoteco Chinanteca–UZACHI, Estudios Rurales y Asesoría–ERA, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras–ANEC, entre otros), y autoridades ejidales del estado de Oaxaca solicitaron a la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA)<sup>7</sup> tomar medidas respecto a la contaminación transgénica del maíz nativo encontrado en las investigaciones y respecto a las afectaciones económicas, sociales y culturales que venía generando (Castro, 2012, Massieu, 2009).<sup>8</sup>

A estos sucesos le continuaron diversos eventos como la presentación de los libros: “La vida en venta: transgénicos, patentes y biodiversidad” y “Transgénicos, ¿quién los necesita?” (Massieu, 2009, Bartra *et al*, 2005). La recién creada CIBIOGEM, no hace nada al respecto, y más bien continúa con un impulso y promoción a los cultivos transgénicos asociando estos al logro de la soberanía alimentaria y a la productividad (Serratos, 2009).

Ante la falta de respuesta por parte de los funcionarios que dirigían las instancias encargadas del tema hacia los argumentos generados por académicos participantes del movimiento, en 2002 surge la Red en defensa del maíz,<sup>9</sup> y la campaña “Sin maíz no hay país”, promovida por las mismas ONGs ambientalistas y de desarrollo rural, a las que se sumaron

---

<sup>5</sup> CECCAM es una ONG fundada y dirigida por Ana de Ita, una académica de amplia trayectoria que ha documentado los procesos sociales relacionados a las consecuencias de la entrada del modelo neoliberal en el campo mexicano, y que ha tenido una participación muy activa en diferentes foros y eventos en el contexto de la lucha contra el maíz transgénico, como en la creación de la Red en Defensa del maíz.

<sup>6</sup> Ambos grupos de investigación tomaron muestras de 20 localidades en Oaxaca, 2 en Puebla, y de la tienda de DICONSA (Distribuidora e Impulsora Nacional Conasupo, S.A. de C.V.) en Ixtlán de Juárez. Los resultados del CINVESTAV fueron entregados el 14 de septiembre de 2001. Su informe declaró que 15 de 22 localidades mostraron evidencia de materia transgénica (<http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=275>) (Castro, 2012, p. 86-87).

<sup>7</sup> La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) fue creada por Canadá, Estados Unidos y México en 1994, cuando entró en vigor el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN). La CCA tiene como misión contribuir a la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente de América del Norte a través de la cooperación y la participación ciudadana (<http://www.cec.org/es/>).

<sup>8</sup> Este hecho resultó en la publicación en 2004 del informe realizado por Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte: “Maíz y biodiversidad. Efectos del maíz transgénico en México”, el cual ha sido citado en distintos debates internacionales sobre los transgénicos (Castro, 2012).

<sup>9</sup> Según anuncia en su página, la Red en Defensa del maíz está integrada principalmente comunidades indígenas y campesinas, así como por organizaciones de la sociedad civil, que luchan en contra de la siembra de maíz transgénico, la autonomía y la soberanía alimentaria (<http://redendefensadelmaiz.net/>).



diversos colectivos de semillas, asociaciones de productores orgánicos y académicos, impulsando así una discusión en el plano mediático nacional sobre los riesgos asociados a los cultivos transgénicos, que puso en el centro la defensa del maíz, bajo argumentos de protección al origen del grano por ser México el centro de origen y domesticación (Massieu, 2009).

En este contexto el sistema de producción llamado *milpa*, visto anteriormente desde los gobiernos mexicanos como una práctica arcaica y de bajo rendimiento agrícola que debería modernizarse, comienza a ser reconocido en el discurso público como sistema ligado a las culturas indígenas del país, y como un “patrimonio biocultural”, que da identidad y que ha ayudado a la producción de alimentos sanos y a la soberanía alimentaria de las poblaciones asentadas en el territorio mexicano, desde tiempos ancestrales.

De acuerdo con Fitting (2011), la Red en defensa del maíz se propuso cambiar la perspectiva oficial, centrada en el crecimiento económico asociado a la productividad, y llevó el foco de atención al riesgo del flujo génico entre maíz transgénico y los maíces criollos, y la soberanía alimentaria nacional. La Red además colocó en el debate el hecho de que los campesinos quienes son afectados por las regulaciones y decisiones gubernamentales, no estaban siendo tomados en cuenta.

En el proceso de politización del movimiento el Partido de la Revolución democrática (PRD, precedente de MORENA) organizó foros sobre bioseguridad por todo el país. El entonces diputado de este partido Víctor Suárez, entonces líder de la ANEC, y actual subsecretario del Organismo Público Descentralizado; Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX antes CONASUPO y eventualmente DICONSA), está entre los principales promotores (Massieu, 2009).

Mientras tanto la Academia Mexicana de Ciencias (que ha mantenido una posición a favor de los transgénicos) lanzó una iniciativa de ley sobre Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados que ganó la aprobación en el Senado, gracias a que fue promovida por el científico de la UNAM, Premio Príncipe de Asturias, Francisco Bolívar y el senador perredista Rodomiro Amaya (Castro, 2012). Las organizaciones CECCAM, Greenpeace, GEA, y algunas personas a título individual, generaron comunicados y protestas argumentando que esta iniciativa no fue discutida abiertamente (Massieu, 2004). Otro argumento que se lanzó en prensa y comunicados fue que tal ley es más una promotora que reguladora de los transgénicos por lo que se le apodó “Ley Monsanto” (Massieu y San Vicente, 2006, Pérez, 2008). En este

escenario Víctor Villalobos, entonces subsecretario de Agricultura, “firma al margen de la ley”, con Canadá y Estados Unidos, un acuerdo que establece que la norma máxima de contenido de OGMs en los países del TLCAN será 5%, ante lo cual se generaron una serie de protestas (Massieu, 2009, p.234).

En diciembre de 2005, se aprueba la Ley de Bioseguridad. Las protestas a nivel mediático se intensifican encabezadas por los actores participantes hasta entonces en la lucha (Massieu y San Vicente, 2006). Aparece entonces la campaña: "Sin maíz no hay país", que se inaugura con una serie de eventos (conferencias, exposiciones y eventos) en el Museo de Culturas Populares en la Ciudad de México. Este foro logra una amplia convocatoria y abre un debate respecto a las repercusiones del maíz transgénico y sobre la soberanía alimentaria en México (Massieu, 2009, p. 235).

Paralelamente la industria biotecnológica, organizada en México en el Consorcio AgroBio,<sup>10</sup> presiona constantemente para que se libere la siembra de transgénicos, argumentando que es la solución a los problemas de la agricultura y la alimentación en México (Solleiro, 2004). Según Massieu (2009) las corporaciones y sus aliados argumentaron que “sólo con la siembra de maíz transgénico se superará el problema de la insuficiencia de la producción interna de maíz” (p. 231).

En este contexto, en 2006, surge en la escena pública la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), una Asociación Civil conformada por académicos y científicos de diversas instituciones del país con formaciones en ciencias biológicas y sociales que, como veremos más adelante, comparten como “terreno común” o encuadre una posición crítica respecto a diversos temas sociales, culturales y ambientales, y que, sobre todo, se interesan en las repercusiones ocasionadas por la presencia de semillas transgénicas en el país y las afectaciones sociales y ambientales causadas por el uso de plaguicidas. De acuerdo con Massieu, “una de sus propuestas más importantes es tener una postura crítica ante la presión de las corporaciones por introducir las variedades comerciales existentes de maíz transgénico en México” (2009, p. 235).

La fundadora de esta Asociación Civil es la científica Elena Álvarez-Buylla, actual titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quien, como mencioné, formó parte

---

<sup>10</sup> Como mencioné arriba citando a Massieu “Este consorcio agrupa a las corporaciones agrobiotecnológicas interesadas en la promoción de los transgénicos en México y está conformado por Monsanto, Novartis, Dupont y Savia, esta última mexicana, propiedad de Alfonso Romo” (p. 232)

del equipo de la UNAM que hizo los estudios de flujo génico en 2002, cuando se descubrió la contaminación en maíces nativos en Oaxaca y Puebla. De acuerdo con Massieu (2009),

El acto inaugural de la UCCS tuvo gran convocatoria y asistieron académicos, estudiantes y participantes de ONGs. En marzo de ese año la UCCS promueve un foro sobre maíz transgénico en el Foro Cultural San Ángel. Participan Armando Bartra, intelectual estudioso de las cuestiones agrarias en México de larga trayectoria, Daniel Piñeyro, ecólogo de la UNAM, Alejandro Espinosa y Antonio Turrent, fitotecnistas especialistas en maíz del INIFAP (p. 235).

Lo debatido en este foro fue retomado por los principales medios de comunicación del país, así entonces la UCCS se volvió parte del dinámico movimiento contra el maíz transgénico, y una base científica y generadora de conocimientos que, en lo sucesivo, ayudó a fortalecer las demandas de las organizaciones sociales mediante la generación de argumentos técnico-científicos, los cuales tendrán una serie de repercusiones políticas más adelante, como veremos.

Antes del término del periodo de protección del maíz pactado en el TLCAN, en 2008, organizaciones, académicos y académicas echaron a andar la Campaña Nacional en Defensa del Maíz, desde la cual se enarbolaron una serie de argumentos contra “la contaminación” y la “falta de bioseguridad” (argumentos que surgieron en investigaciones científicas), los cuales dieron legitimidad a las demandas respecto a la negativa hacia la liberación de semillas de maíz transgénico. En esta campaña además se solicitó al Estado mexicano apoyos a la producción nacional del grano y la inclusión de los campesinos en la toma de decisiones políticas. De acuerdo a Massieu (2009), “esta campaña es más amplia y hay más sectores sociales convocados. Por ejemplo, un grupo de actores se manifiestan en el Zócalo y siembran simbólicamente plantas de maíz en los primeros días de agosto” (p. 236).

En el ámbito político nacional, sin embargo, menciona Massieu (2009) que continúa la intención de la agroindustria para promover los cultivos transgénicos en el país, Dow Chemical y Monsanto, a través de CINVESTAV piden las primeras solicitudes para pruebas de campo en el marco de la nueva Ley de Bioseguridad.

El diputado Víctor Suárez promueve y convoca a los interesados para movilizarse y que se detengan estas pruebas. Se encuentra que las solicitudes violan la nueva ley y se logra que se suspendan. Un amplio grupo de académicos, ONGs y organizaciones campesinas firman el “Manifiesto en defensa del maíz”, para exigir que no se siembre maíz transgénico y cuidar su diversidad (Massieu, 2009, p.235).

En el contexto de otorgamientos de permisos por parte del gobierno para la siembra de cultivos transgénicos, la fundadora de la UCSS junto con su colega, la bióloga Alma Piñeyro, del

Laboratorio de Genética Molecular, Evolución y Desarrollo de las Plantas del Instituto de Ecología de la UNAM, expresaron, con base en sus hallazgos, las carencias que existen en el país en cuanto a garantizar el biomonitorio y la bioseguridad. Hicieron un llamado a las autoridades para fortalecer el sistema de bioseguridad mexicano antes de permitir, en cualquier etapa, la liberación de OGM's en el país (San Vicente-Tello, 2011).<sup>11</sup> Siguiendo a la autora,

...para ellas [las investigadoras], la siembra a campo abierto de las líneas transgénicas disponibles por ahora en maíz, implicaría riesgos importantes al ambiente, a la economía, y a la salud de los mexicanos, así como a nuestra soberanía alimentaria (p.157).

Para 2013, actores del movimiento crítico hacia los transgénicos presenta una demanda colectiva firmada por 53 individuos y 20 organizaciones de productores, indígenas, apicultores, grupos de derechos humanos, ambientalistas, consumidores (Castañeda y Massieu, 2015 en González y Castañeda, 2019, p.9). Esta demanda dirigida contra la SAGARPA (ahora SADER) y SEMARNAT, así como hacia cinco compañías transnacionales finalmente resultó en la suspensión del otorgamiento de permisos de liberación comercial de maíz transgénico y dio inicio al juicio sobre este tema (González y Castañeda, 2019, p.9).

Con esta acción el movimiento no sólo logró la ilegalidad de la siembra de maíz transgénico en el país, además posicionó públicamente temas como los riesgos para la conservación de las variedades nativas de maíz, los peligros de permitir que los recursos genéticos sean controlados por las empresas biotecnológicas, además de presentar información a la sociedad en general sobre muchos aspectos de las repercusiones sociales, culturales y en términos de derechos humanos que tuvo y tendría el cultivo de transgénicos de seguir llevándose a cabo en el país (González y Castañeda, 2019, p.9).

### **2.1.2 Construyendo la coalición por un modelo de desarrollo rural alternativo**

Si bien, hasta la acción legal colectiva, el movimiento contra el maíz transgénico se mostró públicamente como un “movimiento nacional”, actores ubicados en ciertas regiones del país como la Península de Yucatán no habían expresado una opinión pública respecto a la problemática sobre los transgénicos. No es sino hasta 2012, cuando el gobierno federal aprueba un permiso para la siembra a escala comercial de soya transgénica en 253 000 hectáreas

---

<sup>11</sup> En el análisis realizado de las solicitudes, observaron que se carecía de información fundamental que permita garantizar la bioseguridad de las variedades nativas, variedades mejoradas e híbridos de maíz (*Zea mays* subespecie *mays*), así como sus parientes silvestres (otras especies y subespecies del género *Zea* existentes en nuestro país) (San Vicente-Tello, 2011, p.157).

distribuidas en 7 estados de la república, entre ellos, los tres estados que conforman la Península de Yucatán, que emerge en la escena pública un movimiento ciudadano contra los transgénicos conformado en el Colectivo Ma' OGM (Torres-Mazuera, 2018).<sup>12</sup>

El Colectivo Ma'OGM conjuntó a una serie de actores vinculados al sector apícola y al desarrollo rural de la Península, también participaron académicos, periodistas y abogados. Este conjunto de actores, usando como bandera de lucha la apicultura (una actividad de importancia económica, ambiental y cultural que se desarrolla en comunidades mayas de la Península de Yucatán), promovieron una serie de acciones mediáticas y legales contra las instancias gubernamentales que otorgaron los permisos de liberación de soya transgénica para mostrar su inconformidad hacia la decisión gubernamental (observación participante, Torres-Mazuera, 2018).

Los argumentos de los actores del Ma'OGM, en primera instancia giraron en torno a los perjuicios que la siembra de soya transgénica estaba teniendo para la apicultura y los apicultores, así como a la ausencia de una consulta previa a las comunidades mayas donde se otorgaron los permisos. Esta lucha fue acompañada por investigaciones científicas que, por ejemplo, demostraron daños culturales y ambientales respecto a la coexistencia de la soya transgénica y la apicultura (Vandame, 2012). Estos conocimientos científicos permitieron ampliar los argumentos sobre las afectaciones que se veían a nivel local, así como dar legitimidad científica y validez a las demandas de este grupo (observación participante).

Los actores del movimiento destacaron además aspectos como la deforestación indiscriminada que hay en algunos municipios de la Península de Yucatán, la contaminación del agua debido al excesivo uso de plaguicidas en la región y las características del suelo, las afectaciones que algunos plaguicidas causan a las abejas y a la salud de los habitantes, entre otras cosas (observación participante).

Este movimiento comenzó así a posicionar en el ámbito mediático nacional, particularmente, las afectaciones causadas por el herbicida glifosato (asociados a los cultivos transgénicos), lo cual se vinculó a la pérdida de las abejas generando con ello un imaginario sobre las afectaciones de los plaguicidas, y las abejas. Esto a pesar de que propios académicos colaboradores del movimiento no pueden aseverar que el glifosato sea el único factor que interviene en la pérdida de colmenas en la Península (comunicación personal). Sin embargo, el

---

<sup>12</sup> Ma' significa no en lengua maya, Ma'OGM quiere decir: no a los organismos genéticamente modificados.

argumento se ha popularizado tanto mediáticamente, al punto que una de mis primas, totalmente ajena a la problemática, que actualmente cursa la secundaria en la ciudad de México, me ha llegado a decir que sabe que el glifosato mata abejas.

El posicionamiento de Ma'OGM contra los plaguicidas utilizados en la agroindustria, particularmente del glifosato, se suma a la visibilización de una serie de investigaciones periodísticas y científicas respecto a las repercusiones sociales y ambientales en diversas localidades del país y en países de Latinoamérica como Argentina, que han seguido el mismo modelo de la Revolución Verde (Cortina, et. al, 2017, Nivia, 2000, Ribeiro, 2020, Rendón-Von Osten y Dzul-Caamal, 2017, etc.).

En el movimiento contra la soya transgénica, encabezado por Ma'OGM, se exaltaron particularmente las fumigaciones aéreas y terrestres a manos de agroempresarios que han causado la muerte de miles de abejas, perjudicando con ello a apicultores mayas. Lo cual se une a la demanda de otra serie de derechos como el derecho a la salud y a un medio ambiente sano y a la propuesta de formas más sustentables de producción, entre las cuales la apicultura tiene un papel fundamental debido a los muchos servicios que otorga a la producción alimentaria y los ecosistemas (Vandame, 2012).

El uso de los plaguicidas, además, está ampliamente relacionada con el monopolio empresarial agroalimentario, lo que permite enmarcar las demandas de este grupo en el sistema mismo de producción, el cual responde al modelo productivo en el que se sostiene el sistema agroalimentario global (Pérez, 2020) en el cual el Estado mexicano participa activamente.

El movimiento promovido por el Ma'OGM en 2012, en 2019 se amplió con la generación de la Alianza Maya por las abejas de la Península de Yucatán *Kabnal'on*, una organización conformada por algunos de los mismos actores del Ma'OGM, académicos de diversas instituciones del país y la región, activistas, ONGs y apicultores y meliponicultoras de los tres estados de la Península, algunos de los cuales en los últimos años sufrieron afectaciones directas sobre sus colmenas debido a fumigaciones a maíz, soya y hortalizas como chile habanero en parcelas aledañas a sus apiarios (observación participante, Pérez, 2020, Persistente uso de plaguicidas afecta abejas en Yucatán, 2019).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Nota de prensa basada en el BOLETÍN FORO APICOLA. San Francisco de Campeche, Campeche. 29 septiembre de 2018.-En el marco del primer foro apícola EL IMPACTO DE LOS AGROQUÍMICOS EN LA APICULTURA: RETOS Y SOLUCIONES organizado por la Universidad Autónoma de Campeche y *Munch Kambal* A.C.

Las demandas promovidas por Ma'OGM y la Alianza Maya por las abejas de la PY se vieron altamente fortalecidas por la recomendación emitida en diciembre de 2018 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto a las afectaciones a derechos como a la salud y a un medio ambiente sano por el uso de plaguicidas considerados de alta peligrosidad.

Esta recomendación se dio en respuesta a escritos dirigidos a la Comisión en 2017, por 43 personas de organizaciones, entre las que destacan Fernando Bejarano de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM), e investigadores como Omar Arellano de la UNAM, en los que se acusa a instancias gubernamentales como SEMARNAT, SADER, COFEPRIS y SENASICA por las omisiones ante los daños ocasionados a la población por la utilización de plaguicidas de alta peligrosidad permitidos en México. La recomendación de la CNDH está dirigida a estas instancias con la finalidad de advertirles que las omisiones para adoptar acciones normativas, administrativas y de políticas públicas en el manejo de este tipo de plaguicidas, constituyen violaciones graves a por lo menos, cinco derechos humanos (Pérez, 2020, Recomendación CHDH, 2018).<sup>14</sup>

En abril de 2019, tras unos meses de la entrada del gobierno de la 4T, los titulares de la SEMARNAT, SADER, SENASICA y COFEPRIS aceptaron la recomendación hecha por la CNDH, y se comprometieron a ejecutar las acciones pertinentes de planeación, regulación, capacitación y coordinación conjunta para cumplir lo señalado en la recomendación. Y conformaron el Comité Especializado en Identificación e Investigación sobre Efectos Adversos de los Plaguicidas Altamente Peligrosos (CEIIEAPAP) (Pérez, 2020, p.226).

La conformación de este comité, si bien marca un cambio sustancial con lo que acontecía anteriormente respecto a los permisos sobre la importación, venta y uso de los plaguicidas, requerirá voluntad política, cambios legislativos, coordinación y un aumento de las capacidades de las diferentes secretarías participantes, para que no repita la historia de su antecesora, la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST), que se caracterizó por un deficiente papel en la regulación de estas sustancias

---

<sup>14</sup> Derecho al agua salubre, derecho al medio ambiente sano, derecho a la información, derecho a la salud en su modalidad de Protección y Prevención de Enfermedades y derecho a la alimentación (para ampliar la información sobre cómo se ven afectados estos derechos ver Pérez, 2020).

y la aplicación de la ley para garantizar los derechos de la población en contacto directo e indirecto con residuos tóxicos como los plaguicidas (Albert, 2019).<sup>15</sup>

Otra acción importante a cargo de las Secretarías de Economía, Medio Ambiente, Salud y Agricultura, precedente del debate que se expondrá en el siguiente capítulo, fue el retiro de la licencia a 17 plaguicidas catalogados como de alta peligrosidad a partir del mes de febrero de 2020, bajo el argumento de garantizar el acceso efectivo a la salud y a un medioambiente sano para los mexicanos (Pérez, 2020, COFEPRIS, 2019). Respecto a esto uno de los promotores más importantes sobre el tema de la regulación de los plaguicidas en México, que, como mencioné también fue promotor de la recomendación de la CNDH, el director de RAPAM, Fernando Bejarano, en una entrevista mencionó:

Esta es una buena medida —dice—, pero es insuficiente, porque aún hay muchas sustancias a las que se les tendría que cancelar el registro sanitario [...] Lo importante sería en todo caso, lograr prohibir otras sustancias que si se están utilizando (Gómez, 2019, párr. 17).

Al retiro de las licencias, le siguió la negativa de SEMARNAT hacia la importación de 67mil toneladas de glifosato. Esta decisión, a diferencia de la anterior, fue bastante aplaudida por actores del movimiento ciudadano contra los transgénicos y el glifosato, hasta el punto que se lanzaron comunicados y notas de prensa respaldando la acción (AN/GH, 2020a). En contraposición actores agroindustriales, particularmente del Consejo Nacional Agropecuario, se pronunciaron públicamente sobre la medida argumentando que esta acción representa una amenaza hacia el sector agroalimentario (AN/GH, 2020b). Lo que, como veremos más adelante, suscitó un fuerte debate en medios nacionales.

A nivel internacional, la acción de SEMARNAT provocó que embajadas de 22 países, entre ellos Estados Unidos y Alemania, mencionó Adelita Vicente Tello, actual directora del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables, expidieran cartas diplomáticas a la secretaria cuestionando la aplicación del principio precautorio. En el caso de E.U, ofrecieron asesorar a la dependencia respecto a las evidencias científicas sobre efectos a la salud y el medio ambiente, e incluso algunos sus comunicados hicieron alusión a posibles incumplimientos a las obligaciones a las que el Estado mexicano se ha comprometido bajo el TMEC (Enciso, 2020, Barragán, 2021).

---

<sup>15</sup> Albert (2019) identifica como obstáculos al desempeño de la CICOPALAFEST que “durante su vigencia no se logró establecer un marco legal integral para el control de estas sustancias y, en particular, que dicha comisión nunca dispuso de los medios financieros, las instalaciones, ni los recursos humanos y técnicos esenciales para cumplir plenamente con sus responsabilidades. Estas deficiencias podrían indicar una falta de voluntad política o una omisión consciente en respuesta a posibles presiones de la industria de plaguicidas” (párr. 16).



Vale aclarar que estas comunicaciones políticas internacionales, en algunos casos, fueron fomentadas en peticiones que empresas de agroquímicos transnacionales hicieron a dependencias federales encargadas de las relaciones internacionales. Un ejemplo de esto fue que Stephanie Murphy, directora de Asuntos internacionales de Gobierno y Comercio de Bayer, pidió a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos considerar si podían abordar el tema de la prohibición de importación del glifosato, desde las obligaciones del nuevo Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, según se puede apreciar en una serie de oficios revelados por una investigación periodística para Aristegui Noticias (Barragán, 2021).

La recomendación de la CNDH, y las acciones emprendidas por funcionarios del nuevo gobierno como la prohibición de importación de 67 mil toneladas de glifosato, sin duda abonaron al posicionamiento de los discursos de los actores de los movimientos civiles mencionados que, ante el nuevo escenario político de la entrada del gobierno de “la 4T”, se aglutinaron en uno solo para dar fuerza a la lucha contra el herbicida glifosato y a los cultivos transgénicos.

La lucha del movimiento, sin embargo, transcurre en medio de una serie de disputas políticas y discursivas que rebasan el ámbito nacional. En este contexto algunas premisas van superponiéndose a las otras y generando transformaciones a nivel de política pública pero también a nivel social a partir de cambios en los significados de ciertas categorías y discursos que circulan públicamente.

En el siguiente apartado explico, desde los cambios en el enfoque de la política de desarrollo rural introducidas por el gobierno de la 4T, y los actores detrás de estos, cómo el marco político de un “gobierno híbrido” ha dado cabida a que una serie de discursos sobre los modelos de desarrollo agropecuario, el gobierno y los campesinos circulen en el ámbito mediático nacional y estén redefiniendo aspectos de la política de desarrollo rural en México.

## **2.2 Las propuestas de la 4T para el campo mexicano: un discurso “antineoliberal”, “inclusivo” y “sustentable”**

En diciembre de 2018, por primera vez en México, fue electo de manera democrática un gobierno autonombrado de izquierda. Este gobierno simbolizado y encabezado por Andrés Manuel López Obrador, autodenominado de la Cuarta Transformación o “4T”,<sup>16</sup> se propone en

---

<sup>16</sup> “Hemos llamado a este mandato popular y social la Cuarta Transformación, porque, así como a nuestros antepasados les correspondió construir modelos de sociedad para remplazar el orden colonial, el conservadurismo aliado a la intervención extranjera y el Porfiriato, a nosotros nos toca edificar lo que sigue tras la bancarrota neoliberal” (PND 2019-2024, p. 8)

el discurso como un gobierno “pos-neoliberal”, en contraposición al modelo neoliberal que siguieron los gobiernos desde De la Madrid (1982-1988) y los gobiernos posteriores de Salinas de Gortari, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto (1998-2018).

El modelo neoliberal o “régimen neoliberal”, como algunos autores lo han llamado, se instauró en el país por impulso de las principales instituciones financieras mundiales, bajo la retórica de que:

el bienestar humano puede impulsarse con mejores resultados mediante la liberación de las libertades y aptitudes empresariales individuales en un marco institucional caracterizado por derechos sólidos de propiedad privada, libre mercado y libre comercio. El papel del Estado es crear y preservar un marco institucional para tales prácticas (Harvey, 2005, traducción de Centeno, 2021, p. 168).<sup>17</sup>

De acuerdo con Centeno (2021), “para consolidar este orden, la agenda neoliberal moldeó un nuevo rol para el Estado, que pasó de dirigente y motor del capitalismo nacional a policía protector (y ocasional árbitro) del capital nacional y extranjero” (p.170).

Así en México, como en otros países de Latinoamérica, el modelo económico neoliberal, avanzó a través de reformas legales como la reforma al Artículo 27 constitucional y reformas económicas como la eliminación del control de precios sobre productos agrícolas básicos como el maíz y el frijol, así como mediante la firma de acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, lo cual según Herrera Tapia (2009) marcó la incorporación de México a la dinámica de globalización. Siguiendo al autor:

En el marco de estas grandes transformaciones sociales surgen programas de apoyo al campo que reorientan la concepción de los mismos hacia la aminoración de los efectos colaterales del TLCAN en la mayor parte del sector rural (campesino), y hacia el impulso comercial de aquellos productores rurales considerados con potencial competitivo como parte de las medidas posteriores a la firma de los acuerdos internacionales (p. 27)

Como consecuencia de ello, objetivos del “libre mercado” como mayor crecimiento económico y mayor prosperidad han llegado sólo a unos cuantos privilegiados. En tal sentido el gobierno de “la 4T” propone hacer frente a las desigualdades generadas por el neoliberalismo, ampliando su presencia en sectores que ya habían sido relativamente liberados como el sector

---

<sup>17</sup> David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford, University Press, 2005, p. 2. Cita original: “Neoliberalism is in the first instance a theory of political economic practices that proposes that human well-being can best be advanced by liberating individual entrepreneurial freedoms and skills within an institutional framework characterized by strong private property rights, free markets and free trade. The role of the state is to create and preserve an institutional framework appropriate to such practices”.

productivo y agroalimentario. Es decir, propone una mayor intervención de Estado en ciertos sectores, aunque en un contexto Estatal, que autores como Peck and Tickell (2002) han llamado "*roll-out neoliberalism*.", es decir en el cual hay un despliegue de intervenciones y regulaciones de instancias internacionales, tanto de instituciones gubernamentales como comerciales y financieras, que tienen implicaciones tanto políticas como sociales.

En la transición a un modelo neoliberal, uno de los sectores más perjudicados fue en de los pequeños productores campesinos e indígenas del país, los cuales pasaron de ser considerados “un motor del desarrollo” en décadas anteriores a ser representados como un sector “pobre” e “improductivo” más tarde. Bajo tal consideración la política agropecuaria federal, a partir del gobierno de Salinas, centró sus políticas y programas para el campo en los sectores con “más potencial productivo”, sobre todo en el norte del país (Robles, 2017). En tanto que para los pequeños productores campesinos e indígenas con mayor presencia en el centro y sur-sureste se creó una política social de tipo asistencialista que, más allá de favorecer la capacidad productiva de los campesinos, se encargó de subsidiar el consumo de sus vulnerabilizadas economías (PND 2019-2024, Herrera Tapia, 2009).

Entre otras muchas consecuencias, la implantación de las políticas neoliberales en el medio rural mexicano profundizó la desigualdad entre regiones, así como entre los pequeños y medianos productores y los grandes productores. En la actualidad en ciertas zonas de las regiones Noroeste y Noreste predominan unidades de producción de mayor escala económica, los productores tienen acceso a tecnologías e insumos que incrementan la productividad y la producción tiene una marcada orientación hacia cultivos de alto valor comercial, con una proporción importante de ellos destinados a la exportación. Las regiones del centro y sur-sureste, en cambio, con algunas excepciones, como el municipio de Hopelchén en el estado de Campeche (el cual pretendo analizar en el capítulo 4 de esta investigación), mantienen condiciones de rezago tecnológico, escasez de recursos e insumos (PND 2019-2024).

En la política agropecuaria de México durante la “época neoliberal” se impulsó un tipo de producción agroindustrial basado en el modelo de la Revolución Verde que se caracterizó por el uso de maquinaria agrícola, plaguicidas, semillas híbridas, en sistemas de tipo agroindustrial,<sup>18</sup> el cual fue promovido en el país desde finales de 1940 (Hewitt de Alcántara, 1978).

---

<sup>18</sup> Este modelo transformó radicalmente la producción de alimentos básicos a nivel mundial y las variedades híbridas de alto rendimiento obtenidas siguen siendo las que se siembran mayoritariamente en el mundo (Massieu, 2009).

Con la expansión del modelo neoliberal, el modelo de la Revolución Verde anteriormente desarrollado con tecnología nacional, progresivamente se tradujo en la intromisión de empresas transnacionales en la producción agrícola nacional. Estas empresas en conjunto con los gobiernos, a través de la política pública (programas, planes y proyectos), incentivaron el uso de “paquetes tecnológicos” insumos (semillas híbridas, fertilizantes, plaguicidas y mecanización de las labores de cultivo y cosecha), y con ello la expansión de monocultivos (Otero, 2012 citado en Gómez, 2016).

La implementación del modelo de la Revolución Verde en el campo mexicano, que incluso se promovió en regiones de agricultura a pequeña escala,<sup>19</sup> implicó la aplicación y expansión de productos químicos y el uso de tecnología dependiente de combustibles lo cual ha tenido efectos negativos, como la contaminación, la degradación de los suelos y la sobreexplotación de los recursos hídricos, impactando con ello el ambiente y la salud de los habitantes y consumidores (Otero y Lapegna, 2016 en Kay y Vergara-Camus, 2018).

También tuvo un efecto significativo en muchas de las maneras de producción campesina, los cultivos sembrados, los términos de intercambio de la producción, así como la dieta de las familias campesinas y urbanas mexicanas que, ahora, en gran medida, están basada en productos (que no alimentos) ultra procesados, que están teniendo una serie de implicaciones en el deterioro de la calidad de vida y salud de la población (Gálvez, 2018).

La política agroalimentaria en el periodo neoliberal pasó de un modelo de sustitución de importaciones a un modelo de libre mercado que priorizó la producción para la exportación en detrimento de la producción para el mercado interno. Para lograr suplir el consumo nacional de alimentos los gobiernos mexicanos han hecho importaciones significativas de los productos de mayor consumo nacional. Se estima que nuestra dependencia alimentaria es del 87% en el caso del arroz, del 12% en el frijol, del 37% en el maíz, del 62% en el trigo y del 30% en la leche de vaca (Patiño Fierro, 2019).

En este contexto de libre mercado, los gobiernos priorizaron las “ventajas corporativas” sacrificando la soberanía alimentaria y la autosuficiencia alimentaria, lo que, según expertos, nos coloca en una posición sumamente vulnerable ante cambios globales como la producción de

---

<sup>19</sup> Esto debido a la intromisión de empresas transnacionales de agroquímicos en programas gubernamentales que durante largo tiempo se encargaron de promover su uso con recursos públicos.

biocombustibles a partir de semillas como el maíz o el cambio climático (Mandujano, 2018, Massieu, 2009).

A la par del avance del modelo neoliberal y la instauración del modelo de la Revolución Verde en regiones de México, en Estados Unidos se comenzó a desarrollar la “biotecnología moderna”,<sup>20</sup> particularmente de organismos genéticamente modificados (OGM), y comenzó a aplicarse a la industria agroalimentaria, mediante la generación de las semillas transgénicas, lo cual supone la introducción de material genético extraño en las variedades de plantas (Otero, 2013, p. 60).

De acuerdo con Otero (2013) “quienes la proponían describían la biotecnología agrícola, en general, y la ingeniería genética, en particular, como herramientas potentes para el desarrollo sostenible y como un esfuerzo para eliminar el hambre mundial, la inseguridad alimentaria y la desnutrición” (p. 619). Esta tecnología tuvo una gran aceptación y apoyo gubernamental en Estados Unidos, y progresivamente, gracias al impulso de la industria agroalimentaria y funcionarios del gobierno estadounidense ligados a ésta, se fomentó en otros países del llamado “Sur Global” como México, mediante, otra vez, reformas legislativas y la inyección de capital (Villaverde, 2018).

Ante este panorama, heredado de “la larga noche neoliberal”, el nuevo gobierno, bajó un discurso “pos-neoliberal”, propone “recuperar la autosuficiencia alimentaria y rescatar a los sectores agrícola, pecuario, pesquero y acuícola de la situación en que se encuentran” (SADER, 2020, p.3), a través de la reestructuración de los programas y las políticas para el sector rural. A partir de “un nuevo sistema agroalimentario mexicano productivo, justo, saludable, incluyente y sustentable” (SADER, 2020, p.3). Además, como promesa de campaña y ya como presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha difundido un discurso en contra del uso de transgénicos en el país, y en el último año (2020) también sobre el herbicida glifosato, asociado a estos.

La reestructuración que “la 4T” propone, se pretende lograr mediante un cambio de enfoque de la política agropecuaria, primero orientando el presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER antes SAGARPA) hacia los pequeños y medianos productores del sur-sureste del país, “en aquellas zonas donde se concentran los productores

---

<sup>20</sup> Según la definición de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, el término “biotecnología moderna” se usa para distinguir las aplicaciones recientes de la biotecnología, tales como la ingeniería genética y la fusión celular, de los métodos más convencionales, como pueden ser el cultivo o la fermentación” (CFIA, 2012. Énfasis en el original en Otero, 2013)

más pobres” (SADER, 2019). Así como a través de la reducción del número de programas; SAGARPA pasó de tener 8 programas con 42 componentes en 2018,<sup>21</sup> a 7 programas en 2020 en la renovada SADER, 4 enfocados en dar apoyo directo a pequeños y medianos productores.

La reestructuración incluyó diversos cambios como la desaparición de programas enfocados a apoyar a los sectores agroindustriales como el programa Apoyos a los productores con amplio potencial productivo y competitivo y otros como la Alianza para el Campo y los Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA).

El presupuesto de ASERCA ahora pasó a un nuevo organismo sectorizado de la SADER, a la recientemente creada (por decreto presidencial); Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), la cual fusiona a Diconsa y a Liconsa (antes parte de la SEDESOL), y que tiene como objetivo “favorecer la productividad agroalimentaria y su distribución en beneficio de la población más rezagada del país” (SEGALMEX, 2019).

SEGALMEX también está encargada de vender y distribuir fertilizantes, semillas mejoradas o “cualquier otro producto que contribuya a elevar la productividad del campo mexicano”. Promover la industrialización de alimentos básicos y la comercialización de excedentes dentro y fuera del país, la creación de pequeñas y medianas empresas privadas asociadas a la comercialización de productos alimenticios. Así como apoyar las tareas de investigación científica y desarrollo tecnológico que se encuentren vinculadas con su objeto y que sean promovidas por la SADER (LICONSA, 2019).

En la siguiente tabla presento los nuevos nombres de las instancias de desarrollo rural en el gobierno de la 4T, los programas dirigidos al sector rural, así como sus objetivos. Destaco en especial los sujetos para los que están dirigidos, así como los conceptos que describen los objetivos que estos programas buscan lograr.

<b>Tabla 1.</b> Cambios institucionales y nuevos programas en la política de desarrollo rural de la 4T			
<b>Nombre de la instancia</b>	<b>Programas</b>	<b>Población a la que se dirige</b>	<b>Objetivos</b>
Secretaría de Agricultura y desarrollo rural (SADER)	- Programa de Precios de Garantía	La población está definida para cada producto. En el caso del maíz está dirigido a <b>“pequeños productores”</b> con hasta	Se pretende impulsar la producción de alimentos básicos y fortalecer la economía de los <b>pequeños productores</b> del campo.

<sup>21</sup> Ver Calendario de Apertura de Ventanillas. SAGARPA 2018.

		5 hectáreas y para <b>“medianos productores”</b> con hasta 50 hectáreas. Para el arroz y trigo, por ejemplo, no hay restricción de hectáreas, pero si un volumen (no definido) por productor.	
	- Programa de Fomento a la Agricultura	Productores agrícolas que posean hasta cinco hectáreas para incentivos individuales y productores agrícolas con hasta cincuenta hectáreas para incentivos que requieran proyectos colectivos, así como los Comités Nacionales Sistemas Producto Agrícolas	Contribuir a la <b>autosuficiencia y seguridad alimentaria</b> mediante el incremento de la <b>productividad</b> de la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura, a través de <b>prácticas sustentables</b> , del desarrollo de cadenas de valor regionales y generando las condiciones de igualdad necesarias para un desarrollo territorial con inclusión y justicia social.
	- Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria <b>*Componentes:</b> <b>I.</b> Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias; <b>II.</b> Campañas Fitozoosanitarias; <b>III.</b> Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, y <b>IV.</b> Soporte a la Sanidad e Inocuidad	El programa tendrá aplicación en todas las entidades federativas y podrá atender y realizar acciones de sanidad vegetal, de salud animal, de sanidad acuícola y de inocuidad agroalimentaria.	El Objetivo General del Programa y sus Componentes* es el de contribuir a mantener y mejorar el patrimonio fitozoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las zonas o regiones del país, mediante la ejecución de proyectos en las zonas o regiones donde se previenen y combaten plagas y enfermedades que afectan la agricultura, ganadería, acuicultura y pesca, así como los correspondientes en materia de inocuidad.
Seguridad alimentaria mexicana (SEGALMEX)	- Programa de Fertilizantes para el Bienestar	<b>Productores agrícolas de pequeña escala</b> , dedicados a la producción de cultivos prioritarios, ubicados en	Contribuir al Incremento de la producción de los cultivos prioritarios de los <b>productores de pequeña escala</b> .

<b>Organismo sectorizado de SADER</b>		el Estado de Guerrero y zonas de atención estratégica de los Estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.	
	- Programa de Producción para el Bienestar	<b>Productores de pequeña y de mediana</b> escala con predios y unidades de producción registrados en el Padrón, preferentemente de granos (maíz, frijol, trigo harinero y/o arroz, entre otros), amaranto, chía, caña de azúcar, café, cacao, miel o leche	Dotar de liquidez a <b>productores de pequeña y mediana escala</b> de granos (maíz, frijol, trigo harinero y/o arroz, entre otros), amaranto o chía, caña de azúcar, café, cacao y miel, mediante apoyos directos para su inversión en actividades productivas.
	<b>Componente:</b> Asistencia Técnica		Brindar capacitación y/o acompañamiento técnico-organizativo, para facilitar la adopción de <b>prácticas agroecológicas y sustentables</b> e incrementar los rendimientos en predios y unidades de producción de productores, principalmente de maíz, frijol, café, caña de azúcar, cacao, miel o leche, así como para fortalecer la instrumentación de servicios de vinculación productiva.
	- Programa de Abasto Social de Leche a cargo de LICONSA	<b>Poblaciones que se encuentran en condición de pobreza</b> o en zonas de alta y muy alta marginación del medio rural que asciende a 26,573 localidades, con un total aproximado de 20,797,910 habitantes.	Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo del derecho social a la alimentación, facilitando el acceso físico y económico a la Canasta Básica (Productos Alimenticios y de Demanda Social), para mejorar la seguridad alimentaria de la <b>población que habita en las localidades de alta o muy alta marginación</b>
- Programa de Abasto Rural DICONSA	<b>Poblaciones que se encuentran en condición de pobreza</b> o en zonas de alta y muy alta marginación del medio rural que asciende a 26,573 localidades, con	Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo del derecho social a la alimentación, facilitando el acceso físico y económico a la Canasta Básica (Productos Alimenticios y	



		un total aproximado de 20,797,910 habitantes.	de Demanda Social), para <b>mejorar la seguridad alimentaria</b> de la población que habita en las localidades de alta o muy alta marginación.
Secretaría de Bienestar	Sembrando Vida	<b>Sujetos agrarios mayores de edad</b> que habitan en localidades rurales, cuyos municipios se encuentran con niveles de rezago social y que son propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajadas en un proyecto agroforestal.	Contribuir al bienestar social mediante <b>ingresos suficientes, impulsar la autosuficiencia alimentaria, la reconstrucción del tejido social</b> y generar la <b>inclusión productiva</b> de los campesinos en localidades rurales para hacer productiva la tierra

Fuente: Elaboración propia con base en reglas de operación de los programas.

Los programas de la renovada SADER se enfocan en otorgar subsidios para la producción y en otorgar precios de garantía a cultivos de alta importancia nacional como el maíz, el frijol, el trigo panificable, la leche, etc., a los pequeños y medianos productores. Todo lo cual se hace, en contraposición a lo ocurrido en sexenios anteriores que lo hacían a través de intermediarios (técnicos o vendedores de agrotóxicos y semillas industrializadas), mediante apoyos monetarios directos a los productores. Esto implicó un cambio sustancial para la organización política rural vinculada a organizaciones corporativistas como CNC, Antorcha Campesina, UNORCA, etc., que, durante largo tiempo, fungieron como intermediarias entre campesinos y los gobiernos acaparando recursos públicos para sus dirigentes y agremiados. También significó un cambio para empresas de la agroindustria a las que los gobiernos “neoliberales” concesionaron la implementación de ciertos programas (como el PIMAF o VIDA) (Bazán, 2020, Diagnóstico sobre la política pública en Hopelchén, manuscrito no publicado).

Estas acciones, se menciona en el plan sectorial de la SADER, tienen el objetivo de devolver el potencial productivo a los pequeños productores que por falta de “apoyos gubernamentales” y/o por falta de políticas dirigidas hacia este sector han tenido que emprender otras estrategias de supervivencia como el abandono del campo por migración, trabajo asalariado como jornaleros, etc. (SADER, 2020).

Al respecto, Víctor Suárez, Subsecretario de Alimentación y Competitividad de SEGALMEX, en una nota de prensa, mencionó:

...en administraciones anteriores se beneficiaba a productores con hasta 80 hectáreas, por lo que se bajó el tope a 20 hectáreas de cultivo, con el fin de atender el principio rector que enarbola el presidente Andrés Manuel López Obrador: “primero los pobres”. El funcionario expuso que la SADER incorporó por primera vez en este programa y esquemas de fomento productivo a productores de comunidades indígenas: “sumó a 234 mil productores de diversos pueblos indígenas como los tzotziles, tzeltales, purépechas, huastecos y otomíes, e incluso rarámuris, pimas, tepehuanos y guarijíos de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua (estos últimos, recién sumados al padrón, rebasan los 13 mil 600 y están en 17 municipios de la Sierra) (Ramírez, 2020, párr.8).

El enfoque de la política de desarrollo rural en este gobierno da muestra de cierto cambio en el significado que se le atribuyó desde el discurso gubernamental al campesinado y los grupos indígenas del país, los cuales ahora, desde el enfoque del gobierno de la “4T”, ya no son sólo “pobres” que necesita ayuda social, sino “pobres” o gente que vive “en zonas marginadas”, que a través de apoyo gubernamental tienen el potencial productivo que podría aliviar su condición de pobreza: “por el bien de todos primero los pobres”.

La “nueva política agroalimentaria”, a diferencia de lo que se apreciaba por lo menos en los planes y programas del sexenio anterior, también, sugiere reconocer los daños causados por una política agropecuaria “sin visión sustentable” y propone en su lugar “transitar hacia sistemas productivos sustentables” a través de, como se cita en el programa Sectorial de la SADER:

...el establecimiento de una política para el uso, conservación y recuperación del suelo y agua agrícolas sustentables; consolidar el uso eficiente y la gestión integral del agua y el suelo, para garantizar su disponibilidad en el largo plazo; asegurar la transición hacia buenas prácticas agrícolas para el manejo integrado de plagas y enfermedades, y emprender prácticas de conservación y recuperación de los ecosistemas, que son esenciales para las actividades productivas (SADER, 2020, p.10).

En este sentido la nueva política rural propone realizar la transición hacia “prácticas productivas sustentables” mediante programas de acompañamiento técnico que promuevan la utilización de insumos químicos y biológicos como: composta e incremento de la materia orgánica en los suelos agrícolas, la rotación de cultivos y la inoculación de los suelos con microorganismos, etc.

En las conferencias mensuales de SADER que transmiten por redes sociales como YouTube y Facebook (algo inédito hasta este gobierno),<sup>22</sup> se aprecia la intensión de involucrar el conocimiento científico-tecnológico a las prácticas agropecuarias, como ya ha ocurrido antes, sin embargo, el enfoque de tal conocimiento es, sobre todo, hacia la implementación de métodos de producción que se podrían considerar menos dañinos al medioambiente, como el uso de microorganismos, uso de energía solar, etc. (Agricultura, 2020). Lo que denota, al menos en el discurso, la propuesta de transformación en el enfoque y el tipo de tecnología a emplear en las prácticas agrícolas y también una revaloración del conocimiento desarrollado en los centros de investigación y universidades del país, sobre todo, de los relacionados con las ciencias agropecuarias (COLPOS, UNCH, INIFAP, CHAPINGO...).

Otro cambio de suma relevancia que introdujo el gobierno de la 4T, fue la reestructuración de la política social que, como sabemos, tiene una gran presencia en el medio rural. La ahora Secretaría de Bienestar (antes SEDESOL) si bien mantuvo programas de transferencias monetarias directas (becas, apoyos a personas de la tercera edad y con alguna discapacidad, etc.), lanzó como programa estrella el programa “Sembrando Vida”, el cual pretende resolver problemáticas económicas, productivas y ambientales. Este programa, según se cita en el PND (2019-2024):

Incentiva a los sujetos agrarios a establecer sistemas productivos agroforestales, el cual combina la producción de los cultivos tradicionales en conjunto con árboles frutícolas y maderables, y el sistema de Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF), con lo que se contribuirá a generar empleos, se incentivará la autosuficiencia alimentaria, se mejorarán los ingresos de las y los pobladores y se recuperará la cobertura forestal de un millón de hectáreas en el país. Se otorgará apoyo económico a sujetos agrarios mayores de edad, que habiten en localidades rurales y que tengan un ingreso inferior a la línea de bienestar rural y que sean propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para proyectos agroforestales. Los beneficiarios recibirán un apoyo mensual de 5 mil pesos, así como apoyos en especie para la producción agroforestal (plantas, insumos, herramientas) y acompañamiento técnico para la implementación de sistemas agroforestales. Los técnicos del programa compartirán conocimientos y experiencias con los campesinos y aprenderán de la sabiduría de las personas que han convivido con la naturaleza y con el territorio (PND, 2019, p 40).

Cabe destacar que este programa tiene uno de los mayores presupuestos del gobierno federal junto a las pensiones para adultos mayores y becas para estudiantes y jóvenes. El programa, busca atender dos problemáticas: la pobreza rural y la degradación ambiental. De esta manera, sus objetivos son “rescatar al campo, reactivar la economía local y la regeneración del

---

<sup>22</sup> Ver redes sociales de SADER. Disponible en los siguientes links:  
[https://www.youtube.com/channel/UC2C3\\_rdwH32LMcTMcvH\\_FTg](https://www.youtube.com/channel/UC2C3_rdwH32LMcTMcvH_FTg) y  
<https://www.facebook.com/AgriculturaMexico>

tejido social en las comunidades, bajo un enfoque de sustentabilidad y desarrollo regional a corto, mediano y largo plazo, que contribuya a reducir la vulnerabilidad en la que viven los campesinos de estas regiones” (PND, 2019, p 40).

Este programa no sólo es significativo por el presupuesto que dispone sino también porque a través de él, por primera vez en el país, un programa gubernamental incorpora el concepto de agroecología que, hasta entonces, se había mantenido en el ámbito académico y de la sociedad civil. El enfoque agroecológico del programa, según el análisis realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), se puede ver en las definiciones y descripciones de los apoyos, sobre todo en los apoyos en especie que consisten en materiales, insumos, equipos y herramientas para la instalación de biofábricas en las que se elaboraran biofermentos, biopreparados y otras sustancias que promuevan un manejo agroecológico (CEDRSSA, 2020).

En el ámbito social, de acuerdo al análisis mencionado:

...se pretende que las biofábricas de insumos, no solo no afecten negativamente a los ecosistemas, aportando así a la sostenibilidad ambiental de la producción agroforestal, sino también que aporten a su sostenibilidad económica, pues ayudara a que los productores no tengan que realizar erogaciones para adquirir agroquímicos y, si se tiene en cuenta que las biofábricas serán operadas de manera colectiva por los sujetos agrarios, esto abona a la sostenibilidad social de sus sistemas productivos (*ibid.*, párr.21).

Aquí cabe una mención sobre el uso gubernamental del concepto de agroecología, el cual, desde el enfoque del programa, recupera en algún sentido el contenido político y de justicia social que, desde espacios de la sociedad civil, se ha venido promoviendo (Giraldo y Rosset, 2016). Sin embargo, como veremos más adelante, en el capítulo 4, en la operativización del programa, puede traducirse en el uso demagógico del término (D’Alessandro, 2015), es decir en la aplicación únicamente de técnicas y prácticas menos perjudiciales ambientalmente, lo cual dista de la noción ideal de agroecología, la que se define como:

...más que una opción técnica para complementar prácticas agrícolas, al ponerle el adjetivo de “comunitaria” supera el manejo de la parcela y se convierte en un paradigma político y social capaz de revitalizar la organización de los campesinos sobre sus territorios. La agroecología implica una filosofía de cambios en la lógica de los productores agrícolas, pero también de los consumidores: Crea relaciones más próximas entre el campo y la ciudad, y fundamentalmente entre los humanos y la naturaleza entendida como “lo vivo”. Puede convertir a los despojados rurales en sujetos actuantes, conscientes y capaces de decidir su propio rumbo y aspiraciones (D’Alessandro, 2015, p.1).

Aunado a lo anterior quizá el cambio más significativo de la política agropecuaria de la 4T es su énfasis en el logro de la “autosuficiencia alimentaria”, asunto bastante descuidado desde la entrada del modelo neoliberal al país que, como mencioné, se caracterizó por fomentar la producción de frutas y hortalizas para la exportación y a los cultivos relacionados directamente con la ganadería. La actual política agropecuaria busca desarrollar “el potencial productivo” del país a través del apoyo a los sectores “históricamente desfavorecidos”; los pequeños y medianos productores e indígenas, reconociendo que este sector, con asistencia técnica y apoyos directos, pueden incrementar su productividad hasta suplir sus necesidades alimentarias y las necesidades de la población creciente del país y así evitar la dependencia alimentaria que México tiene respecto a granos de suma importancia como el maíz, el frijol, el arroz, etc. Lo que se suma a la promesa de prohibir los cultivos transgénicos y diversos agrotóxicos, entre ellos el glifosato.

Además de la puesta en marcha de estos programas en distintas localidades del país, funcionarios de gobierno, aliados del movimiento contra los transgénicos, han empezado a desarrollar acciones gubernamentales y legislativas (comisiones intersecretariales, y el impulso modificaciones legislativas) mediante las cuales se busca atender demandas que sobrepasan los alcances de la política pública. Por ejemplo, en febrero de 2020 se conformó el Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC), el cual integra a instituciones y funcionarios del gobierno federal, y a organizaciones del sector social con el objetivo de “trabajar en pro de un sistema agroalimentario y nutricional justo saludable, sustentable y competitivo” y “garantizar la seguridad alimentaria y nutricional del país” (SADER, 2019).<sup>23</sup>

De acuerdo con lo que comentó Víctor Suárez, Subsecretario de Alimentación y Competitividad de SEGALMEX, en el coloquio “Defender los maíces y la milpa para la soberanía alimentaria” organizado por actores de la campaña “Sin Maíz no hay país”, con la conformación de este grupo se pretende atender problemáticas que van más allá del ámbito de competencia de una secretaria, como las relacionadas al cuidado del medio ambiente y la salud como el uso de plaguicidas utilizados para la producción agropecuaria y el desconocimiento de

---

<sup>23</sup> Este grupo está integrado por las secretarías de Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud, Trabajo, Economía, Bienestar y Educación; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); el Senasica; Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex); el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INN); el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI); la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio); el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (SADER, 2019).

las sustancias y productos que contienen los alimentos (Campaña Nacional Sin maíz no hay país, 2021).

La conformación de este grupo intersecretarial también tuvo que ver con el contexto provocado por la pandemia COVID19, pues si bien el tema ambiental y el concepto de “sustentabilidad” forma parte del discurso político mexicano desde la década de 1990 (Leonard y Foyer, 2011), el contexto de pandemia reforzó el discurso en torno al cuidado del medio ambiente, en tanto que la problemática de salud fue vinculada con el deterioro del medio ambiente causado, entre otras cosas, por el modelo agroalimentario hegemónico (agroindustrial) que ha impactado en la calidad nutricional de los alimentos y productos consumidos por la población a nivel mundial (Merlisnky, 2020).

Esta serie de transformaciones en políticas y programas y alianzas encaminadas a atender problemáticas del sector rural que, desde los puntos de vista de agroempresarios se han tachado como “radicales”,<sup>24</sup> más que generar una ruptura con el neoliberalismo, responden al cambio de actores en el gobierno federal, a la entrada de una clase media ilustrada al poder político que, con historiales vinculados al activismo en temas sociales y ambientales, proponen, con sus matices, alternativas al modelo de desarrollo agropecuario y la “política agroalimentaria neoliberal”. Sus posturas, por supuesto, no están exentas de discusiones, pues tal como ha señalado el presidente López Obrador y críticos el gobierno de “la 4T” es un “gobierno híbrido” (Toledo, 2021, párr. 4), en el que aparecen también algunos funcionarios reciclados de otras administraciones con ideas que quizá no estén en la misma línea de interés y si más acordes a una visión de tipo empresarial.

En el siguiente apartado, doy cuenta de los perfiles socio-profesionales de algunos actores que participaron en la elaboración de la actual política de desarrollo rural, que son también quienes han tenido una participación relevante en el debate por la definición de los modelos de desarrollo rural del país que se desarrolla actualmente.

### **2.3 Los funcionarios detrás de la política de desarrollo rural de la 4T**

En este apartado describo los perfiles e historiales de algunos de los funcionarios y las funcionarias que ocupan u ocuparon puestos en organismos vinculados al desarrollo rural, y que estuvieron detrás de la reestructuración en la política de desarrollo rural. Destaco en especial los contrastes más fuertes que percibo entre estos. El objetivo de este apartado es conocer qué

---

<sup>24</sup> Ver declaraciones del expresidente de la CNA en AN/GH (2020b).

actores hacen parte de la discusión por la política de desarrollo rural en el gobierno de la 4T, así como entender qué ideas están en juego y la prevalencia de ellas en la política pública mencionada.

La actual Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) quizá pueda ofrecer uno de los ejemplos más emblemáticos de la diversidad de ideologías e intereses presentes en el gobierno de la 4T. El titular de esta secretaría es el experimentado político Víctor Manuel Villalobos Arámbula. Este personaje con formación en agronomía y biotecnología ha ocupado diversos puestos en organismos internacionales, empresas como Monsanto y Grupo Pulsar (Vínculos entre Morena y Monsanto, 2017)<sup>25</sup> y dependencias federales vinculadas al desarrollo rural. Según dicen algunos de sus críticos, ha sido “operador político de los grandes consorcios agroindustriales”, al colocarse en puestos clave “para promover la entrada de los transgénicos, así como sabotear todo intento que se ha hecho por restringir a las empresas de los agrobusiness” (*ibid.*, párr. 4).

Como mencioné líneas arriba, fue el primer secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) durante el gobierno de Zedillo, y en el gobierno de Fox fue subsecretario de Agricultura, puesto en el que, “a espaldas del Senado, firmó el llamado ‘TLC transgénico’” (Enciso, 2017, párr.3), un acuerdo con Estados Unidos y Canadá, con el cual se dio entrada legal a ese tipo de productos al país sin requisitos de etiquetado, según señaló la académica Silvia Ribeiro en 2003 (*ibid.*).<sup>26</sup> En este periodo se pronunció por el impulso a los transgénicos argumentando que de ello depende la seguridad alimentaria del país (Gonzales, 2001).

En el gobierno de Calderón fue coordinador general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, puesto en el que promovió la Ley de Bioseguridad en 2004 llamada por sus críticos “Ley Monsanto”.<sup>27</sup> En 2003 Villalobos, y otros funcionarios, fueron demandados por Greenpeace,

---

<sup>25</sup> También fue parte del Grupo Pulsar, en el que participaba Seminis, “una gran empresa de transgénicos y controladora del mercado mundial de semillas, de la cual Alfonso Romo Garza, asesor de AMLO, era propietario” (Vínculos entre Morena y Monsanto, 2017, párr. 5 y Estrada, 2017).

<sup>26</sup> La investigadora del Grupo ETC apuntó entonces que “con eso se burlan los requerimientos del Protocolo de Bioseguridad internacional y se promueve que sigan entrando en territorio mexicano granos contaminados con transgénicos, librando de responsabilidad a empresas y países que los producen” (Enciso, 2017, párr.3)

<sup>27</sup> De acuerdo con Ribeiro (2005), la “Ley Monsanto” niega el principio de precaución, no prevé consultas públicas, pero sí da espacio a que las transnacionales apelen si no les aprueban una solicitud, afirma los derechos monopólicos de las transnacionales por medio de sus patentes, las exime de la responsabilidad por contaminación y no considera ni siquiera avisar a quienes podrían ser contaminados.

...por contravenir acuerdos internacionales en materia de bioseguridad firmados por México, al promover los OGM's y permitir la importación de maíz transgénico al país, el cual es centro de origen del cultivo y uno de los alimentos de mayor importancia para la población (Greenpeace, 2003).

En contraste, en SEGALMEX, órgano descentralizado de la misma SADER creado en la reciente administración, está Víctor Suárez Carrera, ingeniero agrónomo también egresado de Chapingo. Este funcionario destaca por haber participado activamente con sectores de la sociedad civil organizada que se han posicionado contra las políticas agroalimentarias del régimen neoliberal, particularmente desde la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, A.C. (ANEC), una red de organizaciones campesinas de base, productoras y comercializadoras de granos básicos, con presencia en 16 entidades federativas, de la cual fue director ejecutivo por más de 10 años, de 1995 hasta 2016.

Suárez también participó en el movimiento contra los transgénicos, en el evento “El Campo No Aguanta Más” y en la campaña “Sin Maíz no hay país”, constituida en 2001 para hacer frente las diversas consecuencias ocasionadas y pronosticadas por la presencia de maíz transgénico en el país.

En diferentes foros online sus presentadores refieren que su “mayor aprendizaje” lo ha tenido a lado de las luchas de comunidades chinantecas y zapotecas de Oaxaca y tojolabales de Chiapas, así como de las organizaciones campesinas de la ANEC (Campaña Nacional Sin maíz no hay país, 2021). El ahora funcionario también fue diputado federal por el PRD. El historial de Suárez como activista en el medio rural mexicano lo posiciona, en su actual papel, como un aliado de las demandas del movimiento contra los transgénicos y el glifosato en el gobierno de la 4T.

La Secretaria del medio ambiente SEMARNAT, surgida en pleno avance neoliberal en 1994 como respuesta a la necesidad de planeación del manejo de recursos naturales y que integró a la política mexicana el concepto de “sustentabilidad” (Leonard y Foyer, 2001), a la entrada del



**Ilustración 2.** Víctor Suárez junto a líderes campesinos en el inicio del ayuno por la Independencia Alimentaria al pie del Ángel de la Independencia. Diciembre 07, 2009.



gobierno de la 4T estuvo precedida por Josefa González-Blanco, una académica y ecologista mexicana la cual renunció, cinco meses después de haber tomado el cargo debido a que, abusando de su poder político y relaciones de amistad, retrasó el despegue de un vuelo comercial (Hernández, 2019). El nombramiento inicial de esta académica en la SEMARNAT, que tiene familiares empresarios en la industria minera y hotelera del país, quizá evidencia la falta de interés de AMLO respecto a temas medioambientales al principio de su mandato y sus compromisos políticos con otros partidos y clases políticas.<sup>28</sup> Lo cual fue puesto en jaque con el sustituto de Gonzáles Blanco.

Para sustituir a Gonzáles Blanco se integró al gabinete de la 4T el académico de gran trayectoria Víctor Manuel Toledo. Toledo fue formado como biólogo en la academia ambientalista de la década de 1980 en la que también se formó Sarukhán y otros académicos como Gómez-Pompa. Toledo, como los agroecólogos formados hoy en día, tiene influencias también de Efraín Hernández Xolocotzin el llamado “padre de la agroecología”, un gran defensor de las agriculturas campesinas mexicanas.<sup>29</sup> Siguiendo esta línea, Toledo ha destacado en su trabajo académico las potencialidades de la agricultura campesina, la agroecología, la agrobiodiversidad y bioculturalidad, la conservación con justicia social, entre otros temas relacionados con el ambiente y su relación con la diversidad cultural del país.

Durante el periodo que Toledo precedió la SEMARNAT, el académico trató de impulsar una transformación en ciertos temas de competencia de la política ambiental. Una de las acciones más mediatizadas y aplaudidas por grupos de la sociedad civil, como mencioné líneas arriba, fue que impidió la importación de 67 mil toneladas de glifosato en 2019, dando respuesta así a las “demandas exigidas por un sector de la sociedad a las autoridades federales, para salvaguardar el

---

<sup>28</sup> De acuerdo con Hernández (2019) Josefa tiene una amplia relación con el mundo político: es hija de Patrocinio González Blanco Garrido (Canabal), quien fue gobernador de Chiapas y secretario de Gobernación con Carlos Salinas de Gortari. El padre de Patrocinio, y abuelo de Josefa, fue Salomón González Blanco (casado con Josefa Garrido Canabal), quien también fue gobernador de Chiapas y, durante más de 12 años, secretario federal del Trabajo (un pequeño tramo de Adolfo Ruiz Cortines y los sexenios completos de Adolfo López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz como presidentes de la República). La secretaria declinante es hija de Patricia Ortiz Mena Salinas de Gortari (prima del ex presidente de la República), quien a su vez fue esposa de Antonio Ortiz Mena, quien fue secretario de Hacienda durante dos sexenios (con Adolfo López Mateos y con Gustavo Díaz Ordaz). Josefa también es familiar del ex gobernador de Morelos Graco Ramírez Garrido Abreu, de la ex procuradora general de la República y ex secretaria de la Función Pública Arely Gómez González Blanco, y del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (ver nota completa en Opinión 27 de mayo de 2019, La Jornada). Esta ex funcionaria además tiene vínculos de parentesco con la industria minera y Hotelera, según declaró en DeclaraNet. (Arteta, 2019).

<sup>29</sup> Muchos de sus seguidores actualmente han consolidado la enseñanza e investigación de la agroecología en diversas instituciones (Hernández, 1985; Díaz de León y Cruz, 1998; Cruz, 2008).

bienestar de la población, prevenir daños a la salud y garantizar un medio ambiente adecuado” (Espinoza y Soto, 2020, p. 62). Lo que fue considerado por actores de la agroindustria como “radical” y como una acción que atentaba contra el logro de la “soberanía alimentaria nacional” (AN/GH, 2020a).

En contraposición al famoso “va por que va”, opinión que Toledo expresó públicamente en diversos foros apoyando el proyecto del tren transísmico y el tren Maya, Toledo se mantuvo firme y abrió un fuerte debate respecto al tema de los plaguicidas, en particular sobre el glifosato, los OGMs, así como sobre la pertinencia e importancia (en un contexto de gran biodiversidad como México) de impulsar la agroecología como modelo de desarrollo rural.

Durante su periodo como titular de la SEMARNAT, Toledo abrió un fuerte debate mediático cuando se posicionó públicamente sobre el primer anteproyecto que supuestamente prohibiría (por decreto presidencial) el glifosato y los transgénicos en el país, subido a CONAMER en agosto de 2020 por su aparente contraparte Víctor Villalobos (sobre esto hablaré más adelante). Su posicionamiento altamente publicitado, aunado a un audio que se filtró a los medios nacionales, en el que expresaba las contradicciones que, desde su perspectiva, hay en la 4T, finalmente resultó en su renuncia de la SEMARNAT. La renuncia, sin embargo, no se anunció como un resultado de sus diferencias con otros funcionarios al interior de la 4T, sino como un retiro voluntario debido a su edad y problemas de salud (La Redacción, 2020).

Aunque el periodo del académico en la SEMARNAT fue corto, su participación en la 4T abrió la pauta para posicionar en el ámbito mediático nacional temas de gran relevancia en la lucha que han emprendido actores del movimiento contra los transgénicos desde finales de la década de 1990. Por otro lado, sus opiniones también pusieron en el debate público los historiales de funcionarios dentro de la 4T que, desde su perspectiva, representan una amenaza para las demandas que el exfuncionario apoya. Tal es el caso de Alfonso Romo quien ocupó el cargo de jefe de la Oficina de la presidencia como mano derecha de AMLO fungiendo como enlace del gobierno con el sector empresarial hasta finales de 2020.

Romo además de ser político es un importante empresario de la agroindustria que creó la compañía más grande a nivel mundial de semillas de vegetales (Gobierno de México, 2021). También es dueño de la empresa Enerall, una compañía biotecnológica que en los últimos 10 años obtuvo concesiones para explotar la mayor cantidad de agua subterránea para uso agrícola en la Península de Yucatán. Romo ha sido acusado por periodistas de ser responsable de

alteraciones ambientales considerables en las casi 15000 ha que posee en la Península de Yucatán y de haber salido impune (Calceñ, *et. al*, 2020).

El mencionado empresario tiene una ideología fundamentalmente capitalista, economicista y tecnócrata, lo que podría explicar sus concepciones de desarrollo y quizá el clasismo que ha expresado al referirse a la tierra de la Península de Yucatán, que desde su perspectiva es improductiva y “no vale nada” (Aristeguí Noticias, 2020, min. 4:55). Romo ha sido considerado por grupos ambientalistas y que se posicionan contra los OGM’s como un peligro para la soberanía alimentaria y la nación.

Como remplazo de Víctor Toledo en la SEMARNAT quedó María Luisa Albores, quien continuó el legado de Toledo impulsando la erradicación de plaguicidas y semillas transgénicas en la producción del campo. Esta funcionaria al principio de la administración del gobierno de “la 4T” fungió como titular de la nueva Secretaría de Bienestar (antes SEDESOL) desde la cual, en concordancia con su trayectoria profesional en el cooperativismo en regiones indígenas de México, particularmente con la Unión de Cooperativas Tosepan Titaniske en la Sierra Norte de Puebla, impulsó el programa “Sembrando Vida”. El que, como mencioné, propone el uso de prácticas agroecológicas en las agriculturas campesinas del país, la soberanía alimentaria comunitaria y la reforestación productiva.

En su papel al frente de la SEMARNAT manifestó públicamente su desacuerdo con el tres veces publicado anteproyecto decreto sobre la supuesta prohibición de glifosato y transgénicos en el país (sobre esto abundaré más adelante), argumentando, tal como lo hizo su predecesor que el documento no había sido consensuado, y señalando algunos vacíos del documento. El perfil de esta funcionaria es sobre todo social, aunque también mantiene un compromiso ambiental con el impulso a la agroecología.

La posición de la titular de SEMARNAT fue acompañada por la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Rocés, una reconocida científica, que, como mencioné arriba, ha participado desde el ámbito académico con el movimiento contra los transgénicos en el país. En su papel actual ha promovido cambios en la política de ciencia y tecnología del país, modificando criterios de programas de Conacyt en favor de una “ciencia puesta al servicio de la sociedad” (Álvarez-Buylla Rocés, 2020).

En repetidas ocasiones, la científica se ha pronunciado en contra de los cultivos transgénicos argumentando los riesgos biológicos sociales, ambientales y culturales que estos

cultivos conllevan hacia las familias rurales y los consumidores mexicanos. Y en el contexto de la pandemia COVID-19 argumentó que las políticas del periodo neoliberal provocaron que México dejara de ser autosuficiente en maíz nativo y se indujera al consumo del industrializado, cuyas consecuencias en la salud son visibles en el contexto (Vergara, 2020).

Esta funcionaria, como mencioné arriba, en 2006 fundó la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), una Asociación Civil que agrupa a investigadores de ciencias biológicas y humanidades, quienes desde entonces han desarrollado investigación enfocada en conocer, entre otras cuestiones, diversas consecuencias que el uso de transgénicos en México ha provocado (como la contaminación de maíces nativos, la afectación a la industria de la miel por presencia de polen transgénico, etc.).

Como investigadora Elena Álvarez-Buylla con otras de sus colegas formó parte del equipo de la UNAM que hizo los estudios de flujo génico en 2002, cuando se descubrió la contaminación de transgenes en maíz nativo de Oaxaca. En lo sucesivo ha desarrollado investigación científica en torno a la presencia de transgenes y el herbicida glifosato en productos de consumo cotidiano como tortillas, harinas, cereales, etc. (Vergara, 2020). Y en tal sentido ha buscado que se reconozca el riesgo asociado al uso de los OGMs en la producción agropecuaria, particularmente del maíz transgénico. Álvarez-Buylla destaca por tener un compromiso particular en contra de los transgénicos, en pro de revalorar los saberes tradicionales y las agriculturas de los grupos indígenas y campesinos y cuestiones asociadas, como veremos más adelante, desde una visión, un tanto esencialista del campesinado mexicano.

Otra funcionaria de suma importancia en el debate sobre los transgénicos y el glifosato es Adelita San Vicente Tello. Es ingeniera agrónoma especializada en la economía del sistema agroalimentario, maestra en desarrollo rural y doctora en agroecología. A lo largo de diez años desempeñó diversos cargos en la administración pública vinculados al sector rural en diversas instituciones y niveles de gobierno. También ha trabajado con organizaciones campesinas no gubernamentales desarrollando programas de planeación para el manejo sustentable de los recursos naturales. Durante 12 años dirigió la fundación Semillas de Vida en donde impulsó la defensa y conservación de las semillas en especial del maíz, y hasta 2019 fungió como representante legal de la Demanda Colectiva por la Defensa del Maíz (2013). En 2007 fue convocante de la campaña nacional “Sin Maíz no hay país”, desde donde coadyuvó a promover el Día Nacional del Maíz el cual se celebra desde 2009.

En Julio de 2019 se integró al equipo de la SEMARNAT y actualmente es Directora general del Sector Primario y Recursos Naturales, cuyo objetivo es planear y administrar la recuperación de los recursos naturales a favor de las comunidades en particular sobre el manejo de OGMs y otros recursos genéticos. Funge como punto focal del Protocolo de Nagoya. Y forma parte también de la Unión de Científicos Comprometidos Socialmente (UCCS, s.f).

## **2.4 Conclusiones**

Como vimos la lucha contra los cultivos transgénicos y el glifosato en México, así como la propuesta de una alternativa al modelo de desarrollo rural ha sido impulsada por un conjunto de actores de la llamada sociedad civil; ONGs, académicos, activistas, comercializadores, agro empresarios, entre otros actores ubicados en distintas regiones del país, vinculados al sector rural y funcionarios del gobierno de la 4T. Lo que demuestra esta investigación es que esta lucha ha sido conformada fundamentalmente por profesionistas y activistas, y no así por una base social campesina amplia.

Este conjunto de actores, desde sus perfiles socioprofesionales han generado conocimiento y hecho pública cierta información, que ha permitido el despliegue de nuevos discursos en la esfera pública nacional, trastocando con ello los significados asociados a ciertas categorías discursivas, lo cual en un “gobierno de izquierda” que incorporó a actores que participaron en organizaciones críticas de la sociedad civil, resultó en un panorama favorable para la institucionalización de las demandas y la superposición de significados a nivel de política pública lo cual se ha traducido en el diseño de nuevos programas de gobierno como el “Sembrando Vida”.

Sin embargo, la lucha por un modelo alternativo de desarrollo rural en el marco del Estado mexicano está aún en disputa, debido a que el gobierno de la “4T”, como vimos, es un espacio contradictorio y heterogéneo en el que participan funcionarios vinculados al movimiento civil contra los transgénicos y el glifosato, con ideas y argumentos sobre la necesidad de promover alternativas al modelo de desarrollo rural actual, y también funcionarios de alto nivel con vínculos con el sector agroindustrial con perspectivas más economicistas y productivistas, cada uno con atribuciones particulares en el gobierno, y con capitales diversos.

Si bien no queda claro hacia dónde se inclina la balanza del poder político, lo que se puede afirmar es que el gobierno de la 4T es, ante todo un “gobierno híbrido” que, inmerso en un contexto global (en el que existen acuerdos comerciales – como el T-MEC- y regulaciones

internacionales) se conforma como un marco político e institucional de disputa que ha permitido a sectores de la sociedad civil desplegar nuevas conceptualizaciones, discursos, perspectivas a futuro y propuestas de desarrollo rural.

En el siguiente apartado me centraré en explicar cuáles son las propuestas y discursos sobre los modelos de desarrollo rural que los actores participantes en el debate público por la definición de la política de desarrollo rural defienden, explicaré cómo y quiénes los generan, y por qué, así como bajo qué nociones, conceptos e ideas lo hacen, y finalmente cómo se posicionan en el debate público nacional que ha abierto el “gobierno híbrido” de la 4T.

# CAPÍTULO 3

## LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL DE LA 4T EN EL DEBATE PÚBLICO NACIONAL: ¿ENTRE AMIGOS, ALIADOS Y ENEMIGOS?

### 3.1 Posiciones en disputa: entre un modelo alternativo, “prácticas agrícolas sustentables” y el mantenimiento del modelo agroindustrial

Como vimos en el capítulo anterior el gobierno de la cuarta transformación es fundamentalmente “un gobierno híbrido”, esta característica ha configurado un escenario gubernamental de disputa en torno a la política de desarrollo rural en el que se han desplegado una serie de opiniones de funcionarios y funcionarias de instancias vinculadas al desarrollo rural en las que coexisten, tanto personas que han colaborado activamente con organizaciones críticas de la sociedad civil, como otras que han trabajado o trabajan con sectores empresariales, particularmente de la agroindustria.

Sus discursos junto a la de agroempresarios, activistas, científicos, representantes de organizaciones, productores, etc., se han expuesto en diversas notas de la prensa nacional, webinars, entrevistas, seminarios virtuales, documentos oficiales, páginas web, entre otros, en los cuales pude leer y escuchar un conjunto de ideas, conceptos, categorizaciones y perspectivas a futuro respecto a los modelos de desarrollo rural “ideales” para el país.

En este apartado, a partir de lo expuesto en las fuentes arriba mencionadas, realizo el análisis de los discursos que han desplegado diferentes actores participantes en **el debate público por la definición de modelos de desarrollo rural para el país**. De esta manera, además de conocer sus posiciones y los modelos que defienden, pretendo analizar cómo los significados asociados a las nociones, categorizaciones y conceptos que utilizan sostienen y dan legitimidad a sus demandas.

Finalmente evaluó los discursos en términos de su eficacia, según lo propuesto por la antropóloga Tania Muray Li, quien argumenta que las representaciones brindan un vocabulario de legitimación para realizar solicitudes y presión y pueden tener un impacto tanto en aspectos cotidianos de la vida como en otros ámbitos como las políticas públicas y los programas (1996). Esta idea tiene como objetivo centrar la atención en los contextos económicos y políticos en los que se despliegan representaciones particulares y en los efectos que provocan.

Para entender las posiciones que predominan en este debate retomo la noción de **Coaliciones Discursivas**, sugerido por Hajer (1993). Esta noción propone el análisis de aquellos ámbitos en los que los actores sociales no actúan de manera individual, sino que lo hacen a través de grupos o alianzas con base en ideas y perspectivas. Siguiendo al autor, en esta investigación entiendo los discursos “como un conjunto específico de ideas, conceptos y categorizaciones que se producen, reproducen y transforman en un particular conjunto de prácticas y a través de las cuáles se le da significado a realidades físicas y sociales” (p.44).

La conformación de coaliciones discursivas en este trabajo tiene la intención de hacer explícitas las posiciones que predominan en las perspectivas de los diferentes actores, a partir de dos extremos de las opiniones debatidas en la esfera pública nacional, lo cual, vale aclarar, deja de lado algunos de los matices al interior de los grupos construidos.

Para el análisis de los discursos de los actores, también utilizó la noción de “encuadre” propuesta por Abby Kinchy (2007), recuperando a Benford y Snow (2000), la autora se refiere a los cuadros/marcos como un conjunto de creencias y significados orientados a la acción que inspiran y legitiman las actividades, organización y campañas de movimientos sociales. Los marcos son construidos de forma activa (e interactiva) por los participantes de los movimientos sociales, para diagnosticar un problema, proponer una solución y motivar a otros a actuar.

Los marcos de las acciones colectivas o coaliciones discursivas, como muestro en este trabajo, pueden crear una nueva forma de conceptualizar o categorizar experiencias, reuniendo así una diversidad de problemáticas o grupos involucrados, en una “posición de incidencia común” (Kinchy, 2007).

El primero de los bloques al que me referiré como la **coalicción discursiva por un modelo de desarrollo rural alternativo (agroecológico)** está conformado específicamente por todas aquellas organizaciones y personas (ONGs, científicos, activistas -ahora funcionarios-, organizaciones de productores y consumidores, etc.) que empujaron y posicionaron en el plano nacional la oposición a la presencia de maíz transgénico en México desde finales de 1990, referidos en el capítulo anterior, y que, en los últimos años, se amplió con la participación de actores conformados en organizaciones que empujan la lucha contra la soya transgénica en la Península de Yucatán (activistas, apicultores y meliponicultoras mayas, académicos, comercializadores de miel, etc.), y a otro conjunto de académicos-activistas cuyo objetivo de lucha son los plaguicidas.



El segundo bloque, **la coalición discursiva por el mantenimiento del modelo agroindustrial** como lógica de desarrollo rural para el campo mexicano, está conformado por personas con larga trayectoria en la vida política mexicana, ahora funcionarios de la 4T y agroempresarios, cuyas actividades, en algunos casos, ejercen o ejercieron de manera paralela. En este bloque también, hay académicos que colaboran activamente con empresas dedicadas a la agroindustria.

En la siguiente tabla doy muestra de algunas y algunos de los actores que situó en cada una de las coaliciones discursivas, como muestro, estas agrupaciones están conformadas indistintamente por funcionarios y funcionarias de la 4T, académicos, agroempresarios, ONGs, organizaciones productivas, activistas, entre otros actores.

<b>Tabla 2. Perfiles de los actores de las coaliciones en disputa.</b>					
<b>1. Coalición discursiva por un modelo de desarrollo rural alternativo (agroecológico)</b>			<b>2. Coalición discursiva por el mantenimiento del modelo agroindustrial</b>		
Funcionarios	SADER/ SEGALME X	Víctor Suárez, Héctor Robles Ignacio Ovalle Fernández	Funcionarios	SADER	Víctor Villalobos
	SEMARNA T	Víctor Manuel Toledo Adelita San Vicente Arturo Argueta		Senador (PRD)	Rodomiro Amaya
	Conacyt	Elena Álvarez- Buylla		SEGOB	Alfonso Romo Julio Scherer Ibarra
	Secretaria de Bienestar	María Luisa Albores		COFEPRI S	
	Secretaria de Salud	Hugo López- Gatell			
Académicos	UNAM	Elena Álvarez- Buylla, Víctor Toledo, Omar Arellano, José Sarukán, Daniel Piñeyro	Agro- empresarios	CNA	Bosco de la Vega
	ECOSUR	Remy Vandame, Luis García Barrios Ramón Mariaca Cecilia Elizondo		Enerall	Alfonso Romo

		Chapingo	Rita Schwentesius Miguel Gómez Cruz		Savia SA de CV	Alejandro Garza Lagüera
		INIFAP	Alejandro Espinosa Antonio Turrent, José Alfredo Samaniego Gaxiola,		AgroBio	Alfonso Romo
ONGs	Ambientalista s y de Derechos Humanos	Greenpeace	María Collin	Académicos	UNAM/ AgroBio	José Luis Solleiro
		Sin maíz no hay país	Silvia Riveiro Adelita San Vicente		UNAM	Francisco Bolivar
		Red en Defensa del Maíz	Aldo Gonzáles, Verónica Villa, Carlos A. Vicente, Álvaro Mena			
		CECCAN	Ana de Ita			
		UCCS	Elena Álvarez- Buylla, Antonio Turrent, Peter Rosset			
		Fundación semilla de vida	Adelita San Vicente Tello, Malin Jönsson			
		CEMDA	Maria Eugenia de la Fuente, Armanda Berenstein, Carlos Ortiz Mena, etc.			
		ERA	Francisco Chapela, Yolanda Lara, Rafael Calderon Arozqueta, etc.			
		GEA				
		ETC	Silvia Riveiro Verónica Villa			
		Alianza Maya y CCMCH	Leydy Pech, Marco Antonio Cupul, Irma Gómez, etc.			
		Asociación de Consumidor es Orgánicos de México	Mercedes López Martínez			

		El Poder del Consumidor	Alejandro Calvillo			
Organizaciones Productivas		ANEC	Leticia López			
		Vía Orgánica, A.C	Azucena Cabrera, Rosana Álvarez, Rose Welch			
		USAEC	Anastasio Oliveros			
		EDUCE S. C.	Miguel Munguía			
		Valor al campesino	Héctor Robles			
		Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio Justo	Luis Martínez Villanueva			
Contra los Plaguicidas		Red de Acción en Plaguicidas y su Alternativas en México (RAPAM)	Fernando Bejarano			
		UNAM	Omar Arellano			
		Red Temática de Toxicología de Plaguicidas	Irma Martha Medina Díaz María Isabel Hernández Ochoa			

Fuente: Elaboración propia.

Estas dos coaliciones han encontrado, en el gobierno de la 4T, un espacio de disputa en la esfera pública nacional que, en el contexto de pandemia COVID-19, se llevó a cabo fundamentalmente a través de medios de comunicación (internet, prensa, televisión), en el cual han posicionado una serie de discursos respecto a cuál sería un modelo de desarrollo rural adecuado para el país, y “necesario para el logro de la soberanía alimentaria”.

En el siguiente apartado expondré algunos de los argumentos desplegados por **la Coalición discursiva por un modelo de desarrollo rural alternativo (agroecológico)**, respecto a su propuesta de modelo de desarrollo que pugna por transitar el modelo agroindustrial heredado de la Revolución Verde y el uso de transgénicos y plaguicidas hacia uno alternativo; agroecológico. Sucesivamente expongo los argumentos expuestos por **la Coalición discursiva**

**por el mantenimiento del modelo agroindustrial**, quienes con una retórica de “prácticas agrícolas sustentables” defienden diversos elementos del modelo agroindustrial como “ideal” para el desarrollo rural del país.

### **3.2 Argumentos de la coalición discursiva por un modelo de desarrollo rural alternativo**

Esta coalición, como se muestra en la tabla de arriba, está conformada por activistas de ONG’s, que trabajan por la defensa de los derechos humanos y diversos aspectos medioambientales, también por científicos y académicos de diversas instituciones del país, comercializadores de productos ambientalmente “más amigables” y de comercio justo, representantes de productores, así como funcionarios y funcionarias del gobierno de la 4T. La mayoría de las personas que agrupo en esta coalición son profesionistas con posgrados de clase media, que desenvuelven sus actividades y vidas en contextos ciudadanos, es decir, no son los campesinos, ni sus actividades tienen que ver con la producción directa en campo.

La propuesta de esta coalición, aunque incluye objetivos más amplios como la recuperación de la soberanía alimentaria nacional y la justicia social, desemboca en la petición a las instancias del gobierno federal de impulsar como política de desarrollo rural “una política pública agroecológica” que promueva la transición del modelo agroindustrial (predominante hasta hoy) hacia un modelo de tipo agroecológico, al cual definen como “sano, justo y sostenible”, y se pide que incluya metas como la eliminación del uso de glifosato y de otros plaguicidas. (Red de Desarrollo Sostenible, 2 de junio de 2020).

Los argumentos que sostienen esta propuesta están anclados en el esquema de conocimientos, creencias, significados, valores, apreciaciones, contextos y discursos que hacen parte del “encuadre” desde el cual los actores de esta coalición legitiman sus propuestas, actividades, organización y campañas, que se articulan en el movimiento ciudadano contra los transgénicos y el glifosato en México.

En este encuadre encontramos como un elemento central el conocimiento científico generado en el mundo y el país sobre los incuantificables daños que el modelo agroindustrial, la introducción de cultivos transgénicos, y por supuesto las políticas y los diversos mecanismos que lo impulsaron, ha ocasionado a los ambientes y a las poblaciones donde se desarrolla. Así como el reconocimiento de ciertas características en el mundo rural mexicano que se proponen como los medios para la operatividad de su propuesta.

En los siguientes apartados doy cuenta de algunos de los discursos con más presencia en el ámbito mediático nacional que surgen del encuadre de esta coalición, y que son la base ideológica y discursiva de la alianza y también el soporte de la demanda por un cambio de modelo de desarrollo rural.

### **3.2.1 Existencia de un modelo de producción alternativo en México: las agriculturas tradicionales, campesinas e indígenas.**

Los actores sociales que hacen parte de esta coalición sostienen que, en el contexto mexicano, pese a más de 30 años del embate de las políticas neoliberales, **existe un modelo de producción alternativo** al modelo agroindustrial de la Revolución Verde y el uso de transgénicos; “los cultivos tradicionales” y “las agriculturas practicadas por las comunidades campesinas e indígenas”, en las cuales se desarrollan “prácticas agrícolas sustentables”, en sistemas “tradicionales” como la milpa y la apicultura.<sup>30</sup> En estos sistemas, siguiendo la retórica de la coalición, se llevan a cabo “prácticas agroecológicas”, que usan tecnologías “más amigables” ambientalmente, menos riesgosas y socialmente más justas que, al ser revaloradas por el gobierno, pueden llevar al país a un “desarrollo sustentable” (Vandame y Álvarez- Buylla, 2012; Lira, 2018).

Estas agriculturas, se expone en discursos de esta coalición, son “herencia milenaria” y producto de “conocimientos ancestrales” y “saberes tradicionales” que las comunidades campesinas y los pueblos indígenas han adquirido históricamente en un complejo proceso biocultural (Toledo, 2008; Lorot, 2012; Ambulante Gira de Documentales, 2020).

A las prácticas agrícolas practicadas por grupos campesinos e indígenas se les atribuye ser “protectoras del ambiente”, también ser “guardianas de la preservación de la biodiversidad”, y generadoras de la agro diversidad que hay en el país, la producción de alimentos “más sanos y sin el uso de agroquímicos”. Además de ser promotoras de las “economías campesinas”, la “autonomía” y la “soberanía alimentaria” (Lira, 2018; Altieri & Toledo, 2011).

En voces de los actores de esta coalición, en los sistemas de producción campesinos e indígenas, se utilizan “semillas campesinas”, semillas nativas o criollas. Las “agriculturas campesinas” se llevan a cabo en asociación de cultivos (policultivos). Además, se utilizan las “malas hierbas” o arvenses como alimentos que complementan la alimentación (como el quelite,

---

<sup>30</sup> Según San Vicente “la milpa se define como sistema agrícola en el que conviven armoniosamente diversos cultivos: frijol, chile, calabaza” (2001, p. 156).

la verdolaga, etc.). En estos sistemas se emplea la mano de obra campesina y familiar, en contraposición a lo que sucede en los modelos de producción de tipo agroindustrial. Como señala Ignacio Simón Zamora, presidente de la Asociación Mexicana de Productores de Bioinsumos (ONG):

"...la agricultura significa tierra, raíces y procesos sociales, no solo un negocio, como la ven el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y el Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula" (Olvera, 2020, párr. 1)

La propuesta de transitar a la agroecología, en el encuadre de esta coalición, tiene una perspectiva social que busca atender a un sector vulnerable, los pequeños y medianos productores, campesinos e indígenas que han sido considerados como "pobres" más que como productores en las políticas de desarrollo rural de los últimos 30 años (del periodo neoliberal).

Esta perspectiva social se sostiene en un argumento de cantidad, es decir, en un número considerable de familias rurales que habitan en el país. En voces de funcionarios de la SEGALMEX como Víctor Suárez y Héctor Robles, los pequeños productores campesinos e indígenas, producen más del 40% de los alimentos que consumimos los mexicanos, por lo que, desde sus perspectivas, con apoyo gubernamental se podrá aumentar el porcentaje de su contribución a la alimentación de los mexicanos (Robles, 2017; Campaña Nacional Sin Maíz no hay País, 2021).

El argumento de cantidad también es utilizado para referirse a los muchos riesgos que conllevan elementos del modelo agroindustrial como el uso de semillas transgénicas. La funcionaria y científica Elena Álvarez-Buylla y el académico Rémy Vandame, en una nota de opinión del periódico La Jornada, lo ejemplifican bien, al referirse a los riesgos de la coexistencia de soya transgénica y la apicultura, además de hablar de afectaciones económicas y ambientales, hacen alusión al importante número de apicultores en el Estado de Campeche y Chiapas:

Considerando que estados como Campeche o Chiapas cuentan con más de 4 mil apicultores, es inevitable que haya varios apiarios en la cercanía de las parcelas de soya y, por tanto, que este cultivo sea visitado por las abejas y que su polen se encuentre en la miel (Álvarez-Buylla y Vandame, 2012, párr. 6).

Así entonces vemos que uno de los elementos del encuadre de la Coalición por un modelo de desarrollo rural alternativo se basa en el reconocimiento de un importante número de productores campesinos e indígenas, a quienes se les atribuyen una serie de características que, en palabras de Folchi (2001), lo "ecologizan", lo cual le da sentido y legitima la propuesta de transitar hacia un modelo agropecuario agroecológico. Pues, como menciona Toledo "la

agroecología está dirigida fundamentalmente a pequeños propietarios, a comunidades campesinas, etc.” (Revista Leisaal, 2013, min.2:40).

Desde este encuadre de esta coalición discursiva, el campesinado como proyecto político, está vinculado intrínsecamente a un modelo de producción “sano” y “sustentable”, lo que puede representar un deseo latente, en el sentido de Max Weber de “reencantarse con el mundo” (Kay y Vergara-Camus, 2018, p. 250). La representación esencialista que, desde este encuadre, se genera del campesinado, lo visibiliza como fundamentalmente ecologista, vinculado al cuidado de la naturaleza, lo que al mismo tiempo que le impone la responsabilidad del cuidado del ambiente (Folchi, 2001).

### 3.2.2 Soberanía alimentaria

Otro de los elementos que sostiene la propuesta de los integrantes de la coalición por un modelo productivo alternativo (y que también es un argumento de su contraparte – como veremos-) es el concepto de **soberanía alimentaria**. En voces de los actores de esta coalición la agroecología es el único camino para lograr la soberanía alimentaria. Este concepto, desde la perspectiva de esta coalición, involucra no sólo seguridad alimentaria, es decir, no sólo se trata del acceso físico, económico y social a los alimentos que se necesitan, en cantidad y calidad (FAO, 2011),<sup>31</sup> implica que los productores tengan autonomía para elegir qué quieren sembrar y de qué manera quieren hacerlo.

Sostienen que al ser unas cuantas empresas las que controlan las semillas y los insumos para producir (particularmente Bayer-Monsanto, Dow-Dupont, Syngenta-ChemChina), los campesinos pierden autonomía, ya que requieren de obtener ganancias para volver a producir (Morbiato, 2021; Grupo ETC, 2016).

La soberanía alimentaria desde el encuadre de esta coalición incluye "producir nuestra propia tecnología, dejar atrás la dependencia" (Suárez, 2020, 20 de octubre). En este sentido funcionarios de la 4T de esta coalición plantean producir “conocimiento nacional” en las universidades y centros de investigación pública, suplir progresivamente la importación de fertilizantes químicos mediante la reactivación de FERTIMEX, así como proponer fábricas de bioinsumos a pequeños productores. Los funcionarios aliados de la coalición, en ocasiones,

---

<sup>31</sup> Según el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP), la Seguridad Alimentaria Nutricional es un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de un acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo <http://www.fao.org/3/at772s/at772s.pdf>.

equiparan la soberanía alimentaria con la autosuficiencia alimentaria. Esto quizá refleje la incertidumbre de los propios funcionarios respecto al logro de una independencia agroalimentaria de la dinámica global de mercado en que la que el país se encuentra inmerso.

Así como de promover una soberanía alimentaria según la Vía Campesina, es decir, que busca crear una sociedad más justa, y un sistema alimentario ambientalmente sostenible a través del control democrático sobre los recursos utilizados para la producción de alimentos, rechazando políticas agroalimentarias contemporáneas como la priorización de las exportaciones agrícolas y la privatización de los recursos naturales (Daye, 2020).

En tanto que, para otros miembros de esta coalición, particularmente algunos académicos y activistas, la soberanía alimentaria implica la preservación de las semillas de los propios campesinos y la utilización de conocimientos e insumos generados por ellos mismos (no químicos), aunque no se descarta el “diálogo de saberes” (Ávila, 2016, Argueta, 2012). En ese sentido la soberanía alimentaria implica para estos el no uso de insumos provenientes de la industria transnacional agroalimentaria, como las semillas transgénicas y los plaguicidas, pero tampoco de elementos producidos externamente de las comunidades (como semillas híbridas, las más usadas en México), ni aunque se produzcan en el país.

La dimensión de la soberanía alimentaria, incluye como prioridad la producción de alimentos sanos para el consumo local y nacional, el control sobre la producción, el libre intercambio de semillas, y la garantía de precios justos para los agricultores. Y también hace alusión a un campesino que no se encuentra dentro de las redes de comercio capitalista, sino que busca la comercialización de sus productos en cadenas de comercialización que no sobrepasan las fronteras nacionales.

La definición además incluye cuestiones sobre el vínculo entre los seres humanos y el medioambiente, la protección de la diversidad en la producción agrícola y los sistemas alimentarios (Daye, 2020).

### **3.2.3 Lo que se dice de su contraparte: la noción de agroindustria en la coalición por un modelo alternativo**

Para actores de la coalición por un modelo de desarrollo rural alternativo, las semillas transgénicas y los plaguicidas como el glifosato son parte de un modelo agropecuario de tipo agroindustrial, que hace parte de un mercado transnacional y parte del modelo económico neoliberal, en donde lo que rige, como mencionó en 2008 la actual titular de Conacyt,



... no son los intereses ni comunitarios ni públicos ni de salud, sino los intereses y los indicadores macroeconómicos que responden básicamente a intereses económicos, a criterios productivistas y al beneficio de estas grandes firmas corporativas (Lira, 2018, párr. 9).

También se refiere que es un modelo que desconoce la capacidad de conocimiento de los campesinos, ya que la tecnología proveniente de las agroempresas desconoce los saberes locales como una construcción cultural compleja, histórica y racional, que, como mencioné, diversos académicos consideran parte de un complejo proceso biocultural que los campesinos actuales han heredado de generación en generación.

En términos generales,

La oposición de la agroecología al agro-negocio se enfoca en particular en las formas de producción del conocimiento: salir de la centralización y legitimización del conocimiento agronómico moderno (Coolsaet, 2016; Sousa Santos, 2016) para promover una coproducción de conocimientos locales (campesino-a-campesino, científico-a-campesino-a-científico) y contextuales (Altieri y Toledo, 2011; Coolsaet, 2016). Así, el aporte de los conocimientos tradicionales en la agroecología es un tema clave (FAO, Sauborin *et al*, 2017).

En las voces de los actores de esta coalición, el modelo agroindustrial ha generado innumerables consecuencias negativas, económicas, culturales, ambientales y sociales, como la pérdida de la identidad cultural, el cambio de prácticas campesinas, cambio de uso de suelo (deforestación para la ampliación de la frontera agrícola), daños a la salud, etc., lo cual se entiende como una señal de peligro. En este sentido, dicho modelo se califica como “depredador”, “injusto” “no sustentable y no saludable”, “generador de desigualdades”, lo que refleja la atribución de juicios morales y éticos, y aporta elementos de reflexión para convencer de su peligrosidad. Como se puede apreciar en la siguiente declaración de la representante de la ANEC Leticia López: “este modelo en su conjunto es antagónico con el desarrollo equitativo, justo, y sostenible de la agricultura, la humanidad y el medio ambiente” (López, 2021).

Y del académico, ex titular de la SEMARNAT, Víctor Manuel Toledo:

La agroecología es la alternativa a los sistemas agroindustriales de producción de alimentos y otras materias que son sistemas terriblemente depredadores en términos ecológicos [...] cuando hablamos de sistemas agroindustriales hablamos de sistemas de industriales justamente basados en la especialización productiva de los monocultivos, una sola especie cultivada en grandes extensiones, el uso de agroquímicos, de maquinaria, de energía fósil y digamos de unas cuantas variedades genéticas, todo esto constituye un paquete tecnológico que tiene efectos muy severos no solamente sobre la salud ambiental o la salud ecológica sino también sobre la salud de los seres humanos, la agroecología

digamos es la contracorriente que se opone a la agricultura industrial y digamos, busca la generación de alimentos sanos sin afectar la salud (Revista Leisaal, 2013, min.00:04).

La práctica del modelo agroindustrial, desde el encuadre de esta coalición, la realizan empresarios agroindustriales, es decir, grandes productores con disposición de amplios capitales. A nivel nacional, “la burguesía agroindustrial del país” (Toledo, 2021, párr. 6), ubicada en su mayoría en el Norte de México son quienes la desarrollan en el país. No es un modelo que realicen pequeños campesinos familiares o indígenas.

Bajo este modelo de tipo comercial, desde la retórica de la coalición, se producen únicamente monocultivos, se usan semillas híbridas o transgénicas, así como maquinaria y plaguicidas, lo cual tiene implicaciones negativas para el ambiente y la salud de los trabajadores. Como se puede apreciar en la siguiente declaración de un activista de Malin Jönsson, investigadora del maíz de la organización Semillas de Vida.

Esa producción de la agroindustria está destruyendo la biodiversidad, lo cual no es sustentable a largo plazo. El modelo de agroquímicos lo debemos de dejar atrás. Hay alternativas mucho más amigables para la salud humana y de las demás especies (Olvera, 2020, párr. 7).

La agroindustria, además, se menciona, está respaldada en un monopolio de empresas transnacionales de gran poder económico que restan autonomía a las decisiones estatales y de las personas, y no permiten el logro de objetivos políticos nacionales como la soberanía alimentaria.

...estas tecnologías transgénicas y de su paquete tecnológico, que incluye al glifosato, que son tan dañinas para el medio ambiente y la salud humana; que además están asociadas a la pérdida de soberanía y autosuficiencia alimentaria, debido a que la venta de semillas y agrotóxicos está controlada por unas cuantas empresas que son las que toman las decisiones de qué comemos y cómo se produce (Lázaro, 2021, párr. 7).

Como muestran algunos discursos de actores de la coalición que promueven la transición productiva hacia la agroecología, el modelo agroindustrial conlleva una serie de elementos que en ningún sentido benefician a las poblaciones rurales y tampoco a las urbanas, aunque de una gran mayoría de esta producción come la mayoría de los mexicanos.

Este tipo de agricultura se sitúa como causante de daños ambientales tan complejos como el cambio climático y el deterioro de la salud de las poblaciones a nivel mundial. Esta serie de connotaciones negativas que se le atribuye fundamentalmente a la agroindustria y al soporte político y económico que tiene a nivel mundial, buscan convencer a la “opinión pública” de la peligrosidad de mantener y apoyar esta industria. Así como generar un terreno de incidencia común que presione políticamente para la erradicación del modelo, aunque, como veremos más

adelante, este modelo ya no sólo se sostiene en acciones gubernamentales como sucedió en su implementación hace más de treinta años.

### **3.3 Argumentos de la coalición discursiva por el mantenimiento del modelo agroindustrial: ideas, conceptos y categorizaciones**

Esta coalición discursiva está conformada por sectores de la agroindustria mexicana y transnacional, pero también por académicos y funcionarios de alto rango del gobierno de la 4T. La demanda de los actores de esta coalición está en el mantenimiento del modelo hegemónico de producción en México, pero bajo una retórica de “prácticas agrícolas sostenibles” que, aunque “sostenibles” siguen incluyendo el uso de maquinaria e insumos provenientes de las industrias transnacionales agroalimentarias. La demanda de estos actores no sólo es por el modelo productivo sino también por el mantenimiento de la laxa legislación y los programas, proyectos y políticas que lo impulsaron desde hace más de 30 años.

El surgimiento de esta coalición en el contexto de la 4T justamente deviene del cambio de enfoque de la política agropecuaria del gobierno precedido por AMLO, así como de la toma de acciones concretas por parte de funcionarios aliados del movimiento contra los transgénicos y el glifosato, como la prohibición de la importación de 67000 toneladas de glifosato al país y la presión ejercida para la publicación del decreto presidencial que prohíbe gradualmente el uso del glifosato y el maíz transgénico (ver apartado 3.6).

Los argumentos que sostienen esta propuesta se basan en el imperativo de la productividad como medio para elevar la economía de los productores, y ésta como único medio para elevar su “calidad de vida”. El modelo agroindustrial, desde esta perspectiva, es el único medio por el cual se logrará suplir la “soberanía alimentaria”. Ideas y perspectivas como las mencionadas son parte del “encuadre” a través de las cuales los actores de esta coalición legitiman sus demandas, promueven acciones y ejercen presión política para el mantenimiento y apoyo gubernamental del modelo agroindustrial.

A continuación, presento algunos elementos discursivos que hacen parte del encuadre de esta coalición, es decir, del conjunto de creencias, conocimientos, valores y percepciones a futuro, que tienen sobre sus subjetividades y que atribuyen a otras, y desde el cual se posicionan para empujar sus demandas en la esfera pública nacional (Kinchy, 2007).

### 3.3.1 La necesidad de la productividad en un entorno de libre mercado

El pasado 4 de julio, en entrevista con Carmen Aristegui, el expresidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega, mencionó que la agricultura en México es uno de los sectores de mayor importancia para la economía, por lo que el mantenimiento de la “alta productividad” del modelo que defiende, es la única manera para “competir con el mundo que tenemos las fronteras abiertas con tratados” (AN/GH 2020b, párr. 10).

En el mismo sentido Víctor Villalobos, titular de la SADER, mencionó que el incremento de la producción y la productividad es un asunto fundamental para consolidar uno de los principales motores de la economía en el país; el agropecuario. Cabe apuntar que, aunque situó a Villalobos (funcionario) y Bosco de la Vega (agroempresario) en la misma coalición, Villalobos, ahora con el enfoque social que utiliza en su retórica el gobierno de “la 4T”, sitúa el incremento de la productividad en un sector “marginado históricamente”, los pequeños y medianos productores, mientras que Bosco de la Vega lo hace en los productores agroindustriales.

Los actores de esta coalición argumentan o han argumentado (como lo hizo Villalobos en su momento),<sup>32</sup> que el uso de semillas transgénicas y plaguicidas son tecnologías que permiten el incremento de la producción, sin ellos, y particularmente sin el uso del glifosato, según refiere el expresidente de la CNA, la producción nacional caería en un 50% (AN/GH 2020b). Lo que contrasta con los pronósticos lanzados por el Conacyt en 2021, que indican que “la producción del campo [sin glifosato] sólo caerá del 1 al 3%” (Enciso, 2021, párr.1). Este argumento se basa en experiencias de utilización de prácticas clave de manejo de malezas no herbicidas combinadas con tratamientos robustos con herbicidas residuales del suelo antes de la emergencia (Beckie, *et al*, 2020).

Los cultivos transgénicos, desde este encuadre, responden también a la “necesidad” de aumentar la productividad. Agroempresarios mexicanos, en concordancia con empresas transnacionales y científicos, han mencionado que los transgénicos serían capaces de “alimentar al mundo”,<sup>33</sup> y hacer frente a la creciente demandas de alimentos, como mencionó en 2005 el científico Francisco Bolívar:

---

<sup>32</sup> Villalobos, V. (2011). *Los transgénicos: oportunidades y amenazas* (No. F30 62). Colegio de Postgraduados de México.

<sup>33</sup> Uno de los actores más destacados en cuanto a la defensa de los transgénicos ha sido el bioquímico inglés ganó el Premio Nobel de Medicina de 1993. En 2016 encabezó el pronunciamiento de 130 premios nobel que, por medio de una carta, le pidieron a Greenpeace que abandonara su campaña en contra de los transgénicos y que detuvieran su oposición “basada en dogmas y emociones”. <https://www.semana.com/educacion/articulo/richard-roberts-el-cientifico-y-premio-nobel-de-medicina-1993-que-defiende-los-alimentos-transgenicos/582544/>

Nadie puede rechazar totalmente el uso de OGM frente a una creciente demanda de alimentos más nutritivos, medicamentos menos dañinos y la utilización de pesticidas y controles biológicos más efectivos, que no afectan el equilibrio ambiental y la biodiversidad (Solano, 2005, párr. 2).

Esto da cuenta de la necesidad que, desde el encuadre de esta coalición, tiene el aumento de la productividad, como medio para atenuar carencias no sólo alimentarias sino también de salud y le atribuyen cuestiones hasta vinculadas al cuidado medioambiental.

### **3.3.2 La soberanía alimentaria según la Coalición por el mantenimiento del modelo agroindustrial**

Desde el encuadre de esta coalición la soberanía alimentaria se entiende como la capacidad del sector agropecuario del país de proveer los alimentos para suplir el consumo nacional, y también aquellos que permitan mantener una competitividad en el mercado global. A miembros de esta coalición les interesa producir o que en el país se produzcan granos y semillas de primera necesidad para el mercado interno, pero también les interesa seguir produciendo alimentos como frutas y hortalizas que tienen un valor agregado en mercados internacionales.

La soberanía alimentaria desde esta coalición se trata fundamentalmente de aliviar el hambre del país, mediante la producción nacional de alimentos básicos como el maíz, el frijol, el arroz y la leche (como se plantea en la política agroalimentaria actual). Esto ha permitido la utilización del término en el discurso, aunque las acciones concretas que se desarrollan desde este enfoque de política no hacen alusión a cómo se suplirán los muchos otros alimentos (sobre todo industrializados) que hacen parte de la alimentación actual de la gran mayoría de los mexicanos, como tampoco se deja ver en los argumentos de la coalición por un modelo alternativo.

### **3.3.3 Lo que se dice de su contraparte: la noción de la agroecología en la coalición por el mantenimiento del modelo agroindustrial**

Para esta coalición, las “agriculturas tradicionales”, como lo fue para quienes impulsaron el modelo agroindustrial hace 30 años (de la Madrid, Salinas y sucesores), son improductivas, no alcanzan más que para el autoconsumo de los campesinos, razón por la cual no podrían abastecer el consumo interno del país. En la retórica de esta coalición estos modelos son equiparables a los modelos de producción prehispánicos. Como se aprecia en la declaración de este agroempresario:

Nos quieren regresar a las parcelas, a las chinampas. Si tuviéramos una parcela, quitamos las hierbas a mano, pero una agricultura comercial que necesita competir con el mundo... (AN/GH, 2020b, párr. 10).

Desde voces de esta coalición los promotores de la agroecología “son funcionarios de gobierno que no son sensibles con su país que no están agilizando sus procesos y están afectando al sector productivo”. A quienes además se les ha llamado “radicales”, que “no saben de productividad y que no tienen evidencia científica” para acusar al modelo de estar causando daños a la salud y el ambiente (AN/GH 2020b).

Desde discursos de esta coalición, impedir el avance de elementos del modelo industrial (como los herbicidas) traerá al país consecuencias negativas importantes como no poder competir en el mercado global de alimentos del que el país es parte y no será capaz de cumplir acuerdos comerciales como el T-MEC. Como señala Bosco de la Vega “vamos a volvernos más dependientes alimentariamente y vamos a volvernos también más dependientes de una inflación importante porque nuestra productividad se va a caer” (AN/GH, 2020b, párr. 7).

Desde este encuadre, las tecnologías provenientes de la agroindustria, son las únicas capaces de volver productivas las tierras, pues este es el único valor que se le atribuye, en contraste a la coalición por un modelo alternativo. Desde este encuadre, la tierra no tiene valor si nos es productiva, como expresó claramente el agroempresario y ex jefe de la oficina de presidencia, Alfonso Romo, en un foro público al cuestionarle sobre las acusaciones que se le han hecho a su empresa Enerall por causar un desastre ambiental en la Península de Yucatán.

[...] vayan a ver lo que hemos hecho, hemos transformado suelos de improductivos a productivos, de cómo un área calcárea de piedras, donde se producían 700 kilos por hectárea por año, a los 2 años estamos en 11 toneladas [...] un ejidatario que tiene 20 hectáreas hoy en día, que no vale nada su tierra, le ponemos esta tecnología nueva, propiedad de mexicanos para convertir suelos improductivos a productivos, lo que hace la naturaleza en 200 años, lo hacemos en 2, con esta tecnología pasa el valor de la tierra de 15000 pesos a 15000 dólares...(Aristeguí Noticias, 2020, min. (min.01:17).

Queda claro que, desde la perspectiva del empresario y de esta coalición, los múltiples usos que campesinos (mayas en este caso) le dan a su territorio como la obtención de madera, plantas medicinales, obtener alimentos a partir de la cacería o recolección, no son asuntos que

tengan un reconocimiento o valor, es decir, desde este encuadre la tierra no tiene valor por sí misma, si no sólo en cuanto su potencial productivo.

Como se puede apreciar en algunos discursos, los promotores de esta coalición tienen una ideología de tipo empresarial y aluden a cuestiones, sobre todo, de carácter económico para impulsar sus demandas. Desde esta óptica, las demandas de su contraparte “lo único que van hacer es hacer a México más dependiente a generar más pobreza y afectarnos muy seriamente en precios para el consumidor” (AN/GH, 2020b, párr. 10).

### **3.4 Similitudes argumentativas entre las coaliciones discursivas**

Los discursos de ambas coaliciones hacen alusión al conocimiento científico para legitimar sus demandas. La coalición por el mantenimiento del modelo agroindustrial argumenta que se ha comprobado la eficacia productiva de los transgénicos y que estos no resultan perjudiciales para el ambiente y la salud de las poblaciones. En contraste, desde la coalición por un modelo alternativo el uso de transgénicos y diversos plaguicidas, entre los que se destaca el glifosato, ha generado evidencia científica de estar causando alteraciones biológicas y perjudicando la salud de las personas, particularmente se ha destacado que el herbicida glifosato es un probable cancerígeno, y estar vinculado a daños renales y congénitos.

Cabe aquí reconocer que esta investigación tiene un sesgo debido a mi afinidad política con la coalición que impulsa un cambio de modelo de producción hacia la agroecología, por lo que me encuentro más empapada de información científica respecto a las consecuencias negativas de los transgénicos y el glifosato, y mucho menos informada de argumentos económicos.

Aunque en cada coalición la soberanía alimentaria se conceptualiza de una manera específica, las dos coaliciones ponen como objetivo del modelo que impulsan el logro de la soberanía alimentaria. Como expliqué, la diferencia radica en que la coalición por un modelo de desarrollo rural alternativo prioriza, sobre todo, la producción nacional para el consumo interno, aunque no dejan de lado la comercialización internacional “justa”,<sup>34</sup> pero de una producción que provenga de pequeños y medianos productores que trabajen con modelos menos perjudiciales ambientalmente. Mientras que la coalición que defiende el modelo agroindustrial, no contrapone

---

<sup>34</sup> Ver “El comercio justo y la producción de miel orgánica en Hopelchén: un estudio de caso de Lol K’ax y Kabi’tah”, estudio que da cuenta de las consecuencias en un municipio en la Península de Yucatán de dos organizaciones de apicultores que comercializaron su producción en los mercados del “comercio justo” y la producción orgánica (Bazán, 2019).

la producción interna con la posibilidad del país de seguir compitiendo en el mercado global de alimentos, particularmente de aquellos que tienen valor agregado en mercados internacionales.

Las dos coaliciones pugnan por que sus propuestas sean reconocidas en las políticas de Estado y que los diferentes sectores productivos (agroindustriales- grandes productores y pequeños y medianos productores), sean reconocidos como sectores importantes en estas, aunque desde la coalición que promueve la agroecología, el gobierno tiene como responsabilidad, sobre todo, apoyar a los sectores más marginados de la sociedad, que, en su encuadre, son campesinos e indígenas.

Este debate se ha llevado fundamentalmente a través del posicionamiento de discursos en la esfera pública nacional, sin acciones de protesta que den cuenta de una base social amplia, por lo que se puede afirmar que sus luchas son movimientos, más que sociales, civiles, que, echando mano de diferentes capitales (según la conceptualización propuesta por Bourdieu), como el acceso a medios, la disponibilidad de recursos económicos y de tiempo, buscan posicionar discursivamente sus posturas y escalarlas a un ámbito político.

Las propuestas de estas dos coaliciones sugieren la necesidad de un Estado interventor, aunque a su vez las coaliciones actúan al margen del Estado, la coalición por un modelo alternativo a través de redes internacionales y fundaciones que financian acciones mediáticas y de protesta, así como trabajos de base a nivel local que promueven, entre otras cosas, la revaloración de saberes tradicionales, prácticas agroecológicas, etc., y la coalición por el mantenimiento de la agroindustria lo hace a través de la inyección de capital, mediante inversiones de empresas agroindustriales que buscan expandirse, así como mediante acciones jurídicas y presión política que autofinancian.

La necesidad de un Estado interventor está en que, como sabemos los Estados y los gobiernos que los dirigen como un conjunto de instituciones expresadas en burocracias de ejecución de programas, de aplicación de justicia y de reelaboración de los marcos legales (Escalona, 2011) son los organismos facultados para regular un sinnúmero de aspectos de la vida social tal como la utilización o no de sustancias que conlleven riesgos ambientales como los plaguicidas o semillas transgénicas.

### **3.5 La construcción discursiva del campesinado, de lo indígena y del gobierno**

Como plantea Escobar, (2008), los discursos y las representaciones juegan un rol importante en la toma de decisiones y acciones políticas, así como en la legitimación de ciertas



políticas y percepciones ambientales. En este sentido, en este apartado propongo analizar los discursos de las coaliciones, como un conjunto de ideas, perspectivas a futuro, visiones, conocimientos, que representan y a la vez construyen a los sujetos que materializan o se busca que materialicen las propuestas; el gobierno y obviamente los productores.

A los productores, por ejemplo, según el encuadre, se les llama indistintamente: campesinos, indígenas, grandes, pequeños, y medianos productores, agroempresarios, etc., conceptos mediante los cuales los actores construyen representaciones de los sujetos de desarrollo rural y se les da significado a sus realidades físicas y sociales (Hajer, 1993).

Desde la coalición en **pro de un modelo alternativo**, la categoría de campesino y/o indígena alude a una condición agraria de pequeño propietario, el cual, en tal condición podría practicar una agricultura agroecológica, que, de hecho, ya práctica. Desde el encuadre de la coalición los campesinos e indígenas son “sujetos colectivos”, que tienen prácticas culturales y organizativas diferentes que ejercen con agencia (casi despegados de la estructura). Como expresó Raúl Paulín Hernández, funcionario de la Secretaría de Bienestar que implementa el programa Sembrando Vida:

...reconocemos a las campesinas y los campesinos como actores políticos indispensables para lograr la soberanía alimentaria, reconocemos al campesino no sólo como sujeto individual sino como sujeto colectivo; la vida comunitaria, el trabajo colectivo, los compadrazgos y la solidaridad, las asambleas comunitarias, la toma de decisiones colectivas, el tequio, la autoridad reconocida porque nace de la comunidad, todos ellos son componentes fundamentales del sujeto colectivo... (Paulín, 20/10/ 2020).

Este encuadre que se podría considerar de enfoque campesinista (Clarck, 2018, p. 277), se construye al campesino e indígena como un proyecto político que tiene como fin el logro de la soberanía alimentaria, también como un sujeto intrínsecamente colectivo que lleva a cabo prácticas solidarias y que actúa en pro de un bien común y no individual, como lo haría un empresario, por ejemplo. Como señala Phillip McMichael en su artículo del 2006— como un grupo intrínsecamente noble y virtuoso frente al capital o como el polo opuesto del capital. (Clarck, 2018, p. 227).

Por otro lado, el gobierno, desde la perspectiva de esta coalición es el encargado de velar por el cumplimiento de los derechos que los campesinos han adquirido en su relación impuesta con el Estado, derecho a la salud, a un medioambiente sano, a la alimentación, etc. Lo cual, desde su perspectiva implicaría que el gobierno desarrolle un modelo de desarrollo rural que sea

respetuoso ambiental y socialmente. Tal como han expresado representantes de ONGs y funcionarios aliados del movimiento anti-transgénicos.

Es indispensable, y más urgente que nunca en la crisis ambiental, climática y de falta de salud alimentaria que nos aqueja, crear ya las condiciones necesarias para cuidar el medio ambiente y producir alimentos sanos, nutritivos, suficientes y culturalmente adecuados para toda la población (Olvera, 2020, párr. 5).

Vale apuntar que entre las acciones que desempeñan organizaciones de la sociedad civil, activistas y académicos, particularmente los que hacen parte de la lucha contra los transgénicos en México, está sugerir a los gobiernos (aunque en este caso casi siempre se dirigen al gobierno federal) cómo mejorar la gestión del ambiente y de sus ciudadanos, y cómo “desarrollarlos sustentablemente”. Como se puede apreciar en la declaración de Elena Alvares-Buylla, en una entrevista en 2018.

El apoyo al campo implicaría que los campesinos tendrían interés en regresar a sus comunidades y con ello cuidarían sus territorios y a sus familias. Seguirían contribuyendo con sus grandes talentos heredados de sus padres, abuelos y bisabuelos a la generación de innovaciones más aptas y adecuadas a las nuevas condiciones ambientales adaptadas localmente (Lira, 2018, párr. 22).

En los discursos de esta coalición, el mercado como promotor de modelos productivos y prácticas agrícolas, no cobra gran importancia, se pone como máximo poder y autoridad para dirigir el modelo de desarrollo rural al gobierno, como el actor que determinará las acciones de los campesinos a través de las políticas públicas, como si fueran algo lineal y no hubiera otro tipo de intervenciones en la vida de los campesinos. También se encuentra un tanto ausente la participación de los campesinos en las redes transnacionales agroalimentarias, se les sitúa como aislados de estas. Aunque en ocasiones las cadenas comerciales de las que los grupos campesinos e indígenas son parte, se utilizan para legitimar demandas, cómo se aprecia en la opinión de una de las participantes que situó en esta Coalición

...su experiencia en meliponicultura y apicultura [de los productores mayas] los coloca entre los más importantes exportadores de miel; mucha de ella orgánica, a los mercados europeos (De Ita, 2016, párr. 2).

En los discursos de la coalición por un modelo alternativo, la reflexión sobre lo limitativo en términos presupuestarios y de gestión de las acciones gubernamentales, es prácticamente un asunto de no mucha importancia, o cuando sale a relucir se convierte en una justificación ante los ataques a las malas acciones de gobierno o a la impunidad. Llama la atención que en el discurso de esta coalición la “austeridad republicana” y los recortes presupuestarios, no se perciben como asuntos limitativos o como aspectos que se deben que atacar de fondo.

Desde esta perspectiva, un tanto esencialista, como veremos en el capítulo 4, al compararla con un espacio concreto de México, los productores catalogados como indígenas están ligados a su territorio de manera simbólica y espiritual, por tal razón cuidan y protegen sus territorios, desarrollan actividades productivas que son cuidadosas y “sustentables” con el ambiente. Como se puede apreciar es esta declaración:

El nuevo Gobierno debe comprometerse con el apoyo a las comunidades campesinas y no a destruirlas, y a no convertirlas en una fuente de saqueo y explotación, destrucción de los territorios que milenariamente han cuidado y que son fundamentales para la integridad futura y la seguridad de este país (Lira, 2018, párr. 23).

Y al mismo tiempo han sufrido las consecuencias del “periodo neoliberal”, migración, abandono del campo, vulnerabilidad económica. El análisis de esta categoría muestra un actor con agencia, al mismo tiempo que un sujeto como un receptor de lo que se supone debe hacer para lograr su autonomía.

**Desde la coalición discursiva por el mantenimiento del modelo agroindustrial**, al cual también en ocasiones, y con ligeras variaciones se le llama “sistemas productivos sustentables”, la categoría de campesino e indígena generalmente se emplea como pequeño productor, aunque no se descarta que dentro de estas categorías existan productores medianos y hasta grandes, como si sucede implícitamente en el discurso de la coalición pro agroecología. Este discurso reconoce la presencia en el país de grandes productores, pequeños y medianos productores, aunque suele situarlos geográficamente de manera homogénea en dos regiones del país (centro norte – grandes productores / sur-sureste – pequeños productores).

Desde esta coalición el campesino es un sujeto individual al que se puede incentivar mediante “apoyos” técnicos y monetarios, y puede incrementar su productividad como parte del mercado local pero también del mercado transnacional de alimentos. Desde esta perspectiva, los productores podrían elevar su calidad de vida vendiendo sus cultivos en los mercados locales, nacionales e internacionales. La autoproducción, es un aspecto que, sólo en ocasiones, se le atribuye a este sujeto, a diferencia de lo que se puede apreciar implícitamente, o a veces, explícitamente en el discurso de la coalición que promueve la agroecología.

Desde esta perspectiva el gobierno es el encargado de incentivar las distintas agriculturas (según sus necesidades) y proporcionar asistencia técnica para aumentar la productividad y así generar el logro de la soberanía alimentaria. El gobierno debe apoyar a todos los productores del

país, incluyendo a los sectores “desfavorecidos históricamente” (los pequeños productores), pero al mismo tiempo debe impulsar la agricultura comercial, que siempre ha sido subsidiada. Vale aquí señalar que dentro de la coalición hay discrepancias al respecto, entre funcionarios y empresarios. Desde la voz del titular de la SADER, Víctor Villalobos, el gobierno no puede apoyar a todos los productores porque “no alcanzaría” (Plattaforma, 2019, párr. 3), mientras que desde la perspectiva de un agroempresario el gobierno debe apoyar a las agriculturas comerciales “sin importar quien la realice, es un tema de estrategia, de soberanía nacional y alimentaria” (Plattaforma, 2019, párr. 11), puesto que habría grandes perjuicios económicos. Esto quizá más allá de ser una discrepancia es un asunto de capacidad presupuestal que refleja la balanza de poder en el gobierno de la 4T.

En el discurso de esta coalición, el Estado no cobra gran importancia como garantizador de derechos, como si lo hace en la coalición que promueve la agroecología, se le sitúa, sobre todo, como un promotor de la productividad y como una instancia que desde su función legislativa debería promover los mecanismos necesarios para elevar la productividad y permitir la comercialización. Es decir, se le sitúa como un facilitador del mercado, más que como un asegurador de derechos.

La soberanía alimentaria en esta coalición se ve en términos de productividad, es decir, se logrará supliendo la demanda de alimentos primarios (sobre todo granos y cereales) a nivel nacional y participando competitivamente en el mercado global de alimentos, a diferencia de lo que se aprecia en la coalición agroecológica.

### **3.6 El conflicto en torno al glifosato: disputas discursivas entre las coaliciones**

En agosto de 2020 comenzó un fuerte debate en diversos medios de comunicación sobre la posible prohibición del herbicida glifosato y los cultivos transgénicos en el país. En este debate se desplegaron los discursos de distintos funcionarios de instancias federales, diputados, académicos, académicas, activistas contra los transgénicos, ONGs, organizaciones productivas, agroempresarios, entre otros actores vinculados al sector rural y productivo del país, los cuales, según sus posiciones, situé como parte de las coaliciones discursivas mencionadas arriba.

Uno de los éxitos de este debate para la coalición que promueve la reconversión agroecológica fue la publicación el 31 de diciembre de 2020 del decreto presidencial para el retiro

gradual del glifosato hacia 2024 y la prohibición del maíz transgénico.<sup>35</sup> La llegada a este punto (hasta hoy debatido), sin embargo, no fue para nada un camino armónico, sino un camino de disputas.

En este apartado, recuperando el análisis de los discursos vertidos en los apartados anteriores de este capítulo, doy cuenta de las disputas que se generaron en torno a dicha propuesta legislativa, así como de los actores participantes y sus discursos.

El antecedente de este debate, como expliqué en el capítulo 2, tiene una larga historia de demanda social contra los transgénicos, sin embargo, en el gobierno de la 4T fue la acción de tres instancias federales, no sólo de la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como se explicitó en los medios, de prohibir la entrada de 67 mil toneladas de glifosato al país bajo el principio precautorio (DM, 2019). Dicha acción gubernamental generó reacciones contrarias entre los participantes del debate. Por un lado, despertó la preocupación de actores de la agroindustria, como se evidenció en diversos medios de comunicación, y por otro generó la oportunidad de activistas contra los OGMs de llevar sus demandas a otro plano de acción; la acción gubernamental, como se evidenció en comunicados de las organizaciones de la sociedad civil, notas de prensa y foros web.

El 4 de agosto de 2020, Víctor Suárez, subsecretario de alimentación y competitividad de SEGALMEX, según se puede ver en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER),<sup>36</sup> subió un anteproyecto de decreto en el que se planteó una ruta para la posible sustitución gradual del herbicida glifosato y los cultivos transgénicos en el país.<sup>37</sup> Al día siguiente, el entonces titular de la SEMARNAT, el ambientalista y académico de gran trayectoria, Víctor Manuel Toledo, publicó en Twitter un comunicado a la “opinión pública” en el que planteó desconocer los términos del anteproyecto de decreto presidencial sobre el tema de glifosato y acusó a Víctor Villalobos, titular de la SADER, de usar su nombre sin su consentimiento en dicho decreto (Toledo, 2020).

---

<sup>35</sup> El glifosato es un ingrediente activo presente en más de 750 productos que se utilizan como herbicidas en la agricultura intensiva, pero también en el sector forestal, en la jardinería e, incluso, entre pequeños productores.

<sup>36</sup> De acuerdo a los datos exhibidos en la página web de CONAMER. <https://cofemersimir.gob.mx/portales>. Consultado el 7 de agosto de 2020.

<sup>37</sup> Decreto por el que se establecen las acciones que deberán realizar las instituciones que en el mismo se mencionan, para programar y coordinar los estudios técnicos necesarios que permitan determinar la seguridad de la sustancia química denominada glifosato y, en su caso, desarrollar la tecnología necesaria que permita tanto su sustitución como el aumento de los niveles productivos con miras a lograr la autosuficiencia alimentaria.

Entre otras cosas, argumentó que dicho anteproyecto “no sólo no refleja, sino que contradice las instrucciones dadas por el presidente de la república, derivadas de dos reuniones con representantes de varias secretarías de estado”. En el comunicado Toledo pidió al titular de la SADER, Víctor Villalobos Arámbula, una disculpa pública (Toledo, 2020). Sobre esto no hubo respuesta.

Esta versión del anteproyecto, aunque fue la primera mediatizada, no fue la primera versión subida al portal de CONAMER. Cuando revisé la página de CONAMER pude constatar que antes del inicio de este debate en medios de comunicación, el 25 de junio de 2020 se hizo una primera publicación llamada: “ACUERDO PARA COORDINAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS QUE PERMITAN DETERMINAR LA SEGURIDAD DEL GLIFOSATO COMO INGREDIENTE ACTIVO DE PLAGUICIDAS EN MÉXICO”, cuyo remitente fue Víctor Suárez Carrera, y que fue dada de baja 5 días después. Sobre este primer acuerdo no hubo una movilización mediática, aunque, como veremos, si se hizo referencia a él en el debate comenzado en agosto.

Este debate abierto por el exfuncionario de SEMARNAT, Víctor Toledo, fue acompañado por actores y organizaciones de la coalición por un modelo alternativo de desarrollo rural, a través de notas de prensa y comunicados que apoyaron la publicación de Toledo y expresaban su “repudio” contra el titular de la SADER, por publicar un decreto que “No cumplía con los acuerdos que previamente se habían establecido entre las Secretarías y la Presidencia de la República” (Toledo, 2020), lo cual fue aprovechado para recordar la historia del funcionario ligado a Monsanto y otras empresas de sector agroindustrial del país (Olvera, 2020). Esto a pesar de que como remitente del anteproyecto aparece Víctor Suárez, titular de la SEGALMEX (amigo y/o colaborador de algunas organizaciones que emitieron publicaciones).

Entre otros argumentos, se acusó, que

la propuesta presentada por la Secretaría de Agricultura no plantea un plan de transición para prohibir el herbicida, como ya ocurre en otros países [...] lo que necesitamos -dice- no son más estudios sobre glifosato (como propuso la Secretaría de Agricultura), sino un plan coherente de transición a una agricultura sin químicos (Oropeza, 2020).

En esta nota la investigadora Riveiro refirió que existen más de 100 estudios arbitrados que aportan evidencia científica sobre las consecuencias a la salud que los experimentos de toxicidad del glifosato han mostrado en animales, además de juicios legales contra Monsanto por demostrarse legalmente que el herbicida está asociado al cáncer (Oropeza, 2020).

En el mismo sentido Toledo ha declarado públicamente que el herbicida glifosato, conlleva una serie de riesgos para los animales, el ambiente y la salud de las personas, lo cual ha tenido repercusiones en el contexto generado por la expansión de la pandemia COVID-19. De ahí la importancia y urgencia de prohibirlo.

El glifosato genera encefalopatías, autismo, parkinsonismo, malformaciones y diversos tipos de cáncer, además de afectar los sistemas endocrino, reproductivo, inmunitario, digestivo, hepático, renal, nervioso y cardiovascular de las personas [...] Además, el glifosato resulta tóxico para diferentes especies de crustáceos, moluscos, oligoquetos, algas, hongos, fitoplancton y zooplancton, anfibios, tortugas, arácnidos, aves, mamíferos y, lo más preocupante, a insectos benéficos y polinizadores como abejas, coleópteros y colibríes [...]. Además de ser un agente de desprotección contra el COVID-19 (Toledo, 2020, párr. 5).

Otro argumento que se expuso públicamente ante tal anteproyecto, fue que este iba en contra de las propuestas de algunas dependencias del gobierno de la 4T, y de las promesas reafirmadas en varias ocasiones por el presidente, como el “rescate del campo”. Como mencionó la representante de la ANEC:

el gobierno de la Cuarta Transformación se planteó la urgente necesidad de rescatar al campo y encaminar al país hacia la autosuficiencia y soberanía alimentaria [...] estamos convencidos de que no solo es urgente sino necesaria una estrategia conjunta hacia un nuevo modelo agroalimentario y nutricional, sin agrotóxicos y sin transgénicos y donde la base sea la transición hacia una producción agroecológica, misma que ha venido impulsando la Semarnat y el Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente Y Competitividad (GISAMAC) (Gómez, 2020).

Actores de la coalición por el mantenimiento del modelo agroindustrial, particularmente de sectores de la agroindustria mexicana encabezados por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), también vertieron una serie de opiniones al respecto, que, sobre todo, mostraron una preocupación por que el herbicida realmente se prohibiera, argumentando su extendido uso y los aportes que este hace a la productividad agrícola del país.

Aquí el glifosato lo usamos todos, desde café, todas las hortalizas, todos los granos... ¿Qué va a pasar? [si prohíben el glifosato], vamos a volvernos más dependientes alimentariamente y vamos a volvernos también más dependientes de una inflación importante porque nuestra productividad se va a caer en un 50% [...] con el rechazo del glifosato ya solo quedarán los inventarios que se tienen para las cosechas de agosto – septiembre, pero esto ya no alcanzaría para las siembras de otoño – invierno (AN/GH, 2020b).

A este debate se le sumó un audio filtrado a los medios en el que Toledo señaló las contradicciones de la 4T, y las “limitaciones” para empujar temas ambientales en este sexenio, lo cual atribuyó fundamentalmente a actores que podrían “contravenir” los intereses

ambientales, particularmente Alfonso Romo y Víctor Villalobos (por su vínculo con la agroindustria) y Rocío Nahle, la secretaria de Energía del gobierno de AMLO.<sup>38</sup>

En este contexto de tensiones intragubernamentales, el 2 de septiembre de 2020, el académico, Víctor Toledo, presentó su renuncia. Esta, sin embargo, fue anunciada como un retiro voluntario debido a problemas de salud y la edad avanzada del académico. En su lugar quedo María Luisa Albores (Andrés Manuel López Obrador, 2020).

Pese a la salida del académico, sus argumentos se mantuvieron en voces de ONGs, académicos y activistas, cuando el 23 de octubre de 2020, el mismo Víctor Suárez, según la página de CONAMER, subió una tercera propuesta de anteproyecto al sitio web.<sup>39</sup> Esta propuesta, fue acusada de no prohibir el uso del glifosato ni del maíz transgénico. Acusaron: “Por el contrario, deja abierta la posibilidad de que continúe el uso de este herbicida y se siembre maíz transgénico” (Concha, 2020, párr. 4).

Este tercer anteproyecto fue llamado por organizaciones de la sociedad civil “Decreto Scherer-Villalobos” ya que, se mencionó en notas de prensa, estuvo respaldado por el titular de la SADER y su consuegro, el Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer, quienes, en voces de sus críticos, “han consensuado un documento que no prohíbe el cancerígeno plaguicida. De hecho, ignora los estudios que se han realizado en diversas partes del mundo y ordena una “investigación” a los científicos mexicanos para que averigüen si sí es malo o bueno” (Camacho, 2020, párr. 2). De esta manera, acusaron Greenpeace y otras organizaciones a los funcionarios que “buscan defender posturas a favor de los transgénicos y agroquímicos” (Lázaro, 2020, párr. 4).

Mediante una carta firmada por más de 200 organizaciones y un bombardeo mediático esta publicación oficial volvió a ser objeto de una serie de disputas públicas, y fue acusada, nuevamente, de no responder a los acuerdos alcanzados entre las instancias gubernamentales competentes (Concha, 2020). Así como de no responder a la lucha social de más de 20 años:

La propuesta de decreto presidencial publicada el 23 de octubre del presente año, no responde a los más de 20 años de lucha campesina, de comunidades, ciudadanas (os), científicas (os), artistas y organizaciones que han exigido en repetidas ocasiones se tome acción determinante para la prohibición de transgénicos y el glifosato en el país en

---

<sup>38</sup> A esta última funcionaria se le acusa de tener bajo control político varios municipios de Veracruz, además de nepotismo y corrupción. Ver: <https://www.ejecentral.com.mx/abusos-marcan-a-rocio-nahle/>

<sup>39</sup> Ver: <http://187.191.71.192/expedientes/24706>



defensa de la soberanía alimentaria de las y los mexicanos y el derecho a una alimentación sana, suficiente y que respete a la naturaleza (Lázaro, 2020, párr. 5).

A esta serie de declaraciones de organizaciones y personas de la sociedad civil, se le sumaron opiniones de funcionarias y funcionarios de la 4T que sitúo en la Coalición por un modelo de producción alternativo. Los y las titulares de la Secretaría de Salud (SSA), Jorge Alcocer, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla y de la SEMARNAT, María Luisa Albores, a través de un comentario (B000203919) dirigido al comisionado de la CONAMER, Alberto Montoya Martín de Campo, que incluyó copia al presidente Andrés Manuel López Obrador y el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Sherer Ibarra, sugirieron que además de eliminar el uso de este tóxico hacia el 2024 se haga lo propio con el maíz transgénico importado “hasta prescindir de él” para ese mismo año (Perea, 2020, párr. 4).

Las recomendaciones de las titulares de estas secretarías dieron como resultado que el comisionado de la CONAMER, Alberto Montoya Martín de Campo, publicará también una solicitud de información dirigida a la SADER en la que le sugirió hacer caso de las recomendaciones. En esta solicitud también se exhorta a la Secretaría a establecer el criterio para regular el uso e importación del glifosato o productos derivados en tanto se realizan los estudios técnicos para determinar su seguridad, y se aprecia una preocupación por reconocer la multifactoriedad de las implicaciones del uso del herbicida (Of. No.CONAMER/20/4285).

Esta serie de acciones y discursos puestos a debate finalmente repercutieron en que el 9 de diciembre de 2020 se publicara el “Decreto por el que se establecen las acciones que deberán realizar las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus competencias, para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente”, que si bien mantiene un énfasis en la productividad añade demandas de la coalición por un modelo de desarrollo rural alternativo como la prohibición inmediata de permisos para la siembra de maíz OGM, y el reconocimiento de métodos no químicos o menos dañinos para el ambiente en la producción agropecuaria.

Este anteproyecto pareció cumplir con las demandas de algunas organizaciones y personas de la coalición por un modelo alternativo, hasta el punto que se exigió su publicación en el diario oficial a través de diversos medios de comunicación.

El decreto finalmente fue publicado en el diario oficial de la federación el 31 de diciembre de 2020, con 6 artículos y 6 transitorios. Mandata a todas las instancias de gobierno a “no adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar glifosato o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo, en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno” (DOF: 31/12/2020).

También menciona:

...las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Recursos Naturales promoverán e implementarán alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas al uso del glifosato, ya sea con otros agroquímicos de baja toxicidad, con productos biológicos u orgánicos, con prácticas agroecológicas o con uso intensivo de mano de obra, que resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el ámbito de su competencia, coordinará, articulará, promoverá y apoyará las investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos e innovaciones que le permitan sustentar y proponer, a las secretarías que se mencionan en el párrafo anterior, alternativas al glifosato. Para dar cumplimiento a esta disposición, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología podrá convocar a instituciones que pertenecen al sector que encabeza y demás instituciones de educación superior o centros de investigación públicos con competencia en la materia (DOF: 31/12/2020).

Las mencionadas instancias deberán también promover reformas jurídicas en 2023, aunque no se explicita cuál será el mecanismo. También se les dota de ciertas atribuciones que no sabemos de qué manera se echaran andar, como las posibles sanciones que hará la Secretaría de Salud en caso de incumplimiento al decreto.

En cuanto a la situación sobre el maíz transgénico el decreto mandata a CIBIOGEM “prohibir el uso de grano de maíz genéticamente modificado en la alimentación de las mexicanas y los mexicanos, hasta sustituirlo totalmente en una fecha que no podrá ser posterior al 31 de enero de 2024” (DOF: 31/12/2020). Lo que se puede considerar como un éxito del movimiento contra el maíz transgénico en México, aunque no dice nada sobre impedir otros cultivos transgénicos, como la soya transgénica que ha sido acusada de causar daños a la apicultura, al ambiente y a la salud de los habitantes en la Península de Yucatán. Tampoco menciona nada sobre las siembras de algodón transgénico.

Conacyt tiene un papel fundamental en la implementación de este decreto. Es el brazo derecho operativo del decreto ya que, además de promover el desarrollo de investigación e innovación tecnológica para disminuir de manera gradual el uso de glifosato, tiene que emitir recomendaciones, así como dictaminar la cantidad de glifosato de importación para particulares.

Ante lo cual ha echado a andar su maquinaria institucional y presupuestal. En entrevista con el coordinador de la implementación del decreto en Conacyt, me mencionó que la instancia de investigación y desarrollo tecnológico en México, propuso 5 ejes de investigación con académicos expertos del país para desarrollar diversas metodologías para suplir progresivamente el uso del glifosato. También que se están coordinando con dependencias de gobierno como la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Salud, SEMARNAT, la Secretaría de Bienestar, SADER, y Economía, para distribuir tareas para comenzar con lo dispuesto en el decreto sobre la prohibición de maíz transgénico y la gradual prohibición del glifosato. Así como que se está considerando intervenir en los planes de programas universitarios y de posgrados vinculados a la agroecología para que los conocimientos que en estos se generan sean acercados a los productores.

A la par, mediante notas de prensa, se supo que miembros del CNA, están haciendo una “vaquita” para “echar abajo el decreto presidencial”, mediante acciones legales, notas pagadas en medios y una campaña publicitaria a nivel internacional (Camacho, 2021). Postura que comparten con sectores de la agroindustria de Estados Unidos, que preocupados por la prohibición del herbicida glifosato y el maíz transgénico en el México, enviaron una carta al secretario de Agricultura, Thomas Vilsack, y a la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, en el que advirtieron sobre los posibles impactos negativos que este decreto podría significar para las exportaciones agrícolas de E.U. Lo que provocó que la representante legal enviara una serie de correos electrónicos mostrando preocupación “con respecto al cumplimiento de acuerdos comerciales” particularmente a lo convenido en el T-MEC. (Morales, 2021).

Según una nota de prensa de la redacción de La Cooperacha, Chris Novak, presidente de CropLife,<sup>40</sup> escribió a funcionarios de E.U que si México extendía el principio de precaución a los niveles de residuos de plaguicidas en los alimentos se verían comprometidos 20 mil millones

---

<sup>40</sup>“Es la organización gremial internacional que representa a la Industria de la Ciencia de los Cultivos. Industria que investiga y desarrolla agrotecnologías (defensivos agrícolas, biotecnología y semillas) que ayudan a los agricultores a mejorar la eficiencia en la producción de cultivos para la Seguridad Alimentaria”, según se cita en su página web. (<https://www.croplifela.org/es/quienes-somos/nosotros>)

de dólares en exportaciones agrícolas anuales entre ambos países y mencionó que las acciones de México para prohibir el glifosato “socava la integridad de los estándares científicos, como la base del comercio mundial” (La Cooperacha, 2021).

En tanto, la multinacional Bayer-Monsanto se amparó contra el decreto para la prohibición gradual del glifosato solicitando una suspensión provisional. Tras una serie de eventos legales finalmente el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito revocó la suspensión, haciendo alusión al principio precautorio y argumentando perjuicio del interés de la sociedad (Semarnat, 2021). Sin embargo, la transnacional, reiteró su demanda al Estado mexicano, esta vez alegando posibles pérdidas financieras. Según se revela en una copia de la demanda de Bayer-Monsanto contra el Estado mexicano, certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que publicó la revista PROCESO (Balderas, 2021).

El debate en torno a la prohibición del herbicida glifosato en México muestra una arena de disputa que rebasa las fronteras nacionales, en ese sentido, la política rural en el Estado mexicano y el Estado mismo se configura como un espacio de disputa entre instituciones, prácticas y personas en un contexto globalizado (Sharma y Gupta, 2016) en el que las contrapropuestas civiles se encuentran con diversos obstáculos para progresar debido a dinámica global que los sitúa como países expropiados por las naciones más poderosas (Kay y Vergara-Camus, 2018).

### **3.7 Conclusiones**

Como vimos, el gobierno híbrido de la 4T ha configurado un espacio político de disputa. En este contexto, en el último año, en la esfera mediática nacional, se generó un debate, que tuvo como temas centrales el uso del glifosato y las semillas transgénicas en la producción agropecuaria del país. Este debate convocó a una diversidad de actores que en esta investigación situé en dos coaliciones discursivas, ya que los diferentes actores que integran cada una comparten un “encuadre” que los aglutina en una posición de “incidencia común”. Una de las coaliciones defiende el mantenimiento de una política agropecuaria centrada en fomentar un modelo agroindustrial que, depende del uso de maquinaria agrícola, e insumos como semillas híbridas o transgénicas, cuyos promotores son funcionarios de gobierno de alto nivel, agroempresarios y académicos. Y otra que demanda un modelo alternativo de desarrollo rural, mediante la propuesta de incorporar a programas, políticas y proyectos de gobierno preceptos sobre la agroecología, como el no uso de plaguicidas, semillas híbridas o transgénicas, el uso de abonos orgánicos, etc., y que busca la conservación de la biodiversidad y bioculturalidad,

impulsada por académicos, activistas, ONGs, organizaciones de productores, comercializadores, etc.

El análisis del debate sobre el glifosato, los transgénicos y la definición de la política rural en México demuestra que los actores participantes son voces en posiciones hegemónicas – funcionarios y académicos “expertos”, principalmente- que, desde sus “encuadres” legitiman y dan veracidad a sus propuestas, y haciendo uso de sus diversos capitales extienden sus ideas y discursos hacia el general de la población. El análisis de los discursos de estos actores desplegados en medios de comunicación muestra que las posiciones que sostienen los diferentes actores son parte de un “encuadre” que se sustenta en una serie de ideas, conceptos y categorizaciones que, aunque ofrecen “versiones particulares de la realidad” (Long, 2007), dan legitimidad y validez a sus demandas y también han ido generando otras representaciones sobre las realidades sociales, que están teniendo implicaciones tanto en los significados asociados a ciertas categorías en el ámbito público, como a nivel de política pública.

Con esta investigación demostramos, por ejemplo, como los discursos de los actores de la coalición que promueven una transición a la agroecología asociados a las practicas productivas de campesinos e indígenas de México han cobrado tal importancia en el gobierno de la 4T, que se han concretizado a nivel de política pública en programas como el “Sembrando vida” y con acciones gubernamentales como el decreto publicado el 31 de diciembre de 2020 que prohíbe gradualmente el uso del herbicida glifosato y el cultivo de maíz transgénico.

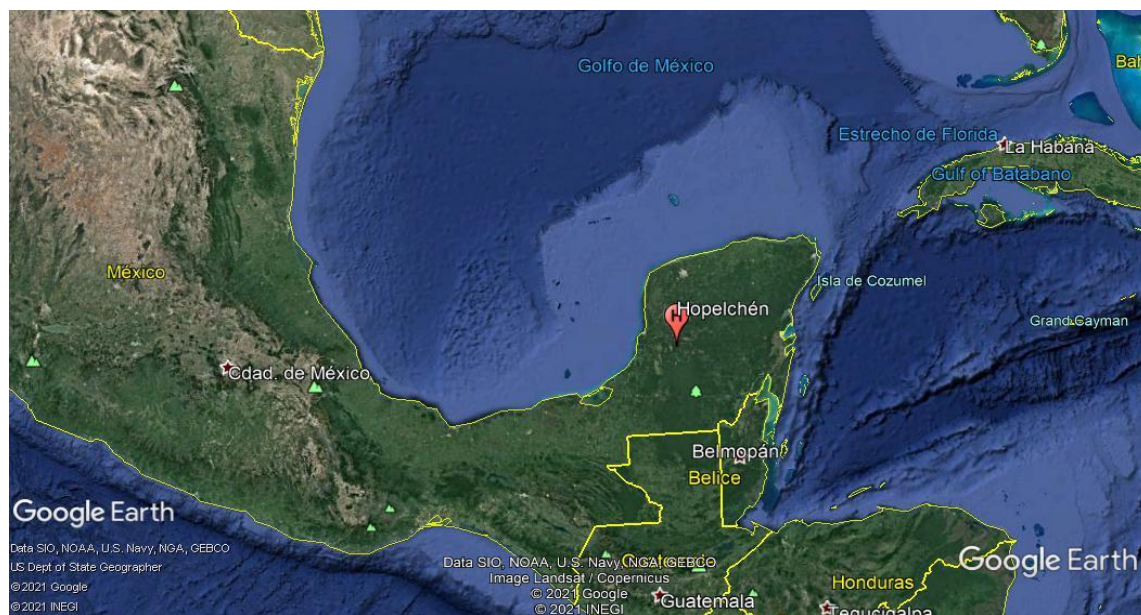
Sin embargo, vemos también que el Estado mexicano y la política de desarrollo rural como espacio de disputa no sólo está siendo contenido y construido por actores que accionan a nivel nacional, sino que actores con capitales diversos del ámbito internacional también están participando en esta contienda discursiva y política.

Queda por verse qué tan cercanas a las diversas realidades rurales son los discursos mediante los cuales se está debatiendo la política de desarrollo rural en México, ya que como vimos, la “sociedad civil”, aunque hace referencia a un general, enmarca apenas a algunos sectores (académicos, ONG’s, organizaciones productivas), que no son representativos en muchos contextos. En el siguiente capítulo, a partir de entrevistas realizadas a campesinos de Hopelchén y mi experiencia de más de cinco años en el municipio, doy cuenta de las perspectivas locales que los productores tienen en torno a los cambios introducidos por la política rural del gobierno de la 4T, y sobre las discusiones que se llevan a cabo en la esfera mediática nacional.

## CAPÍTULO 4

# LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL Y LOS DEBATES EN LA 4T VISTA DESDE LO LOCAL: APROXIMACIONES ETNOGRÁFICAS DESDE HOPELCHÉN, CAMPECHE

Este capítulo tiene como objetivo dar a conocer cómo se perciben los cambios de política y temas que se discuten en los medios de comunicación a nivel nacional en el espacio concreto del municipio de Hopelchén, Campeche. Esto lo desarrollo a partir de las perspectivas de productores de cuatro localidades del municipio de Hopelchén; Dzibalchén, Xmabén, Cancabchén y el campo menonita La Trinidad, y también de funcionarios locales y técnicos que operan programas federales como el Sembrando Vida.



**Ilustración 3.** Ubicación del municipio de Hopelchén, en el estado de Campeche. Elaboración propia con datos de Google Earth 2021.

Hopelchén, Campeche, conocido localmente como “Los Chenes” se ubica en el centro de la Península de Yucatán, en el corazón de la ahora llamada “selva maya”. Hopelchén no es un pueblo, como algunos otros de la Península, con playas paradisíacas o cenotes, pero en su interior guarda, aunque cada vez menos, exuberantes selvas, grutas y un sinfín de zonas arqueológicas.

Hopelchén es un municipio originalmente poblado por comunidades mayas, sin embargo, desde finales de la década de 1980 han llegado al municipio comunidades menonitas, provenientes del norte de México (Durango y Chihuahua principalmente). Estas comunidades encontraron en Hopelchén disponibilidad de tierra, agua subterránea, y mucho apoyo gubernamental de todas las escalas, elementos que les han permitido desarrollar sus actividades agropecuarias de manera libre y, para algunos, de manera bastante lucrativa (Gómez, 2016, Echanove, 2016, Torres-Mazuera *et. al*, 2020, observación participante en campo).

En los últimos años el municipio de Hopelchén se ha vuelto famoso a nivel nacional e internacional, debido a que en 2012 el gobierno mexicano aprobó la siembra de soya transgénica en siete estados de la república, entre ellos, los tres estados que conforman la Península de Yucatán, incluido el municipio de Hopelchén (Torres-Mazuera, 2018). Esta acción gubernamental se encontró con un proceso local que se venía gestando desde 1990, cuando una serie de ONGs financiadas por organismos internacionales, comenzaron a generar procesos de “desarrollo local sustentable” en el municipio, que tuvieron la intención de promover actividades productivas que permitieran el mantenimiento de la selva, como la apicultura (Bazán, 2019).

En esta coyuntura fue cobrando fuerza política y posicionándose mediáticamente el discurso de defensa del territorio de un grupo de mujeres mayas integrantes de la Asociación Civil local llamada *Muuch Kambal*.<sup>41</sup> Esta organización, en alianza con periodistas, activistas, académicos, académicas, abogados y abogadas demandaron al Estado mexicano la prohibición de la siembra de soya transgénica, alegando que, como comunidades indígenas, no habían sido consultadas, como lo mandata el tratado 169 de la OIT. Además de que dicha actividad estaba teniendo fuertes impactos en la vida de las comunidades, y efectos adversos sobre la apicultura y meliponicultura, está última una actividad practicada desde tiempos prehispánicos por familias mayas, lo que, en el contexto de la demanda, permitió integrar a la apicultura moderna como parte de las “tradiciones” y características de la identidad maya.

Así entonces, mediáticamente se fue generando un imaginario de Hopelchén en el que fundamentalmente se reconoce la existencia de apicultores mayas y menonitas que siembran soya transgénica. Hopelchén, sin embargo, es mucho más complejo. En su interior se tejen dinámicas agrarias, productivas, sociales y económicas interculturales interesantísimas y bastante injustas. Con la intromisión de políticas gubernamentales en 1970 y la llegada de poblaciones menonitas a finales de 1980 con un modelo productivo de tipo agroindustrial, las prácticas productivas de

---

<sup>41</sup> En lengua maya: aprendiendo juntos.

las poblaciones mayas como la milpa al que se integró la apicultura, progresivamente, se han ido ampliando.

Considero que el modelo de agricultura tradicional (milpa) practicado por productores mayas se ha ampliado, porque, a diferencia de lo que se aprecia en el discurso dicotómico de los actores de la lucha contra la soya transgénica (mayas=apicultura, milpa/menonitas=agroindustria), la mayoría de los productores mayas son también agricultores que hacen uso de maquinaria agrícola, semillas híbridas y plaguicidas, pero a la par muchos continúan sembrando maíz criollo, frijol y calabaza en policultivo, además ibes, jamaica, calabaza, ajonjolí, yuca, jícama, camote, entre muchos otros árboles frutales, y practicando la apicultura y algunos la ganadería a pequeña escala o extensiva, es decir, mantienen una lógica de diversificación campesina en actividades y escalas (observación participante en campo).

No obstante, debido al sistema agroindustrial mediante el cual producen las poblaciones menonitas, y que ha sido adoptado y adaptado por muchos productores mayas, la demanda de tierras en el municipio ha crecido de manera constante. En la actualidad una gran mayoría de los ejidatarios del municipio rentan o han vendido tierra a menonitas, lo cual ha generado dinámicas de dependencia entre los grupos. Los menonitas por un lado requieren la tierra propiedad de los mayas que son co-propietarios de grandes extensiones de tierra (desde 20 hasta 100 hectáreas) y muchos de los mayas requieren de los servicios agrícolas que los menonitas proveen debido a su disponibilidad de maquinaria (Torres, Bazán *et al*, 2020).

En Hopelchén se ha desarrollado una lógica agraria que coincide con algunas regiones de Latinoamérica en las que los gobiernos han permitido e impulsado legislativamente la entrada de empresas agroindustriales y cultivos agroindustriales. En estos contextos, mencionan los compiladores de “La cuestión agraria y los gobiernos de izquierda en América Latina”:

Las clases rurales adoptan una diversidad de estrategias y ahora algunos terratenientes, medianos, e incluso pequeños productores y comunidades campesinas indígenas, arriendan parte o la totalidad de sus tierras. Se las arriendan al agronegocio, a los agricultores capitalistas o un grupo de inversionistas y administradores agrícolas que tienen el capital, la tecnología y un control parcial sobre la cadena de valor, lográndose así una mayor productividad y rentabilidad comparado con la que el dueño de la tierra podría obtener (Baraibar, 2014). Estos arreglos de arrendamiento tienden a ocurrir en el cultivo de soja y en la explotación de los recursos forestales (Kay y Vergara-Camus, 2018 p. 30).

Como expondré a lo largo de este apartado, productores con dinámicas tan heterogéneas como los de Hopelchén, la dinámica socio productiva en la que están inmersos en relación con



otros actores, así como las limitadas capacidades gubernamentales de los distintos niveles del gobierno en turno y precedentes, entran en tensión con los modelos propuestos por las coaliciones que se disputan la construcción de la política de desarrollo rural, que sitúa a campesinos indígenas como los de Hopelchén como sujetos de sus propuestas.

Para este capítulo retomo mi experiencia de investigación y convivencia con personas de Hopelchén por más de cinco años y 14 entrevistas realizadas entre septiembre y diciembre de 2020 a productores mayas y menonitas y funcionarios del municipio de Hopelchén. Estas entrevistas giraron en torno a la operatividad y percepciones acerca de los programas agropecuarios de los diferentes niveles de gobierno, particularmente sobre cómo consideran los cambios que se proponen en los programas federales de la 4T (como el no uso de plaguicidas, la reforestación, etc.). Así también me interesé en conocer sus percepciones acerca del debate que se suscitó en la esfera pública nacional respecto a la prohibición del herbicida glifosato asociado a los cultivos transgénicos. También entrevisté a dos de los técnicos que operan programas del gobierno federal en la región quienes me brindaron detalles sobre los programas y su percepción sobre éstos. Derivado de mi experiencia investigativa previa en la región también pude comunicarme con el encargado del Centro de apoyo al Desarrollo Rural (CADER) de Hopelchén quien, desde su posición como funcionario local, me habló sobre los programas que SADER opera en el municipio, y me dio algunos detalles sobre su aplicación, así como de los cambios más representativos que, desde su perspectiva, están generados. En esta investigación por respeto a la confianza de cada uno de los entrevistados reservaré su identidad.

Para el análisis que me propongo en este capítulo retomo el enfoque de la ecología política. En términos amplios, la ecología política argumenta contra la visión de que los problemas ambientales son universalmente interpretados y la resolución de estos es siempre uniforme y evidente (Escobar, 2008; Durand, 2017; Durand Smith *et al*, 2011). La ecología política centra su análisis en entender los procesos de cambio ambiental como reflejo de las fuerzas político-económicas de la sociedad, así como en emprender indagatorias sobre las diferencias de poder en el acceso y control de los recursos naturales (Durand Smith *et al*, 2011, Forsyth, 2001).

Bajo esta perspectiva resulta evidente que puedan surgir tensiones y contradicciones entre diversos discursos relacionados con ciertos temas. La situación se torna todavía más compleja si los discursos hegemónicos no tienen concordancia con las necesidades y sentires de los grupos que hacen uso de los territorios y sus recursos. Con este enfoque pretendo conocer

los efectos que las políticas públicas producen, las relaciones que crean y los sistemas de pensamiento más amplios en los que están inmersas (Shore, 2010).

Así también retomo la idea de Roth (2002), quien plantea que quién formula la política no necesariamente la ejecuta, es decir, que la ejecución de la política puede tornarse diversa de sus objetivos iniciales, según quiénes la ejecuten y reciban, ya que se insertan en sus entramados de valores, conocimientos y perspectivas. Esta idea abre la posibilidad de explorar la densidad de las articulaciones multiescalares observando la adaptación de la política pública a través de una multiplicidad de actores, e intereses que se filtran y materializan en contextos sociohistóricos particulares. Este hecho supone que los beneficiarios de la política pública no son receptores pasivos, sino que, como explico en este capítulo, intervienen en distinto grado en su configuración, ya que son parte de las redes de actores que las ayudan a producir o a ajustar a sus entornos específicos.

La importancia de enfocarme en la dimensión de la política pública está en que, como menciona Shore (2010), las políticas públicas sirven como discursos, dispositivos de racionalidades de gobierno que pretenden regular la vida social y traducen intereses ideológicos en discursos que se presentan como neutrales. Como “verdades” que generan maneras de crear el mundo e intervenir en él, como herramientas deseables e universalmente aplicables, como ha sido la ciencia, específicamente las ciencias agronómicas en el desarrollo rural como muestra Escobar en el caso de Latinoamérica (2008).

#### **4.1 Contradicciones subnacionales: la política agropecuaria de Campeche**

Campeche es uno de los tres estados que integran la Península de Yucatán. La economía de este estado se basa principalmente en la producción de petróleo, gas natural y en el turismo, también lo producido por el sector agropecuario es significativo, aunque más en términos espaciales que económicos. El aporte económico que hace al estado es bastante débil, de apenas el 0.6% del total (SIAP, 2016).

En este aspecto vale resaltar que en las extensas áreas en que se desarrollan actividades agropecuarias en el estado de Campeche hay una gran diversidad productiva y también una diversidad cultural entre los productores. En el estado habitan personas de origen maya, mestizos provenientes de otros estados y menonitas que arribaron al municipio de Hopelchén a finales de 1980 y que se expandieron a otros municipios, e incluso del vecino estado de Quintana Roo. Se calcula que en el estado hay alrededor de 2000 familias menonitas, lo que equivale a poco más

de 14000 personas (Echanove, 2016, p.58). Pese a ello, con la precaución de no estar sugiriendo una división de modelos productivos entre las diferentes etnias, el programa sectorial de desarrollo rural de Campeche, el cual “rige las acciones y recursos dirigidos hacia los proyectos del campo” (PSDR 2015-2021, p.3) del gobierno del estado, reconoce la existencia de dos modelos productivos;

...uno que cuenta con maquinaria, insumos, tierras mecanizadas y semilla mejorada [...]. Y otro que se desarrolla en condiciones tradicionales que ocupa áreas marginales donde las labores se efectúan sin semillas mejoradas y donde se obtienen bajos rendimientos (PSDR 2015-2021, p. 9).

A pesar de reconocer dos modelos, el mencionado programa define que el modelo de desarrollo rural “ideal” para el campo campechano es el de tipo agroindustrial, lo cual para la política rural estatal “implica la capitalización, modernización, mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento agroindustrial, con la finalidad de elevar la rentabilidad y competitividad agropecuaria” (PSDR 2015-2021, p.3), lo que contrasta fuertemente con lo planteado por la Coalición por un modelo de desarrollo rural alternativo, que ve en las “agriculturas tradicionales” una gran potencialidad para el desarrollo rural sustentable.

En cambio, para el actual gobierno del estado de Campeche la agricultura “tradicional” es un gran problema que ha causado “el rezago ancestral” de la agricultura, debido a que presenta bajos niveles de productividad, altos niveles de endeudamiento, insuficiente capacitación; escasa transferencia de tecnología, así como de financiamiento oportuno y accesible, lo que ha generado un círculo de marginación y pobreza. (PSDR 2015-2021). También identifican como problemática la “insuficiente infraestructura de acopio y selección”, lo que dificulta la comercialización y “acceso a esquemas comerciales en mejores condiciones de venta” (PSDR 2015-2021, p. 10).

La agroindustria, por el contrario, según lo referido en el PSDR, es un sector que ha mejorado la economía del estado, por ende, se debe apoyar, para así “construir un nuevo rostro del campo sustentado en un sector agroalimentario productivo, competitivo, rentable, sustentable y justo, que garantice la seguridad alimentaria” (PSDR 2016-2021, p. 3). En otras palabras, se propone enterrar agriculturas campesinas “tradicionales” como la milpa, por ser consideradas como improductivas y rezagadas.

El impulso del gobierno estatal a la agroindustria, sin embargo, no es asunto de la actual administración. La agricultura de tipo comercial fue impulsada como modelo de desarrollo en el estado desde la puesta en marcha del modelo de la Revolución Verde por la política agropecuaria

federal desde 1970. En el estado este modelo se impulsó con el Programa de Inversión para el Desarrollo Rural (PIDER), mediante un proceso de “modernización agrícola”. Esto incluyó la distribución de créditos para la mecanización de tierras ejidales, la introducción de semillas híbridas, fertilizantes agroquímicos y herbicidas, así como equipo para la apicultura comercial (Llanes, 2001; Schüren, 2013; Morales, 2004; Gómez, 2016).<sup>42</sup>

El estado de Campeche hoy en día ocupa el segundo lugar a nivel nacional en producción de soya, el cuarto en palma de aceite, el quinto en chile habanero, el tercero en producción de miel, esto a pesar de que esta última no ha tenido un gran apoyo gubernamental, como si lo ha tenido la soya, por ejemplo. En cambio, en el maíz, cultivo sobre el cual el gobierno federal actual busca el autoabastecimiento, Campeche ocupa el lugar 14 respecto al volumen de la producción, con un rendimiento de 2.36 ton/has, menor al que se genera en los estados considerados con mejores rendimientos.<sup>43</sup> Aun así es uno de los principales proveedores del grano en la Península de Yucatán (PSDR 2015-2021; Aguirre, 2020).

La producción de soya y maíz, dos cultivos de gran importancia en el estado, valen una mención especial debido a que el maíz es la base alimentaria de la mayoría de la población campechana, especialmente rural, por lo que una gran proporción de la producción del grano está dedicada al autoconsumo. Y la soya, por su parte, también ocupa un lugar muy importante en la dieta de los mexicanos y campechanos (aunque no de manera tan directa como el maíz), pero su importancia, en los últimos años, ha respondido a que una parte de la producción de soya en el estado es genéticamente modificada, propiedad de la empresa transnacional Bayer-Monsanto. En el estado, sin embargo, como menciona Echanove (2016),

...se han sembrado dos tipos de semillas, la llamada Huasteca o “convencional” (no genéticamente manipulada), producida en el estado de Tamaulipas por el organismo gubernamental INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias), y la genéticamente manipulada o transgénica (GM), producida y distribuida mayoritariamente por Monsanto. Este grano pertenece al grupo de los llamados Roundup Ready, que son resistentes a la aplicación del herbicida denominado glifosato, producido también por Monsanto (GRAIN, 2014) (p.55)

De acuerdo con el estudio realizado por Echanove (2016) entre los factores que han permitido la expansión del cultivo de soya transgénica en el estado se encuentran el permiso

---

<sup>42</sup> El Programa de Inversión para el Desarrollo Rural (PIDER) se impulsó tras la dotación de tierras como parte de la reforma agraria. Este supuso la necesidad de brindar a las poblaciones campesinas los instrumentos necesarios para desarrollar la productividad del campo mexicano.

<sup>43</sup> Como Sinaloa y Baja California quienes reportan rendimientos de 9.67 y 7.54 ton/has, respectivamente y ocupan los primeros lugares nacionales (PSDR 2015-2021).

otorgado por el Estado mexicano en 2012, la presencia de la empresa Monsanto en el estado, y los apoyos gubernamentales, especialmente el programa federal llamado Pro-oleaginosas.

Los principales municipios productores de soya son Campeche y Hopelchén, aunque quienes producen la gran mayoría de esta son menonitas que viven en colonias en el municipio de Hopelchén, solamente 30 productores no son menonitas, lo que representa solo el 15% del total de los 200 que cultivan ese grano en Campeche (Echanove, 2016, p.58).

Hoy en día se sabe que, pese a ser ilegal, la mayoría de los cultivos de soya del estado se realizan utilizando semillas transgénicas (observación participante en campo). Este cultivo ha tenido una gran aceptación por menonitas, debido a que presenta mayores rendimientos, un mejor precio que el maíz y un mercado seguro en el vecino estado de Yucatán. También porque es un cultivo compatible con las formas de producción de los menonitas, que implica la utilización de maquinarias e insumos químicos (Echanove, 2016).

El Programa Sectorial de Desarrollo Rural del estado, con un enfoque productivista y economicista, promueve y apoya el modelo agroindustrial, lo que coincide con el encuadre de la coalición por el mantenimiento del modelo de producción agroindustrial. Sin embargo, cuando revisé las publicaciones de los últimos 2 años del Facebook de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) del estado de Campeche, una porción, aunque todavía menor de los programas y “apoyos de concurrencia” del gobierno del estado, son para cultivos menores como huertos de traspatio, sistemas de riego con energía solar o sábila orgánica, lo que podría coincidir con las propuestas de la coalición por un modelo de desarrollo rural alternativo (Secretaría de desarrollo rural Campeche, 2021).

Este aparente enfoque híbrido del gobierno de Campeche en el ámbito de la política de desarrollo rural, hace pensar en una probable transición de la política estatal, lo cual se podría considerar como un resultado del cambio de enfoque de la política rural federal del actual gobierno de la 4T. Aunque cuando, por mi vínculo con personas en el municipio de Hopelchén y la capital campechana, me enteré de otras acciones que ha emprendido el gobierno estatal en ciertas regiones del estado, quedo convencida de que, como hace 30 años, la perspectiva de la clase política campechana es la “modernización del campo”, con las implicaciones sociales y ambientales que esto conlleve (observación participante en campo). Como veremos en los siguientes apartados.

## 4.2 La contradicción en el ámbito local: Hopelchén un territorio biocultural maya y “el granero del sureste”

Hopelchén es uno de los trece municipios que integra el estado de Campeche. En los últimos años ha captado los reflectores de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional debido a que fue el lugar donde se gestó la lucha que puso en el centro de la discusión los perjuicios de la soya transgénica hacia las abejas y la apicultura, una actividad de gran importancia ambiental y cultural practicada por personas de comunidades mayas de la Península de Yucatán. En el municipio habitan, además comunidades menonitas que llegaron a finales de 1980, quienes practican un modelo de agricultura intensivo de tipo agroindustrial.

A nivel mediático este contexto se ha representado como un espacio de confrontación entre apicultores mayas y menonitas y sus sistemas productivos. Sin embargo, como veremos en este capítulo, en el municipio existe una dinámica social y productiva bastante más compleja de lo que se representa en medios de comunicación (observación en campo, Torres-Mazuera *et al*, 2020).

Hopelchén salto a la luz mediática nacional en el 2012 cuando una organización local en alianza con activistas “asesores”, abogados y periodistas, bajo el nombre del Colectivo MAOGM, emprendieron una serie de acciones legales y mediáticas contra el permiso que instancias del gobierno federal en el periodo al mando de Peña Nieto dieron para la siembra de soya transgénica en la Península de Yucatán, (observación en campo, Torres-Mazuera, 2018).

La campaña mediática emprendida por este conjunto de actores tuvo como principal argumento las afectaciones que los apicultores mayas estaban teniendo por la siembra de soya transgénica como la posible contaminación y el sucesivo impedimento de comercializar su miel en los mercados internacionales por la presencia de polen transgénico, del cual se desprenden argumentos como la deforestación y contaminación causada por el uso de plaguicidas asociados al cultivo, la muerte de abejas por el uso de plaguicidas, entre otros aspectos. Así entonces los apicultores, que en la práctica también son agricultores, ganaderos, por temporadas jornaleros, albañiles, etc. se volvieron los representantes de esta lucha, y contrincantes del Estado mexicano y los menonitas soyeros (observación participante en campo).



**Ilustración 4.** Hopelchén en la prensa nacional.

Fuente: desInformémonos

Como adelanté en la introducción y he ido exponiendo en este apartado, Hopelchén es un municipio bastante complejo tanto, por lo que representa simbólicamente, cultural y ambientalmente en distintas esferas como la nacional e internacional, así como por las dinámicas sociales que se gestan en su interior.

Una de las contradicciones de esta complejidad, la sitúo en los contrastes entre los discursos de Hopelchén que circula sobre él en la esfera pública nacional y en el discurso y proyecto municipal y estatal. En el discurso expuesto en “defensa del territorio maya” a nivel nacional por diferentes actores, los productores mayas de Hopelchén se describen como guardianes de la “selva maya”, mientras que el discurso estatal y municipal los productores de Hopelchén (mayas y menonitas) han creado el “granero del sureste”, gracias a su productividad y “sus ganas de trabajar” (Nacho España, 2021).<sup>44</sup>

Hopelchén guarda una riqueza biocultural excepcional, la cual ha sido ampliada por el manejo y uso del territorio que los habitantes originarios le han dado durante largo tiempo. Lo cual ha sido resaltado en el discurso de la coalición por un modelo alternativo en contra de la soya transgénica, sin embargo, el “territorio biocultural maya” de Hopelchén ha sido fuertemente explotado desde la época colonial con el comercio del palo de tinte, que fue seguido por la explotación del chicle, las maderas preciosas como el cedro, la caoba, y más recientemente la

<sup>44</sup> Ignacio España (Nacho España), fue presidente municipal de Hopelchén en el periodo 2016-2019, y actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Campeche (información de campo).

agroindustria. Todo lo cual ha tenido como constante que han sido proyectos promovidos por actores externos, quienes han obtenido el mayor beneficio de estas explotaciones (Bazán, 2019).

La agricultura de tipo industrial comercial, la forma actual de la explotación del territorio (con todo lo que el concepto conlleva; agua, suelo, selva, etc.), ha sido posible en el municipio debido a sus características edáficas (del suelo), que a diferencia de otras regiones de la Península con suelos en general pedregosos, tiene espacios de suelo bastante profundos, lo que ha permitido la utilización de maquinaria, por ejemplo, para la remoción de la tierra y la siembra mecanizada. Lo que ha sido aprovechado por grupos menonitas, ya que desde su llegada (y desde mucho antes) han desarrollado una agricultura de tipo agroindustrial. Justamente los menonitas buscan terrenos para expandirse y asentarse que les permitan desarrollar este tipo de agricultura (Comunicación personal con menonitas de La Nueva Trinidad, Hopelchén, 2018).

Otro factor, para nada menor, ha sido el impulso de los diferentes niveles de gobierno del modelo agroindustrial, el cual se ha traducido en proyectos y programas como el mencionado PIDER. En el municipio este programa impulsó un proceso de “modernización agrícola”, lo que incluyó la distribución de créditos para la mecanización de tierras ejidales, la introducción de semillas híbridas, fertilizantes agroquímicos y herbicidas, (Llanes, 2001; Schüren, 2013; Morales, 2004; Gómez, 2016). De ahí le han seguido cambios legislativos federales y numerosos programas y proyectos federales y estatales que impulsan la compra de maquinaria agrícola, los desmontes, el uso de plaguicidas, fertilizantes y semillas híbridas y transgénicas (observación en campo).

Ello ha provocado la adopción del modelo agroindustrial por parte de muchos campesinos mayas, sin embargo, la gran mayoría de ellos siguen teniendo dinámicas productivas diversificadas, propias de la lógica de producción campesina, asociada a su especificidad cultural. Por ejemplo, muchos productores de Hopelchén que tienen mecanizados en los que siembran semillas híbridas o incluso transgénicas, cuya producción dedican a la venta, en otros terrenos o en la periferia de sus terrenos dedicados al cultivo de tipo comercial (llamados localmente mecanizados) siembran maíz criollo en asociación con ibes, frijoles, calabaza, etc. que usan para su autoconsumo o la venta a nivel local. También siembran jamaica, camote, macal, que cosechan específicamente para “finados” o día de muertos. En los traspatios de las familias mayas podemos encontrar diversidad de cultivos, árboles frutales como cítricos, mamey, tamarindo, huaya, hortalizas menores como lechugas, cilantro, pepino, calabacita, etc., que coexisten con



animales de traspatio como gallinas, patos, borregos y cerdos (observación participante en campo).

Aun los menonitas que tienen como base una agricultura comercial, que destinan sobre todo para la venta, también cultivan algunas hortalizas para su consumo. En los campos menonitas se pueden ver árboles frutales bien ordenados adornando las casas, como mangos, higos, palmeras de coco, y algunos negocios de transformación de su producción pecuaria como queserías. Incluso, en mis años de andanza en el municipio conocí a menonitas que practican la apicultura como actividad principal, o en asociación con la agricultura y la ganadería (observación participante en campo).

Así entonces vemos que Hopelchén es un municipio de grandes contrastes en el que se tejen dinámicas sociales interculturales y hay una diversidad productiva bastante dinámica que, por supuesto, está integrada a los mercados transnacionales, empezando por la producción de miel,<sup>45</sup> pero también a los mercados locales y nacionales en los que está integrados la soya, el maíz y hortalizas como la sandía y el tomate, y también hay dinámicas productivas de subsistencia y autoconsumo (observación en campo).



**Ilustración 5.** Doña Wilma comprando elotes a menonita.  
(fotografía propia, julio de 2016)

La heterogeneidad y complejidad socioproductiva que existe en el municipio, no está en el discurso contra la soya transgénica lo cual, por supuesto, no se debe al desconocimiento de ella, sino que la construcción discursiva del problema socioambiental que se sitúa en Hopelchén tiene un fin estratégico, un fin político que, en esencia, busca revelar injusticias estructurales e

---

<sup>45</sup> El 95% de la miel producida en Hopelchén se exporta, sobre todo, a países de la Unión Europea (UE), principalmente a Alemania, Holanda, Italia y Bélgica (Bazán, 2019).

históricas que se expresan muy bien con la expansión del cultivo de soya transgénica y la presencia de menonitas.

En el contexto de incidencia política de OSC, las representaciones son creadas, no sin un anclaje empírico, desde luego, si no que pueden omitir ciertas partes de la realidad estratégicamente, en el sentido que propone Li (1996), como un vocabulario de legitimación para realizar solicitudes y presión y generar un impacto a nivel político. Las representaciones, aunque idealizadas, son capaces de producir ganancias estratégicas, a medida que contrarrestan las ortodoxias de desarrollo prevalecientes, abren oportunidades, y proporcionar un vocabulario legitimador para enfoques alternativos.

La representación que se ha hecho a nivel nacional e internacional sobre campesinos e indígenas como la población maya de Hopelchén, se han traducido en acciones políticas concretas en el gobierno de la 4T, como por ejemplo en el programa Sembrando Vida, que se ha pensado para un campesino/indígena que realiza prácticas productivas “tradicionales”, y tiene por objetivo la autosuficiencia alimentaria. Sin embargo, estas representaciones, por su generalidad y necesaria simplificación podrían resultar difíciles de operativizar en realidades específicas tan heterogéneas y complejas como la que analizo en este capítulo.

En los siguientes apartados muestro algunas percepciones de productores de los ejidos de Dzibalchén, Xmabén, Cancabchén y el campo menonita La Trinidad, sobre los cambios en la política de desarrollo rural propuestos a nivel federal, considerando cómo se introducen en las dinámicas productivas los programas que se promueven como estrategias de transición hacia “prácticas productivas sustentables” y hacia la agroecología; el programa Sembrando Vida y el programa Producción para el Bienestar, cuyos objetivos expuse en el capítulo 2, apartado 2.2.

### **4.3 Percepciones locales sobre los cambios de la política de desarrollo rural del gobierno de la 4T en el contexto local de Hopelchén**

Como expliqué en el capítulo 2 el gobierno de la 4T introdujo una serie de modificaciones a la política de desarrollo rural federal. Estas a su vez han tenido ciertos impactos en las dinámicas políticas del municipio, y son valoradas de diferente manera desde las perspectivas de los productores de Hopelchén, según sus aspiraciones y perfiles productivos. A algunos productores les “cayó como anillo al dedo” y para otros la percepción fue de ir “de mal en peor”.

En las administraciones gubernamentales anteriores a la 4T los productores menonitas, empresarios y algunos productores grandes mayas, obtuvieron la mayor parte de los recursos

federales y estatales destinados al “desarrollo rural” del municipio. Esto debido, principalmente, a que algunos de ellos cuentan con una mayor solvencia económica que les permitió acceder a subsidios que tuvieron el formato de co-inversión como los programas estatales de “concurrencia” para la compra de maquinaria agrícola, así como por que lo que se apoyaba (lo que prevalece hasta ahora) fue una mayor productividad que, por su disponibilidad de tierra y tecnología agrícola, los menonitas han logrado. Además, por su dinámica organizativa, menonitas y empresarios, pudieron acceder a subsidios por medio de la constitución de organizaciones legales como Sociedades Productivas (Bazán, 2020, Diagnóstico sobre la política pública en Hopelchén, manuscrito no publicado).

Esta situación fue un tanto revertida por las modificaciones que el gobierno federal de la 4T introdujo en la política de desarrollo rural. Según me comentó el encargado del CADER de Hopelchén. Desde su perspectiva,

la política agrícola con la administración actual está beneficiando a los más necesitados [...] los apoyos están llegando a quienes realmente les corresponde, que sean del campo y que vivan en sus localidades, para que aumenten su calidad de vida (comunicación personal, 8 de diciembre de 2020).

El funcionario me comentó que el único apoyo que reciben los productores del municipio en la actualidad es el programa Producción para el Bienestar (antes PROAGRO o PROCAMPO), “todos los demás programas fueron cancelados para evitar duplicidad de apoyos” (comunicación personal, 8 de diciembre de 2020). El objetivo de unificar todos los apoyos en un solo programa, comentó el encargado, fue aumentar el padrón de beneficiarios, “en el CADER de Dzibalchén se logró incrementar el padrón casi en un 100%”, mencionó que esto cumple con el objetivo de la 4T que, desde su perspectiva, es “apoyar a más productores, pequeños productores, con menos oportunidades [...] la idea era darle ingreso a productores nuevos, jóvenes que cuenten con la legal posesión de la tierra y sean realmente los que lo están trabajando” (comunicación personal, 8 de diciembre de 2020).

Como ejemplo mencionó que, en Dzibalchén, “la mayoría de nuevos ingresos son comuneros que no tenían apoyo, se les aceptó un máximo de 3 ha, según el reglamento interno de cada ejido, en el ejido de Dzibalchén por ejemplo a los comuneros se les reconoce hasta 2 ha” (comunicación personal, 8 de diciembre de 2020).

El encargado de CADER, me comentó que al municipio de Hopelchén “le cayó como anillo al dedo” los cambios introducidos en la política agropecuaria, “fuimos beneficiados de gran manera dado que caemos en la zona de alta y muy alta marginalidad con población indígena”

(comunicación personal, 8 de diciembre de 2020), criterio que el gobierno federal impuso para acceder a programas, como el Sembrando Vida y Producción para el Bienestar.

Un productor ejidatario también me dijo que, por primera vez después de muchos años de no recibir el PROCAMPO (como se le dice localmente al programa Producción para el Bienestar), pudo ingresar al programa y registrar 5 hectáreas (comunicación personal, 3 de diciembre de 2020). Esto sólo ocurrió con los ejidatarios nunca antes registrados en el Padrón, los productores que están registrados y que hoy tienen más hectáreas en producción (algunos muchas más), no pudieron actualizar su información porque el programa no lo permitió. Esta desactualización de los datos sobre el tamaño de los terrenos donde se produce y lo producido realmente por los productores puede estar dando falsos perfiles, lo que se puede traducir en información incorrecta que se usa como insumo para las investigaciones y la creación de programas públicos.

Para menonitas y productores grandes mayas (50-80 ha), en cambio, la política agropecuaria va “de mal en peor”. El productor más grande de Dzibalchén, con 80 ha de mecanizado me comentó, que no cuenta con ningún apoyo de gobierno, salvo el PROCAMPO (ahora Producción para el Bienestar) en 1 hectárea, el equivalente a \$1500 por año. Me comentó que se ha visto muy afectado por estos recortes debido a que antes recibía varios subsidios para insumos, maquinaria y contratación de seguro. Respecto a este último mencionó que en 2019 el seguro le costaba \$380 pues recibía un subsidio del gobierno federal y uno del gobierno estatal. En la actualidad estos subsidios desaparecieron y él cubre un costo total de \$1980 por hectárea. Sobre el seguro mencionó: “es obligatorio para todos aquellos productores que trabajen con crédito de alguna institución bancaria”. También me dijo que desapareció el programa VIDA, el cual le apoyaba con insumos; semillas, agroquímicos y fertilizantes.<sup>46</sup> Así como el PIMAF y el programa Pro-oleaginosas que daba un subsidio a la soya de \$1500 por tonelada y \$350 por tonelada de maíz; “te apoyaban por producir” (comunicación personal, 13 de diciembre de 2020).

Los productores menonitas grandes viven un panorama similar, desde la entrada de la 4T al gobierno federal no han recibido ningún apoyo gubernamental ni de manera particular ni a través de sus figuras legales (como sociedades productivas). En entrevista los gobernadores de El Temporal comentaron “hasta ahorita no sentimos que haya mejoría” (comunicación personal, 24 de noviembre de 2020). Respecto a los seguros dijeron que, aunque no haya subsidios de

---

<sup>46</sup> El productor me comentó que este programa era operado por Monsanto (comunicación personal, 24 de noviembre de 2020).

gobierno “hay que pagarlos, no hay de otra”. Desde su óptica dicen que “está bien dar el apoyo a pequeños productores, pero hay que ayudar a los grandes también”. Argumentaron que los grandes productores dan empleo, y pagan más que un salario mínimo (\$300). Uno de los gobernadores me dijo “aquí viene mucha gente de los pueblitos a trabajar y ganan más de lo que el gobierno les da, pero si el gobierno les da dinero cuándo van a empezar a trabajar”. Desde su perspectiva los apoyos que da el gobierno “son para gente floja”. Dicen que a pesar que el gobierno anterior robaba mucho estaban mejor, “apoyaban más” (comunicación personal, 24 de noviembre de 2020).

En el siguiente apartado me centro en explicar cómo se introducen en las dinámicas productivas los programas que se promueven como estrategias de transición hacia “prácticas productivas sustentables” y hacia la agroecología; el programa Sembrando Vida y el programa Producción para el Bienestar y el componente de “asistencia técnica”, muestro algunas percepciones de los productores de los ejidos de Dzibalchén, Xmabén, Cancabchén y los campos menonitas La Trinidad y Nuevo Durango.

#### **4.3.1 Percepciones locales sobre Sembrando Vida y Producción para el Bienestar: retos frente a la heterogeneidad campesina y productiva**

Uno de los principales cambios en la política de desarrollo social con presencia en el medio rural fue la creación del programa Sembrando Vida, un programa que busca fomentar la soberanía alimentaria comunitaria bajo un esquema de producción agroecológica, aumentar la economía de los productores más necesitados y promover la reforestación del campo mexicano (Secretaría de Bienestar, 2021).

Este programa se implementó de manera gradual en distintos municipios del país. En Hopelchén fue hasta el 2020 que el programa comenzó a operar en los 32 ejidos del municipio, integrando a unas 2000 personas,<sup>47</sup> lo que representa un poco más del 30% del total de las 6159 unidades de producción en el municipio (PMD 2018-2021). Los campos menonitas no fueron beneficiados con el programa ya que, según me comentó el “técnico social” del programa Sembrando Vida, que trabaja en 8 de los ejidos de Hopelchén, el programa “está definido para operar en ejidos”, lo cual me fue confirmado por gobernadores de los campos menonitas de La Trinidad y un poblador de Nuevo Durango (comunicación personal, 24 de noviembre de 2020 y 6 de diciembre de 2020).

---

<sup>47</sup> Presentación Sembrando Vida, información proporcionada por Irma Gómez.

En el poblado de Dzibalchén, un poblado más o menos grande de unas 2000 personas considerado una “junta municipal”, encontré que se establecieron 3 grupos de entre 20 y 25 personas, llamados en el programas Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC’s); un primer grupo que no puede conocer su nombre, otro llamado *Kuxtal Pakal* (conformados con gente de Dzibalchén), y uno más conformado con gente del ejido de Ix Kix y del ejido de J. Mujica que viven en el pueblo de Dzibalchén (ambos colindantes al ejido de Dzibalchén) llamado *Ka Kuxtal*. Estos dos últimos grupos, según el representante de *Kuxtal Pakal*, y un miembro del grupo mixto, están conformados en su mayoría por hombres adultos, ejidatarios y comuneros, y en menor medida por mujeres y ancianos (comunicación personal, 4 de diciembre de 2020).

Estos mismos beneficiarios me comentaron que el programa inició hace unos 6 meses (o sea en julio de 2020). Estos productores me explicaron, que una de las actividades que realizaron para entrar al programa fue “ampliar” (desmontar) una superficie de 2.5 en la cual sembraron maíz y calabaza *Xtup* respectivamente, en ambos casos fueron monocultivos.<sup>48</sup> Otro de los integrantes del grupo *Kuxtal Pakal*, me comentó haber sembrado soya (por lo que me dijo después, intuyo que transgénica), también en monocultivo. También dijo que va ampliar más (o sea desmontar), “un pedazo de cerrito” para sembrar los árboles maderables que le han dado como parte del programa (cedros, caobas y algunos frutales). Es importante mencionar que estos tres productores son medianos, y tienen tratos de aparcería o renta con menonitas, lo que podría estar influenciando su decisión de no destinar espacio de sus terrenos ya mecanizados para el programa (comunicación personal, 4 de diciembre de 2020).<sup>49</sup>

Productores de Cancabchén y Xmabén, me comentaron que en sus grupos de trabajo hay panoramas similares, la mayoría de los beneficiarios del programa son hombres ejidatarios. Comentaron también que algunos desmontaron un espacio aparte de su mecanizado o milpa para destinar al programa (comunicación personal, diciembre de 2020).

Tres de los beneficiarios me dijeron que a pesar de que les han dicho que no pueden usar agroquímicos han usado glifosato para quitar la hierba. Un productor de Dzibalchén me dijo que un ingeniero encargado del programa “les dio permiso” de usarlo debido a la cantidad de hierba que hubo, resultado de la cantidad de lluvia que cayó el año pasado. Los otros dos productores me expresaron que han utilizado glifosato: “nos vemos obligados a usarlos” “la hierba te gana”, “es imposible mantener limpio dos y media hectáreas” (comunicación personal, 2 de diciembre

---

<sup>48</sup> Como *Xtup* se conoce localmente a una calabaza que se usa para la obtención de semillas con valor comercial.

<sup>49</sup> Para mayor información sobre los tratos de renta y venta entre mayas y menonitas ver: Torres-Mazuera *et al*, 2020.

de 2020). Su perspectiva es que muy difícilmente podrán erradicar el uso de herbicidas, por lo que percibí los seguirán usando con consentimiento o no de los técnicos. Por lo que me comentó el técnico del programa hasta ahora no hay mecanismos que puedan permitirles verificar si en estos terrenos se han utilizado agroquímicos. Esto quizá porque hasta el momento sólo habían tenido 3 visitas (verificaciones) a los terrenos de los beneficiarios (comunicación personal, 1 de diciembre de 2020).

Productores de Xmabén también me dijeron que han usado glifosato en el terreno destinado al programa “porque es muy difícil mantenerlo limpio”. Sólo un par de productores de Cancabchén me dijeron que destinaron un mes del apoyo del programa para comprar una desbrozadora, esta herramienta les está ayudando a no usar tanto herbicida, aunque admitieron haberlo usado (comunicación personal, diciembre de 2020).

Al respecto el técnico social me dijo que “el programa no está fomentando el uso de agroquímicos” pero “cuando la plaga está muy descontrolada se les sugiere, o sea la maleza o la plaga se les sugiere [el uso de agroquímicos], pero poco a poco es irlo evitando” (comunicación personal, 1 de diciembre de 2020).

Las declaraciones de estos productores y el técnico me hacen constatar una contradicción con los objetivos de reforestación y no uso de plaguicidas en el programa y las prácticas productivas locales, las cuales en el municipio conllevan una alta dependencia a los agroquímicos (observación participante en campo).

También con el significado que le es atribuido al campesino/indígena en el discurso de la coalición por un modelo de desarrollo rural alternativo (en el que situó a la Secretaría de Bienestar, quien opera este programa), cuyo encuadre considera a productores mayas como los de Hopelchén como “sujetos de derecho” y pequeños productores que producen en “sistemas tradicionales” como la milpa, únicamente para el autoconsumo.

En cambio, productores que conozco en Hopelchén que hacen milpa en policultivo, cuya producción es, sobre todo, para su consumo, por diversas razones no pudieron ingresar al programa. Otros productores tanto ejidatarios, como comuneros,<sup>50</sup> que se mueven entre la

---

<sup>50</sup> La palabra “comunero” en Hopelchén hace alusión a un productor al que se le reconoce el derecho a la tierra (la cantidad depende de lo estipulado por cada ejido), pero que no tiene derechos agrarios, como si lo tienen los ejidatarios que son co-dueños legales de las extensiones de tierra que les fue concesionada por el Estado mexicano.

agricultura comercial y la agricultura para autoconsumo y algunas mujeres tampoco pudieron ingresar, por las siguientes causas:

- No se sintieron bienvenidos a la “asamblea informativa” debido a que la organizó el comisario ejidal (esto me lo confirmó el técnico de Sembrando Vida). Esto no resulta sorprendente si consideramos que los comuneros han sido históricamente excluidos de las asambleas ejidales, y el hecho de que algunos programas, en los gobiernos anteriores, únicamente eran accesibles para ejidatarios.
- En el caso de Ix Kix y J. Mujica (ejidos pequeños, colindantes a Dzibalchén), las primeras reuniones se hicieron en los “pequeños ejidos” pero la reunión de inscripción se llevó a cabo en la localidad de Dzibalchén, dos productores de Ix Kix que a mi criterio son los que trabajan según la propuesta del Sembrando Vida, me dijeron que a pesar de que les dijeron que las reuniones serían en su pueblo, los técnicos “nunca llegaron” lo que impidió su inscripción al programa (marginación).
- Un productor de Xmabén me comentó que la asamblea “no me dejó participar”, no me explicó por qué, pero intuyo que, porque su papá es el usurero del pueblo, lo que da cuenta de las tensiones al interior de los ejidos, que también tienen implicación en el acceso a los programas.
- El técnico del programa Sembrando Vida me dijo que la gente tenía desconfianza en el programa por “ideas partidistas”, que se expandió el rumor (por gente del PRI) de que, al comprometer su tierra con el programa, al final el gobierno se quedaría con la tierra. Esta información la confirmaron un par de amigas de Dzibalchén que me dijeron aspiraban a entrar al programa, pero desconfiaron por los rumores.

Esta serie de declaraciones demuestran cómo las relaciones de poder que se gestan al interior de las comunidades tienen implicaciones, no sólo sobre la operativización de los programas, como menciona Shore (2010), y veremos más adelante, sino en el acceso mismo a los programas “públicos”.

Algunos de los productores que entrevisté no se mostraron muy animados respecto al programa, incluso se quejaron del formato grupal del programa, de las reuniones constantes (2 al mes) que “fastidian”, de las cooperaciones que han tenido que hacer para la compra de insumos, y uno de ellos; de “las imposiciones”. Un productor me explicó que a su modo de ver les quieren imponer “formas de hacer las cosas”, y que quisiera ver a los técnicos hacer lo que



les dicen “a ver si son muy chingones”, refiriéndose a aspectos como no usar herbicidas (comunicación personal, 5 de diciembre de 2020).

Algunos productores también me comentaron no estar seguros de continuar hasta el final con el programa, incluso dijeron que ya veré como las personas van desertando y también que si no están de acuerdo con algo sobre la operatividad del programa se retiraran. Uno de los productores de Dzibalchén me dijo que escuchó el rumor de que no pueden tener más de un programa federal y, de ser el caso, prefiere quedarse con el PROCAMPO (Producción para el Bienestar) que anualmente le da un apoyo de \$1500 por hectárea porque no es “tanto trabajo” y “nadie verifica que lo estés haciendo” (comunicación personal, 7 de diciembre de 2020).

La mayoría de los entrevistados consideran como mayor beneficio del programa la parte económica, es decir los \$4500 (+ \$500 que se van a una caja de ahorro), que reciben mensualmente. Mencionaron “es buen dinero”, “ningún programa ha dado tanto”, “alcanza para comer”. El programa cayó en un momento bastante crítico para los pobladores de Hopelchén, debido a que el contexto generado por la pandemia COVID-19, y las medidas que tomaron las autoridades de los pueblos (como cerrar los accesos y salidas) los privó de ciertos ingresos que algunos tenían por las dinámicas comerciales que tienen en otros poblados (como comercio, trabajo en servicios remunerado, como jornaleros, etc.). Un productor de Dzibalchén dijo: “Yo entre porque estaba dura la situación con esto del COVID” (comunicación personal, 5 de diciembre de 2020). Lo que me hace pensar que en principio el programa no fue tan atractivo por las prácticas productivas que propone, sino más bien lo fue por la remuneración económica, que es una necesidad sentida de la gran mayoría de la población de los Chenes.

Otro programa que, como objetivo promueve la reconversión productiva hacia sistemas menos perjudiciales ambientalmente es el **componente asistencia técnica** del programa Producción para el Bienestar. Este programa, sin embargo, cuenta con mucho menos presupuesto,<sup>51</sup> y se está realizando de manera paulatina por comunidad. Este es un programa que opera SEGALMEX, cuyo encargado es Héctor Robles, un académico ahora funcionario que situó en la coalición por un modelo de desarrollo rural alternativo. Este programa promueve bajo un esquema de “campesino a campesino” y escuelas populares la adopción de “prácticas

---

<sup>51</sup> Apenas un 4% de lo destinado al programa, según las reglas de operación del programa. ([https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/604178/DOF\\_-\\_Diario\\_Oficial\\_de\\_la\\_Federaci\\_n-PpB.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/604178/DOF_-_Diario_Oficial_de_la_Federaci_n-PpB.pdf)).

agroecológicas” como la generación de abonos con insumos locales, generación de microorganismos, lombricomposta etc.

En diciembre de 2020 que entrevisté al único técnico que opera el programa en el municipio, el programa de asistencia técnica sólo tenía presencia en los ejidos de Xmabén y Chunchintok. En Chunchintok no se había podido generar un grupo como tal, pese a que se habían convocado algunas reuniones, según refirió el técnico. En Xmabén sólo lo habían implementado dos productores, el padre del técnico que es originario del poblado y un señor más, que según me dijo el técnico es el “productor innovador”, del grupo que se está promoviendo en Xmabén. La poca respuesta de los productores a la convocatoria quizá se debe a que el programa era muy incipiente, arrancó en marzo de 2020, y fue interrumpido 5 meses por la pandemia (Técnico local, comunicación personal, 11 de diciembre de 2020).

Por lo que he podido ver en la página de Facebook del programa y comunicación con el técnico en los sucesivos meses a la entrevista, las reuniones han tenido poca convocatoria y bastante intermitencia de los asistentes a los talleres. Desde la percepción del técnico “la limitante que tenemos es que esto es voluntario, esa es la parte que dificulta la participación [...] esto es una actividad voluntaria para quien quiera aprender, no se le va a cobrar por el acompañamiento técnico, los bioensayos se van a repartir entre los integrantes de la escuela” (Técnico local, comunicación personal, 11 de diciembre de 2020).

Cabe mencionar que a través de este programa y de su técnico, y de los técnicos del Sembrando Vida, también se están tratando de expandir las demandas políticas de la organización *Muuch Kambal*, sobre los problemas asociados a la implementación del modelo agroindustrial en el municipio; información sobre la contaminación del agua, las fumigaciones aéreas, la creciente deforestación, el problema del glifosato y uso de semillas transgénicas. Según me comentó el técnico, tienen coordinación con la organización y han participado en varias reuniones en las que también estuvieron funcionarios como Víctor Suárez y Héctor Robles de SEGALMEX (comunicación personal). Lo cual ha sido posible por el vínculo que la A.C *Muuch Kambal* tienen con el funcionario federal encargado del programa (observación en campo, 2019).

Uno de los aciertos que los productores con los que hablé perciben de estos programas y de la eliminación de otros como el PIMAF, es que se eliminaron los intermediarios. Mencionaron cosas como: “el apoyo llega directo al productor”, “antes le tenías que dar su mochada al técnico”, etc.

Sobre el programa Sembrando Vida, hasta el momento en que entreviste a los productores, con la reserva de que tenía muy poco tiempo de haber sido implementado, no percibí que el programa hubiera generado cambios en la manera de producir, lo cual tampoco es el fin de esta investigación. Sin embargo, vale resaltar que la perspectiva que los productores tienen en general sobre los programas de gobierno a los que localmente se les llama “apoyo” es que duran un tiempo determinado y se acaban. Lo cual me hace pensar que posiblemente para algunos signifique continuar con sus actividades agropecuarias de manera “convencional”. No percibí que los productores reconocieran estos programas como mecanismos para transitar sus prácticas productivas hacia prácticas menos dañinas con el ambiente o hacia sistemas agroecológicos.

Sobre este punto consideramos que el programa carece de una reflexión entre sus técnicos, quienes operan el programa *in situ* de las implicaciones de la agroecología, y se hace muy poca o nula reflexión sobre los perjuicios del sistema agroindustrial y la necesidad de transitarlo. Lo que coincide con lo propuesto por Roth (2002), quien menciona que quién formula la política no necesariamente la ejecuta, lo que puede dar lugar a desviaciones en los objetivos propuestos por el programa, ya que se insertan en prácticas, valores, esquemas de conocimientos, tanto de los operadores (técnicos de los programas en este caso), como en las dinámicas productivas, aspiraciones, sistemas de creencias, y agencias de los propios campesinos.

#### **4.4 Retos frente a las capacidades gubernamentales: el programa precios de garantía, deforestación, compra y venta de tierras, fumigaciones aéreas y transgénicos**

El programa precios de garantía está destinado a los productores de autoconsumo de maíz, con parcelas no mayores a cinco hectáreas que podrían comercializar hasta 20 toneladas a un precio definido por el gobierno. El órgano encargado del programa es Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), cuyo titular Víctor Suárez. En 2019, en una reunión Hopelchén con el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, en la que estuve presente, el funcionario comentó que el municipio contaría con varios centros de acopio para comercializar el maíz de los productores a un precio de \$5600 la tonelada. Varios productores en la reunión se vieron entusiasmados con la información que el funcionario dio, aunque algunos tenían sus dudas, como Don Mario, quien ante la pregunta sobre qué pensaba sobre esto me comentó “a ver si es cierto” (observación en campo, 2019).

Un año más tarde, en diciembre de 2020, cuando entrevisté a productores de Hopelchén y al funcionario local de la SADER, me comentaron que el programa todavía no se había

implementado en el municipio, por lo que los productores seguían vendiendo parte de su producción, en los campos menonitas y algunos directamente a las empresas, como lo venían haciendo anteriormente.

Sobre este programa el encargado del CADER me dijo: “es un programa que el año pasado funcionó en el estado de Campeche”, sin embargo, detalló que en el municipio de Hopelchén no hubo recepción “no se abrió un centro de acopio en Dzibalchén”, explicó: “a pesar de que tienen una bodega de DICONSA y a pesar de que se contrató personal [...], pero no había presupuesto para mejorar la instalación”. Me comentó que “si la gente quería vender su maíz tenía que ir hasta Laureles o a Tixmucuy, “en Tixmucuy recibían a granel, pero en Laureles lo tenías que llevar embolsado en bultos de 50 k, era una cosa tremenda, el programa manejaba \$150 de apoyo para flete por tonelada, pero imagina el encostado, el secado, porque si ya pasa cierta humedad no te lo recibían y busca tu dónde llevarlo, a parte los sacos se los tenías que comprar a ellos...” (comunicación personal, 8 de diciembre de 2020).

Lo mencionado por el encargado del CADER concuerda con otros productores que han expresado que el programa no tiene infraestructura y que “es un relajo”. Uno de los productores más grandes de Dzibalchén, explicó que los criterios que pide SEGALMEX para recibir maíz son muy difíciles de cumplir, aun para él que es un productor grande y con cierta solvencia, ya que lograr una humedad del 14° en el maíz como lo pide SEGALMEX implicaría trillar (cosechar) el maíz hasta febrero lo que elevaría sus costos, ya que tendría que pagar para mantener limpio el espacio hasta la cosecha. Además de que esto le impediría sembrar el cultivo sucesivo de esta temporada (sorgo), por lo que no ve viable vender ni una parte de su producción a SEGALMEX (comunicación personal, 13 de diciembre de 2020).

Las experiencias de productores en Hopelchén coinciden con lo encontrado en un estudio realizado por Ana de Ita del CECAM, en el que con base en datos de la propia SEGALMEX, concluye que de los 2.2 millones de campesinos de autoconsumo que cultivan maíz y son a quienes se destina este programa, SEGALMEX únicamente compró a 3 mil 699 maiceros, que equivale a 0.17 por ciento de ellos. Los productores con mayores volúmenes (de 15 a 20 toneladas) fueron casi la mitad de los atendidos, porque muchos productores de autoconsumo prefieren guardar su cosecha para consumirla en la familia a lo largo de los meses y alcanzan precios más altos que el de garantía en la venta directa en las comunidades (De Ita, 2020). Esto último no es el caso en Hopelchén, ya que la mayoría de los productores, por la disponibilidad de tierra que tienen, logran generar excedentes para la venta.

El programa “Precios de garantía” continua sin operar en Hopelchén, los productores mayas pequeños medianos y hasta algunos grandes siguen dependiendo de la compra de los menonitas quienes cosechan con sus maquinarias (rentadas por productores mayas) la gran mayoría del maíz y soya producido en Hopelchén. Los precios del maíz para los productores siguen siendo bastante bajos, por lo que la soya se sigue imponiendo como el cultivo comercial por excelencia en el municipio, que es sobre todo cultivado por los grupos menonitas (observación de campo). Esto a pesar de que el gobierno federal de la 4T quitó programas que subsidiaban su producción como el programa PROOLEGINOSAS y los apoyos para seguros y compras de coberturas que hacía ASERCA.

El precio de la soya, contrario a lo que se esperaba con el retiro de apoyo gubernamentales (Echanove, 2016), subió de precio por apoyo directo que la empresa compradora, según me comentaron productores que venden directamente a la “hidrogenadora de Yucatán”. Paso de \$6000 la tonelada a \$8200, incluso un productor maya que ha sembrado soya transgénica me comento que “el subsidio ahora lo da la empresa” (comunicación personal, 5 de diciembre de 2020).

En las entrevistas que realice y en conversaciones informales que he tenido con amigas campesinas y campesinos de Hopelchén, me enteré que, pese a las restricciones legales que hay a nivel nacional y local respecto a la siembra de maíz y soya, estos cultivos se continúan sembrando de manera libre en el municipio.

Si bien, hace unos años cuando colaboraba con la organización *Munch Kambal* se escuchaban rumores de siembra de maíz transgénico, en 2020, varias personas me pudieron corroborar la información y hasta un par de productores me confesaron haber sembrado maíz transgénico ese año, esto a causa de que “la semilla estaba muy barata, \$30 el kilo, la mitad del precio de lo que cuesta una semilla híbrida” (comunicación personal, 8 de diciembre de 2020). Esta situación fue denunciada el 2 de diciembre de 2020, por las mismas organizaciones que han empujado discursiva y políticamente la lucha contra la soya transgénica. La situación además fue confirmada por SENASICA Y SEMARNAT el 18 de febrero de 2021, sin que esto, hasta el momento haya repercutido de alguna manera en los productores, según me han contado amigos productores del municipio.

Otra gran ineficiencia del gobierno en turno es su falta de capacidad para atacar el problema de la deforestación. Esta no ha dejado de aumentar pese a que se ha propuesto como un objetivo de la 4T, y a pesar que funcionarios de la 4T como Víctor Suárez, han constatado

con sus propios ojos los problemas asociados a esto, como las constantes fumigaciones aéreas que se realizan en grandes extensiones de terrenos mecanizados.

En 2019, el funcionario tuvo una reunión con campesinos del municipio en la oficina de *Muuch Kambal* A.C. En esta reunión campesinos de diversas comunidades expresaron sus preocupaciones sobre los muchos perjuicios ambientales que ha causado el modelo agroindustrial, sobre todo el practicado por comunidades menonitas, también sobre los perjuicios a la apicultura y las transacciones de venta y renta que se realizan en el municipio, muchas veces de manera ilegal, y con aval de la Procuraduría Agraria del estado de Campeche (observación participante en campo). En esta visita además de escuchar a personas del municipio, el funcionario pudo constatar con sus propios ojos lo que calificó como un “desastre ambiental”. Participantes de la organización le guiaron a los cultivos de arroz de menonitas que se encuentran en el poblado colindante al ejido de Sahacabchén que son inundados y rociados con plaguicidas de manera constante, cuyas aguas, llenas de plaguicidas y fertilizantes químicos, se desechan mediante pozos de absorción a aguas subterráneas (observación participante en campo).

La dinámica de compra y venta de tierras por parte de menonitas a ejidatarios sigue siendo una constante dada la alta demanda de tierras que existe en el municipio y el aval que las autoridades estatales, específicamente de la Procuraduría Agraria del estado de Campeche, ha dado para la realización de estas transacciones y la sucesiva deforestación para la expansión de la frontera agrícola (Torres-Mazuera *et. al*, 2020). En este sentido vale destacar la venta de 5000 ha que ejidatarios de Xmabén realizaron en 2018 a menonitas de la colindante colonia Nuevo Durango (la cual se estableció por una primera venta que igual, de manera ilegal, realizaron los ejidatarios en 1999) (observación participante en campo; Torres-Mazuera, Fernández y Godoy, 2019).

Las 5000 hectáreas propiedad del ejido de Xmabén tenían una selva totalmente conservada que, todavía en este año (2021), sirvió a los propios ejidatarios, comuneros y sus familias para que sus abejas recogieran el néctar y polen de las flores de árboles y enredaderas, hoy, tras la venta que los ejidatarios hicieron consecuencia de la profunda marginación, vulnerabilidad, ganas de superarse y las pocas posibilidades que tienen para hacerlo, la selva está siendo arrasada para establecer una ampliación del campo Nuevo Durango, una de las 17 colonias Menonitas en estado Campeche. Desde finales del año pasado comenzaron los establecimientos de una nueva colonia menonita que se conforman por lo que localmente se

conocen como “campos”. En el periodo en que realicé las entrevistas se deforestaba parte de la selva de Hopelchén para dar paso al campo 10, 11 y 12 del campo, sin que ninguna autoridad de ningún nivel de gobierno hiciera nada al respecto hasta hoy (entrevista con la investigadora Merle Muller, 6 de diciembre de 2020). Esto, pese a que, por un aviso que apicultores del municipio me hicieron, y comuniqué a colaboradores de la Alianza Maya por las abejas de la Península de Yucatán, se interpuso una demanda en pleno momento de la deforestación. Sobre esto no ha habido respuesta hasta hoy.

En estas nuevas deforestaciones muy probablemente este año se produzca soya transgénica o algún otro monocultivo que requiera el uso de agroquímicos, maquinaria, y hasta pozos de absorción. Las poblaciones menonitas, a pesar de que son las que más deforestación y contaminación producen en el municipio no están siendo consideradas por ningún programa de transición, ni están siendo vigiladas por las instancias encargadas de velar la resolución emitida por un juez para impedir la siembra de soya transgénica. Lo cual ha permitido que continúen con sus prácticas productivas de manera “normal”, salvo que, sin apoyos gubernamentales, según comentaron gobernadores menonitas de la Trinidad, (comunicación personal).

#### **4.5 La percepción local sobre el glifosato**

El glifosato es el herbicida más usado en el mundo para la agricultura. En Hopelchén la gran mayoría de los campesinos lo usan, desde muy pequeños hasta los más grandes productores lo utilizan. Su uso no está restringido a la agricultura, se utiliza también en la ganadería, para “limpiar” patios de casas, escuelas, sitios públicos como parques, banquetas y hospitales (observación participante en campo).

El herbicida comenzó a utilizarse en la región desde la década de 1980, cuando los gobiernos estatales y federales impulsaron, a través de proyectos, políticas y programas, el uso de “paquetes tecnológicos”, que incluían semillas híbridas, fertilizantes, plaguicidas y el uso de maquinaria agrícola. Si bien el uso de “paquetes tecnológicos” se amplió con la llegada de empresas de agroquímicos y de menonitas con disponibilidad de maquinaria, muchos campesinos, sobre todo los más pequeños, no pudieron seguir manteniendo el uso de semillas híbridas, debido a la falta de recursos. Una parte del fertilizante que usa esta agricultura menor (de 2 a 5 ha) lo provee el gobierno estatal y las semillas que usan, muchas veces, son criollas de su propia cosecha. La constante en esta forma de producción es el uso del herbicida glifosato, ya que usar “líquido” como le llaman allá, resulta más barato que pagar jornales o hacerlo ellos

mismos, muchas veces, porque no disponen de ayuda familiar ya que los hijos tienen trabajos asalariados fuera de los poblados o por falta de dinero (observación participante en campo).

Una gran mayoría de los productores que entrevisté comentaron estar enterados de una posible prohibición de glifosato, a pesar de que en ese entonces no se había publicado el decreto para la prohibición gradual del herbicida. Algunos menonitas dijeron no estar enterados, quizá por las restricciones que tienen a medios de comunicación, pero dicen saber que “hay algunos que creen que el glifosato es malo porque afecta a las abejas” (comunicación personal, 24 de noviembre de 2020).

Sobre la entonces posible prohibición del glifosato a nivel federal encontré opiniones diversas, algunos productores ven muy problemático que se prohíba. Un menonita me comentó “sin el glifosato quien sabe uno como le vamos a hacer” y explicó que es único herbicida del que disponen para matar toda clase de hierbas “hay líquidos (agroquímicos) que matan zacate, pero no todo el zacate, el glifosato lo está limpiando todo” (comunicación personal, 24 de noviembre de 2020). Otros productores entrevistados ven muy difícil no usar glifosato, su percepción es machete o glifosato, no hay intermedios, y con machete no se puede trabajar un espacio muy grande y “no alcanzaría para comer” (comunicación personal, 5 de diciembre de 2020).

Al respecto un productor más o menos grande de Dzibalchén dice:

sí nos quitan el glifosato vamos a dejar de producir, en el mundo cada vez somos más, la cadena alimentaria se va a venir para abajo, cuánta gente come el maíz, y de dónde va a haber para comer, van a tener que importar y eso si son puros transgénicos, yo lo he ido a ver personalmente, tuvimos una invitación para ver cómo se traslada todo, CRIO nos llevó, es pura basura que traen de Estados Unidos, fíjate que todo eso Maseca, pura basura, no sabes lo que come la pobre gente...

Otros productores, particularmente los del pequeño ejido de X-kix se mostraron con desconfianza respecto a que el herbicida realmente se prohíba, piensan que se va a sustituir por otro químico o que sólo “le van a cambiar la etiqueta” y en realidad no lo van a sustituir (comunicación personal, 9 de diciembre de 2020).

La mayoría de los productores mencionaron estar de acuerdo con la prohibición si hay otro producto que lo sustituya, como ejemplifica el comentario de un productor de Dzibalchén: “si hubiera una alternativa que digan aquí está con mucho gusto lo dejaría porque al final sólo dicen que es malo y malo y no dan una solución” (comunicación personal, 5 de diciembre de 2020).



Un productor grande de Dzibalchén comentó que ha visto que hay alternativas mecánicas para evitar su uso, y que, si se llegaran a dar los incentivos adecuados, o sea, mayor precio a los cultivos, “unos \$2000 más de lo que pagan por tonelada ahora”, estaría dispuesto a buscar la manera de dejar de utilizarlo (comunicación personal, 8 de diciembre de 2020). Otros productores de Cancabchén compraron “un motomachete”, una desbrozadora, pretenden que este implemento les ayude a quitar hierbas con más rapidez (comunicación personal, 11 de diciembre de 2020). Algunos productores menonitas piensan que si se llegara a prohibir “hay que buscar la forma de trabajar” (comunicación personal, 6 de diciembre de 2020).

Algo interesante es que algunos productores se cuestionan por qué se va a prohibir el glifosato si hay otros productos “peores”, más dañinos, hablaron específicamente de los insecticidas “eso sin son peligrosos, ves como cae todo cuando roseas” (comunicación personal, 6 de diciembre de 2020). Desde algunas percepciones el glifosato, por ser un herbicida, o sea que mata sólo hierbas, no es tan peligroso.

Una opinión que me pareció muy interesante, ya que reflexiona sobre los perjuicios y a la vez de los beneficios que en su contexto obtiene de la práctica del modelo agroindustrial, que en la región implica el uso de glifosato y en ocasiones de semillas transgénicas, es la de un productor mediano de Dzibalchén:

Yo estoy consciente de eso, que estamos perjudicando, estoy muy consiente, desde basura, contaminación, devastación, todo eso lo entiendo, estoy consciente, pero un ejemplo: ¿usted qué haría si es base de su trabajo?...en veces no nacemos en un lugar donde tengamos dinero, yo nací en una familia muy humilde, aquí crecí yo, para sobresalir, yo siempre digo gracias a los menonitas yo tengo, pero gracias a los menonitas he tumbado bastante, yo sé que le he hecho daño a mi tierra, pero es parte de mi trabajo para que yo pueda darle estudio a mis hijos, les estoy dando de comer, les estoy dando estudios para que el día de mañana ellos se superen, para que ellos tal vez el día de mañana, ellos no dañen la tierra como yo, yo estoy consiente pero es parte de mi trabajo... los campesinos no podemos vivir si no tumbamos, si no sembramos, de eso vivimos nosotros (comunicación personal, 11 de diciembre de 2020).

En general, con las entrevistas realizadas pude constatar que, entre los productores hay una conciencia de que los agroquímicos pueden ser dañinos (más allá del glifosato). Sin embargo, el uso de ellos es la opción que tienen para desarrollar sus labores, como menciona Jaime:

...el glifosato claro que es malo, todos los líquidos son malos, pero cómo controlo una hierba, a mí que alguien me dé solución de algo natural con mucho gusto lo hacemos, yo siempre he dicho que las personas que dicen cosas que me traigan solución y le voy a aplaudir (comunicación personal, 5 de diciembre de 2020).

Es interesante que partes del discurso que mantienen actores de la Coalición que promueve la agroecología sobre el glifosato ahora forma parte del discurso de campesinos de Hopelchén, sin embargo, lo sitúan en la complejidad de su contexto, en el que se ha vuelto un producto “necesario” para realizar una agricultura que les permita mejores ingresos y otras oportunidades laborales para sus hijos.

Todos los productores que entreviste, de diferentes perfiles, usan el glifosato en mayor o menor medida, sobre todo para cultivo de granos: maíz, soya, sorgo. Es interesante que para el cultivo de hortalizas como tomate y chile habanero; cultivos que utilizan insecticidas que han matado abejas, casi no se usa glifosato, pues daña los cultivos (observación participante en campo).

Por lo que conversé con varios productores me parece que tienen disponibilidad para cambiar el uso del glifosato, algunos preocupados por su salud y las consecuencias ambientales por su uso, sin embargo, hasta ahora no hay un sustituto, ni tampoco se les han presentado otras opciones ni mecánicas ni biológicas. El productor Alfonso me comentó que, en su opinión, el gobierno debería estar promoviendo programas que ayuden a sustituirlo (maquinaria, capacitación) si su intención es quitar el herbicida del mercado (comunicación personal, 8 de diciembre de 2020). Aunque él, por ser un productor “grande”, no tiene cabida en los programas de transición de la 4T.

#### **4.6 Conclusiones**

Como vimos en este capítulo Hopelchén es un municipio que se representa de diferentes maneras según la esfera en que se analice, a nivel nacional e internacional el municipio es un escenario de lucha entre apicultores mayas, el Estado mexicano y los menonitas soyeros, también un territorio biocultural maya al cual hay que “salvar”. A nivel estatal y municipal, Hopelchén es y se proyecta como “el granero del sureste”, y desde las percepciones y perfiles tan heterogéneos de los productores implica muchas más cosas, como sus estrategias de supervivencia mismas, el mantenimiento de su cultura, y sus ganas de salir adelante.

El análisis de la “esfera local de Hopelchén” muestra una serie de contradicciones y a la vez coincidencias entre las propuestas de política pública y acciones gubernamentales que se llevan nivel local y estatal y las que se promueven desde el gobierno federal, y desde los actores de las coaliciones que buscan definir la política de desarrollo rural.

La heterogeneidad de productores y las dinámicas socioproductivas tan complejas que existen en un municipio intercultural como Hopelchén, las cuales están ancladas en su particularidad histórica, sin embargo, ponen en cuestión los objetivos de política de desarrollo rural, tanto la que se desarrolla hoy en día con el gobierno de la 4T, como aquellas que se proponen a nivel nacional por los actores que integran las coaliciones discursivas mencionadas en el capítulo 3.

Por ejemplo, las percepciones locales sobre el programa Sembrando Vida, distan sobre la idea de productor, “sujeto de derecho” que pensaron quienes diseñaron el programa. Los creadores del programa parten del supuesto de un perfil muy específico de productor (un pequeño campesino cuyo objetivo principal es la agricultura para la subsistencia). En la práctica productiva local, en el caso específico de Hopelchén, podemos ver que los perfiles de los productores son mucho más diversos. En ese sentido, el valor y sentido que tiene la agricultura en la región de estudio, para algunos productores, tiene un enfoque quizá más productivista, es decir, que se le atribuye el objetivo de generar ganancias económicas, lo cual dista del sentido que el programa le atribuye a la agricultura que deberían practicar.

Resulta claro que las propuestas de política propuesta por las coaliciones en disputa y las del nuevo gobierno, resultan difíciles de anclar en realidades tan complejas y heterogéneas como las del municipio de Hopelchén, y las percepciones en torno a aspectos de la producción agropecuaria, como el uso del glifosato, son mucho más complejas que las que se pueden leer en prensa, cuando las comparamos con las perspectivas de los productores locales.

Las metas de algunos campesinos de Hopelchén, pese a las representaciones que se hacen de ellos con fines políticos, tienen que ver más con una participación viable en el mercado, y con la aspiración de que sus actividades productivas resulten rentables, más que ecológicas.

## CONSIDERACIONES FINALES

En esta investigación propuse un análisis sobre las disputas por la política de desarrollo rural durante el gobierno de la 4T y di cuenta de algunas de las implicaciones que los cambios introducidos por la política de desarrollo rural por el gobierno de “la 4T” están generando en el espacio concreto del municipio de Hopelchén, Campeche.

Como se demuestra lo largo de este trabajo la política pública de desarrollo rural está siendo debatida en el marco del gobierno de “la 4T” entre, lo que sitúo, como dos coaliciones discursivas. Una que defiende el mantenimiento de una política agropecuaria centrada en fomentar un modelo agroindustrial que depende del uso de maquinaria agrícola, e insumos como semillas híbridas o transgénicas, cuyos promotores son funcionarios de gobierno de alto nivel, agroempresarios y académicos. Y otra demanda un modelo alternativo de desarrollo rural, mediante la propuesta de incorporar a programas, políticas y proyectos de gobierno preceptos sobre la agroecología, como la justicia social, el no uso de plaguicidas, semillas híbridas o transgénicas, el uso de abonos orgánicos, bioplaguicidas, etc., y que busca la conservación de la biodiversidad y bioculturalidad, impulsada por académicos, activistas, ONGs, organizaciones de productores, comercializadores, etc.

Si bien, no está definido hacia donde se inclina la balanza en este debate, puesto que esta investigación se queda a nivel de las disputas discursivas en la esfera mediática nacional, y da apenas una muestra de lo que pasa respecto a estos debates en un espacio local concreto, muy particular, queda claro que la política de desarrollo rural se modificó de manera sustancial y está generando una serie de modificaciones a nivel local y a nivel de percepciones.

Sostengo que las propuestas de cambio que se están desarrollando en el nuevo gobierno se deben fundamentalmente a la participación de personas que han colaborado en organizaciones de la sociedad civil con una posición crítica sobre la política agroalimentaria de los últimos años, que ahora trabajan como funcionarios en el gobierno de la 4T. Desde sus trincheras, como aliados del movimiento civil contra los transgénicos y el uso del glifosato, en la esfera mediática nacional, y desde luego, dentro del “gobierno híbrido” han empujado la institucionalización de algunas demandas. Como gran ejemplo de ello está la publicación del decreto presidencial que prohíbe el maíz transgénico y el glifosato hacia 2024.

Sin embargo, al centrar el análisis de estos cambios en una esfera local, pude percatarme de que, si bien, el gobierno tiene una importancia fundamental en el medio rural, a través de la puesta en marcha de programas proyectos y políticas, no es un ente homogéneo que define las prácticas productivas en el medio rural. En la actualidad, las empresas tanto agroalimentarias como procesadoras de cierta producción del campo, que llegan a los productores como técnicos, vendedores, gestores etc., están siendo agentes muy importantes que promueven prácticas productivas, y la siembra de ciertos cultivos, como la soya transgénica. Lo cual, por supuesto, pasa por la agencia de los productores, quienes, bajo estas estructuras de poder, sus aspiraciones, necesidades y posibilidades, definen qué sembrar y cómo hacerlo.

Además, en la operativización *in situ*, los programas de gobierno van adquiriendo sentidos y significados que pueden no coincidir plenamente con los objetivos prescritos en las reglas de operación de los programas, ya que son sometidos a las subjetividades diversas de quien ejecuta y recibe los programas. Como vimos en el caso de Hopelchén con el programa Sembrando Vida, el cual tiene como mayor importancia para muchos campesinos el ingreso económico que reciben de este, y no así la adquisición de prácticas productivas para una transición o el logro de la “soberanía alimentaria comunitaria”, cuyo objetivo se plantea como central desde la lógica de los y las creadoras del programa.

A partir del análisis de los discursos puestos en disputa en la esfera mediática nacional, propuesto en el capítulo 3, vemos que los programas, así como las demandas civiles, se generan a partir de los “encuadres” de los diferentes actores, es decir del cúmulo de conocimientos, experiencias, valores y vivencias que tienen y comparten de manera interactiva con otros individuos.

En estos “encuadres” se sustentan las representaciones discursivas de los sujetos y sus realidades. Los hallazgos de este análisis dan cuenta que las representaciones que se generan en los discursos sobre ciertas categorías como la de “campesino” en ocasiones no dan cuenta de los numerosos matices de las realidades o pueden estar promoviendo simplemente perspectivas a futuro sobre el desarrollo rural en México.

Estos supuestos, sin embargo, en contextos favorables para los movimientos civiles, como ha sido el gobierno de la 4T para el movimiento contra la soya transgénica y el uso del glifosato, generan cambios retóricos a nivel de la política pública que van definiendo a los sujetos para quienes se piensan las políticas. Como vimos en el caso de Hopelchén, estas representaciones que se concretizan en el diseño de políticas públicas y legislaciones, pueden no

coincidir con las necesidades de las heterogeneidades productivas de campesinos e indígenas, lo que podría repercutir en los objetivos de los programas y tener implicaciones aún más graves para muchos productores y sus prácticas productivas.

El análisis de la esfera local de Hopelchén, desde la perspectiva de una diversidad de productores, plantea ciertas interrogantes respecto al alcance de los programas y políticas públicas federales, cuando los situamos en marcos subnacionales como los estados y los municipios, en donde las ideas políticas locales pueden resultar contradictorios a las ideas de sectores en puestos federales. También las políticas públicas pueden ser puestas en cuestión cuando se sitúan frente a las (in)capacidades gubernamentales que, como vimos en el caso de Hopelchén, son amplias y distan en gran medida al contrastarlas con la retórica con la que se hace frente a los problemas de tal magnitud como los que existen en el municipio, como la deforestación y el uso desmedido de plaguicidas en la producción agropecuaria local.

En ese sentido, considerando las percepciones locales y los hallazgos sobre las (in)capacidades gubernamentales, así como las construcciones discursivas me preguntó si ¿el escenario de lucha más adecuado para comenzar a trabajar sobre tan grandes problemáticas es el plano de la política pública (programas, proyectos, legislaciones) y si está únicamente debe centrarse en los actores “desfavorecidos históricamente”? Sobre esto no tengo una respuesta, lo que sí puedo afirmar es que la política de desarrollo rural que busque coadyubar a realizar modificaciones sustantivas al contexto socioambiental y productivo de localidades del país como Hopelchén deberá contemplar reformas sustanciales en el sistema agroalimentario en su totalidad. Así como contemplar la diversidad productiva, tanto para transitarla a modelos de producción menos contaminantes y depredadores, como para favorecer a los grupos históricamente marginados.

Deberá además superar la visión tecnócrata hacia la solución de problemáticas socioambientales que predomina en las perspectivas de los actores que participan en la definición de la política de desarrollo rural, integrando a las soluciones una comprensión amplia de los entramados sociales y de poder tan complejos que subyacen a las relaciones sociales en el sistema global alimentario. La comprensión de estas problemáticas desde una visión dicotómica de bueno/malo, o como asuntos que se pueden arreglar prohibiendo una sustancia “peligrosa”, con la intención de equivocarme, tendrá resultados inesperados y alejados de los objetivos que se persiguen como una sociedad más justa y más sana social y ambientalmente hablando.

Como en toda investigación, en ésta, quedan una serie de interrogantes que vendría a bien desarrollar en futuras investigaciones como ¿qué tanto las prácticas a nivel local son capaces de informar o influenciar de alguna manera al nivel programático o legislativo? ¿cuáles serían los mecanismos idóneos? ¿cuáles serían las barreras para lograr dicha incidencia?

¿Cuáles serán los impactos y consecuencias de estos programas gubernamentales que buscan transitar los moldeos productivos establecidos hacia otros menos perjudiciales ambientalmente en espacios particulares? También será interesante conocer hasta qué punto el Estado mexicano tiene autonomía sobre la política rural nacional en un contexto agroalimentario global en el que los poderes económicos-empresariales tienen grandes influencias a nivel social y político. ¿Hasta dónde llegaran las acciones legales de los grupos agroempresariales? Y ¿será posible la erradicación del glifosato hacia 2024?

## REFERENCIAS

- Altieri, M., & Toledo, V. (2011). La revolución agroecológica en América Latina. Seguí buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO <http://biblioteca.clacso.edu.ar>, 163.
- Argueta V. A. (2012). Knowledge Dialogue, a realistic utopia. *Revista Integra Educativa*, 5(3), 15-29. Recuperado en 23 de febrero de 2021, de [http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1997-40432012000300002&lng=es&tlng=en](http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1997-40432012000300002&lng=es&tlng=en)
- Azuela, A. (2019). *El derecho en movimiento. Once ensayos de sociología jurídica*. Editorial Tirant to Blanch.
- Bartra, A. et al. (2005), *Transgénicos, ¿quién los necesita?*, Grupo Parlamentario del PRD, Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, LIX Legislatura, México.
- Bazán L. W. J. (2019). “El comercio justo y la producción de miel orgánica en Hopelchén: un estudio sobre las asociaciones de apicultores mayas Lol K’ax y Kabi’tah”. Tesis de Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales. UNAM, Mérida Yucatán.
- Bazán L. W. J. (2020). Diagnóstico sobre la política pública en Hopelchén (manuscrito no publicado). Elaborado en el marco del “Proyecto Estrategias de desarrollo participativo, comunitario y sustentable en la región de los Chenes, Campeche” P0130520,.
- Beckie, H. J., Flower, K. C., & Ashworth, M. B. (2020). Farming without Glyphosate?. *Plants*, 9(1), 96
- Braun, B. y Wainwright J. (2001). “Nature, Poststructuralism and Politics”. En *Social Nature. Theory, Practice and Politics*, editado por Noel Castree y Bruce Braun, 41-63. Oxford: Blackwell.
- Castro L. (2012). “La influencia de los actores sociales en la formulación de las políticas públicas relacionadas con la introducción de maíz genéticamente modificado en México”. Tesis de Doctorado. El Colegio de México. México.
- Centeno, R. I., Petch, F., & Elbaz, A. (2021). López Obrador o la izquierda que no es. *Foro Internacional*, 61(1 (243), 163-208.
- Chapela, I. H & Quist, D. (2001). Transgenic DNA introgressed into traditional maize landraces in Oaxaca, Mexico. *Nature*, 414(6863), 541-543.



- Cortina, C. C., Fonnegra, L. M. F., Pineda, K. M., Muñoz, M. P., Fonnegra, J. R., & Díaz, J. P. Z. (2017). Efectos de la intoxicación por glifosato en la población agrícola: revisión de tema. *Revista CES Salud Pública*, 8(1), 121-133.
- D'Alessandro, R. (2015). ¿Agroecología demagógica o comunitaria?. *Revista Biodiversidad LA*. (8 de septiembre de 2015). [https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Agroecologia\\_demagogica\\_o\\_comunitaria](https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Agroecologia_demagogica_o_comunitaria)
- Daye, R. (2020). Competing food sovereignties: GMO-free activism, democracy and state preemptive laws in Southern Oregon. *Agriculture and Human Values*, 37(4), 1013-1025.
- Durand Smith., Díaz, F., & Guzmán C., M. G. (2011). La ecología política en México ¿ Dónde estamos y para dónde vamos? *Estudios sociales* (Hermosillo, Son.), 19(37), 281-307.
- Durand, L. (2017). *Naturalezas desiguales. Discursos sobre la conservación de la biodiversidad en México*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Echanove, H. Flavia (2016). La expansión del cultivo de la soja en Campeche, México: Problemática y perspectivas. *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*.
- Escalona, J. L. (2011). "El incompleto imaginario del orden, la inacabada burocracia y el espacio de lucha. Antropología del Estado desde el Sureste mexicano". En Estrada Saavedra, M. y Agudo Sanchíz, A. (eds.). (Trans)formaciones del Estado en los márgenes de Latinoamérica. *Imaginarios alternativos, aparatos inacabados y espacios transnacionales*. México: El Colegio de México, Universidad Iberoamericana, pp. 42-86
- Escobar, A. (1995). El desarrollo sostenible: diálogo de discursos. *Ecología política*, (9), 7-25.
- Escobar, A. (2008). *La invención del Tercer Mundo: construcción y deconstrucción del desarrollo*. Editorial Norma.
- Espinoza, S. G. y Soto, S. N. (2020). La SEMARNAT y la normatividad ambiental. *Revista Diálogos ambientales*. Primavera 2020 (20-24) Disponible en: <https://www.gob.mx/semarnat%7Cdialogosambientales/articulos/la-semarnat-y-la-normatividad-ambiental>
- Fitting, E. (2007). ¿La economía " natural" enfrenta a la global? Desafíos a los debates sobre el maíz mexicano. *BAJO EL VOLCÁN. REVISTA DEL POSGRADO DE SOCIOLOGÍA. BUAP.*, 1(11).
- Fitting, E. (2011). *The struggle for maize: campesinos, workers, and transgenic corn in the Mexican countryside*. Duke University Press.
- Forsyth, T. (2001). Critical realism and political ecology. (146-154).

- Freeman, R., & Maybin, J. (2011). Documents, Practices and Policy. *Evidence & Policy*, 7(2), 155-170. [https://www.research.ed.ac.uk/portal/en/publications/documents-practices-and-policy\(88450712-b952-437a-92df-c1de61136f72\).html](https://www.research.ed.ac.uk/portal/en/publications/documents-practices-and-policy(88450712-b952-437a-92df-c1de61136f72).html)
- Gálvez, A. (2018). *Eating NAFTA: trade, food policies, and the destruction of Mexico*. Univ of California Press.
- Giraldo, O. F., y Rosset, P. M. (2016). La agroecología en una encrucijada: entre la institucionalidad y los movimientos sociales. *Guaju*, 2(1), 14-37
- Gómez, G. I. 2016. A Honey-Sealed Alliance: Mayan Beekeepers in the Yucatan Peninsula versus Transgenic Soybeans in Mexico's Last Tropical Forest. *Journal of Agrarian Change*.
- González, A., y Castañeda, Y. (2019). Bioseguridad en biotecnología agrícola en México. La política del Estado y el papel de las organizaciones sociales. *Sociológica (México)*, 34(97), 183-213.
- Hajer, M. (1993). Discourse coalitions and the institutionalization of practice: The case of acid rain in Britain. In F. Fischer & J. Forester (Eds.), *The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning* (pp. 43–76). Durham, NC: Duke University Press.
- Harvey, D. (2005) *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford, University Press.
- Herrera Tapia, F. (2009). Apuntes sobre las instituciones y los programas de desarrollo rural en México: Del Estado benefactor al Estado neoliberal. *Estudios Sociales (Hermosillo, Son.)*, 17(33), 7-39.
- Herrera, T. F. (2013). Enfoques y políticas de desarrollo rural en México: Una revisión de su construcción institucional. *Gestión y política pública*, 22(1), 131-159.
- Hewitt de Alcántara, C. (1978). *Modernización de la agricultura mexicana*. México, Siglo XXI Editores.
- Hewitt, S. (2009). Discourse analysis and public policy research. Centre for rural economy discussion paper series, 24, 1-16.
- Kay, C., & Vergara-Camus, L. (2018). *La cuestión agraria y los gobiernos de izquierda en América Latina*. CLASCO.
- Kinchy, A. J. (2007). *Genes out of place: science, activism, and the politics of biotechnology*. Tesis de doctorado. University of Wisconsin--Madison.
- Léonard, E., & Foyer, J. (2011). *De la integración nacional al desarrollo sustentable: trayectoria nacional y producción local de la política rural en México*.
- Li, T. M. (1996). Images of community: discourse and strategy in property relations. *Development and change*, 27(3), 501-527.

- Llanes, O. G. (2001). “Diagnóstico y planeación para el desarrollo sustentable en Los Chenes, Campeche”. Tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas. Mérida: Universidad Autónoma de Yucatán.
- Long, N. (2007). *Sociología del desarrollo: un enfoque centrado en el actor*. México: cieras; San Luis Potosí: El Colegio de San Luis.
- Mandujano, R. M., & Alves, V. E. L. (2018). Disputas territoriales en la sabana tropical brasileña (cerrado): los campesinos agroextractivistas y el agronegocio en Maranhão y Tocantins. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (76), 391-413.
- Massieu, Y. (2004). México y su necesaria Ley de Bioseguridad: intereses económico-políticos y movimiento social. *El Cotidiano*, 20(128), 110-123.
- Massieu, Y. (2009). Cultivos y alimentos transgénicos en México: El debate, los actores y las fuerzas sociopolíticas. *Argumentos* (México, D.F.), 22(59), 217-243. [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0187-57952009000100008&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952009000100008&lng=es&tlng=es)
- Massieu, Y. y San Vicente A. (2006), “El proceso de aprobación de la Ley de Bioseguridad: política a la mexicana e interés nacional”, *El Cotidiano*, año 21, núm. 136, UAM-Azcapotzalco, marzo-abril, pp. 39-51.
- Merlinsky, M. G. (2020). La pandemia como crisis ecológica. Desafíos de investigación. Instituto de Investigaciones Gino Germani – IIGG/UBA. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. CLACSO Ecología(s) política(s) desde el Sur/Abya-Yala.
- Nivia, E. (2000). Efectos sobre la salud y el ambiente de herbicidas que contienen glifosato. Recuperado de [http://www.glifocidio.org/docs/impactos% 20generales/ig1. pdf](http://www.glifocidio.org/docs/impactos%20generales/ig1.pdf).
- Otero, G. (2013). El régimen alimentario neoliberal y su crisis: Estado, agroempresas multinacionales y biotecnología. *Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología*, (17), 49-78.
- Patiño Fierro, M. P. (2019). Los precios de garantía: Avances y retos en la implementación.
- Pérez, F, R. E. (2020). “El papel de la alianza de saberes en las conquistas y retos de la movilización en la península de Yucatán contra los cultivos de soya transgénica. Hacia una agenda para empoderar al sector apícola”. Tesis de Maestría. Universidad Autónoma Metropolitana.
- Rendón-Von Osten, J., & Dzul-Caamal, R. (2017). Glyphosate residues in groundwater, drinking water and urine of subsistence farmers from intensive agriculture localities: a survey in

- Hopelchén, Campeche, Mexico. *International journal of environmental research and public health*, 14(6), 595.
- Robles, H. (2017). La pequeña agricultura campesina y familiar: construyendo una propuesta desde la sociedad. *Entre Diversidades*, 1 (7), 46-83. <https://doi.org/10.31644/ED.7.2016.a02>
- Roth, A. N. (2002). *Políticas públicas: formulación, implementación y evaluación*. Ediciones Auroras.
- Sabourin, E. P., Patrouilleau, M. M., Le Coq, J. F., Vásquez, L., & Niederle, P. A. (2017). Políticas públicas a favor de la agroecología en América Latina y el Caribe. *Red Políticas Públicas en América Latina y el Caribe (Red PP-LA)*.
- SanVicente-Tello, A. (2011). El avance de los transgénicos en México: ¿compromiso del gobierno con Monsanto?.
- Schüren, Ute. (2013). Entre los caminos de herradura y los campos de aterrizaje: rutas de comunicación e historia económica en el sureste de México. *Indiana* 30: 199-215.
- Serratos, J. A. (2009). Bioseguridad y dispersión de maíz transgénico en México, en: *Maíz transgénico en México, riesgos e incertidumbres*. *Revista Mexicana de ciencias*.
- Sharma, A. y Gupta, A. (2006). "Introduction" En A. Sharma y A. Gupta (Eds.). *The Anthropology of the State. A Reader*. Malden: Blackwell Publishing, pp. 1-41.
- Shore, C. (2010). LA ANTROPOLOGIA Y EL ESTUDIO DE LA POLITICA PÚBLICA: REFLEXIONES SOBRE LA "FORMULACION" DE LAS POLITICAS. *Antípoda. Revista de antropología y arqueología*, (10), 21-49.
- Solleiro, J. L. (2004), "Biotecnología para un desarrollo agrícola sustentable", en Muñoz Rubio, Julio (coord.), *Alimentos transgénicos. Ciencia, ambiente y mercado: un debate abierto*, Siglo XXI Editores, México, pp. 149-160.
- Toledo, V. M. (2016). *Diálogo de saberes. Cocreación de conocimientos*, 8.
- Toledo, V. M., & Barrera-Bassols, N. (2008). *La memoria biocultural: la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales (Vol. 3)*. Icaria editorial.
- Torres-Mazuera, G. (2018) *Nosotros decimos Ma': La lucha contra la soya transgénica y la rearticulación de la identidad maya en la Península de Yucatán*. *The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*.
- Torres-Mazuera, G. Fernández Mendiburu, J. Gómez Godoy, C. (2019). *Informe sobre la jurisdicción agraria y los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos en México*. DPFL

- Torres-Mazuera, G., & Appendini, K. (Eds.). (2020). La regulación imposible: (i) legalidad e (i) legitimidad en los mercados de tierra en México al inicio del siglo XXI. El Colegio de Mexico AC.
- Torres-Mazuera, G., Bazán, W., Vides, E., Gómez, I., Boué, C. (2020). Expansión agroindustrial y tratos agrarios en una región biodiversa de la Península de Yucatán. En Torres-Mazuera, G., & Appendini, K. (Eds.) La regulación imposible: (i) legalidad e (i) legitimidad en los mercados de tierra en México al inicio del siglo XXI (111-161). El Colegio de Mexico A.C.
- Vandame, R. (2012). Miel y cultivos transgénicos en México: principio de precaución y generación de evidencias. En Memorias del 19º Congreso Internacional de Actualización Apícola (ANMVEA), p. 33.
- Villalobos, V. (2011). *Los transgénicos: oportunidades y amenazas* (No. F30 62). Colegio de Postgraduados de México.
- Villaverde, P. R. (2018). Acción colectiva contra los transgénicos: la defensa del maíz mexicano. pensar los movimientos sociales en el siglo xxi. Revista GeoAmazônia, 6(12), 01-16.
- Viola, E. (1992). El ambientalismo brasileño. De la denuncia y concientización a la institucionalización y el desarrollo sustentable. Nueva Sociedad, 122, 138-155.

### **Notas de prensa, comunicados y artículos periodísticos**

- Aguirre, G. (2020, 24 de diciembre). La producción de granos básicos en el estado de Campeche. El Economista. <https://www.economista.com.mx/opinion/La-produccion-de-granos-basicos-en-el-estado-de-Campeche-20201223-0118.html>
- Albert, L. (2019, 24 de abril). Evolución del marco legal para los plaguicidas en México. La jornada ecológica. <http://ecologica.jornada.com.mx/2019/04/24/evolucion-del-marco-legal-para-el-control-de-los-plaguicidas-en-mexico-4491.html>
- Álvarez-Buylla Rocés, M. @ElenaBuylla (2020, 30 de marzo). En la perspectiva de ciencia abierta (ciencia puesta al servicio de la sociedad), pude constatar en la reunión, una gran convergencia entre los participantes hacia la colaboración científica global [Tweet]. <https://twitter.com/elenabuylla/status/1244832136676495361>
- AN/GH. (2020a, 4 de julio). Piden ONG's a Semarnat mantener negativa para importar glifosato. Aristeguí Noticias. <https://aristeguinoticias.com/0406/mexico/piden-ongs-a-semarnat-mantener-negativa-para-importar-glifosato/>
- AN/GH. (2020b, 4 de julio). La 4T apoya a pequeños productores, pero le pega durísimo a la agricultura comercial: CNA Aristeguí Noticias.

<https://aristeguinoticias.com/0406/mexico/la-4t-apoya-a-pequenos-productores-pero-le-pega-durisimo-a-la-agricultura-comercial-cna/>

- Arteta, I. (2019, 12 de febrero). Familiares en empresas, una carrera sin terminar: lo que secretarios de AMLO habían olvidado declarar. Animal Político. <https://www.animalpolitico.com/2019/02/familiar-conflicto-interes-gabinete-amlo/>
- Avila C. (2016, 11 de enero). “La ecología política llegó para quedarse”. Revista Ecología Política. <https://www.ecologiapolitica.info/?p=3626>
- Balderas, R. (2021, 6 de julio). Bayer-Monsanto enfrenta al Estado mexicano. Proceso. <https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/7/6/bayer-monsanto-enfrenta-al-estado-mexicano-267297.html>
- Barragán, S. (2021, 17 de febrero). Revelan correos electrónicos con cabildeo para reanudar importación de glifosato a México. Aristeguí Noticias. <https://aristeguinoticias.com/1702/mexico/revelan-correos-electronicos-con-cabildeo-para-reanudar-importacion-de-glifosato-a-mexico/>
- Cacelín, J. Melgoza A. y Rincón S. (2020, 2 de marzo). Un cacique del agua en el paraíso maya. REVISTA PROCESO. <https://www.proceso.com.mx/reportajes/2020/3/2/un-cacique-del-agua-en-el-paraiso-maya-239256.html>
- Camacho, Z. (2020, 27 de octubre). Scherer-Villalobos-Romo: ¿triumfa el eje del glifosato?. Contralinea. <https://contralinea.com.mx/scherer-villalobos-romo-triumfa-el-eje-del-glifosato/>
- Camacho, Z. (2021, 18 de febrero). El plan de los señores del glifosato: 12 millones para echar abajo decreto presidencial. Contralinea. <https://contralinea.com.mx/el-plan-de-los-señores-del-glifosato-12-millones-para-echar-abajo-decreto-presidencial/>
- Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA). (2020, 19 de agosto). La orientación agroecológica de los Programas de Producción para el Bienestar y Sembrando Vida [blog de opinión]. <http://www.cedrssa.gob.mx/post/la-orientacion-agroecologica-de-los-programas-de-produccion-para-el-bienestar-y-sembrando-vida>
- Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (2019, 10 de noviembre) Gobierno de México establece medidas para eliminar uso de plaguicidas de alta peligrosidad [comunicado de prensa]. <https://www.gob.mx/cofepris/prensa/gobierno->

de-mexico-establece-medidas-para-eliminar-uso-de-plaguicidas-de-alta-peligrosidad  
226795?idiom=es

- Concha, M. (2020, 31 de octubre). Un proyecto de decreto amañado. La Jornada. <https://www.jornada.com.mx/2020/10/31/opinion/017a1pol?fbclid=IwAR3aGLvp7qNlOJqURN1J5xpVdzwQSigT4G4jLK88zVZZWpHIMvMPyZP8xlQ>
- De Ita, A. (2020, 15 de noviembre). Precios de garantía, más allá de la propaganda. La Jornada. <https://www.jornada.com.mx/2020/11/15/opinion/011a1pol>
- De Ita, A. (2016, 26 de diciembre). El territorio maya contra la soya transgénica. La Jornada. <https://www.jornada.com.mx/2016/12/26/opinion/018a2pol>
- DM. (2019, 26 de noviembre). Niega Semarnat importación de mil toneladas de glifosato, bajo el principio precautorio para la prevención de riesgos. Cadena política. <http://cadenapolitica.com/2019/11/26/niega-semarnat-importacion-de-mil-toneladas-de-glifosato-bajo-el-principio-precautorio-para-la-prevencion-de-ries>
- Enciso, A. (2021, 13 de abril). Sin glifosato, la producción en el campo sólo caerá de 1 a 3%, señala Conacyt. La Jornada. <https://www.jornada.com.mx/2021/04/13/politica/014n1pol>
- Enciso, A. (2020, 26 de junio). Rechaza Semarnat importación de 67 mil toneladas de glifosato. La Jornada. <https://www.jornada.com.mx/2020/06/26/politica/015n1pol>
- Estrada, S. (2017, 21 de noviembre). ¿Quién es Alfonso Romo Garza, ex socio financiero de Pinochet y Salinas de Gortari?. [https://www.laizquierdadiario.mx/Quien-es-Alfonso-Romo-Garza-ex-socio-financiero-de-Pinochet-y-Salinas-de-Gortari?id\\_rubrique=1714](https://www.laizquierdadiario.mx/Quien-es-Alfonso-Romo-Garza-ex-socio-financiero-de-Pinochet-y-Salinas-de-Gortari?id_rubrique=1714)
- Gobierno de México. (2021). ALFONSO ROMO GARZA. <https://presidente.gob.mx/alfonso-romo-garza/>
- Gómez, C. (5 de agosto de 2020). Productores cuestionan a la Sader por proyecto sobre glifosato. La Jornada. <https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/08/05/repudia-anec-intencion-de-sader-de-publicar-anteproyecto-de-glifosato-145.html>
- Gómez, T. (2019, 3 de diciembre). México se sube a la ola contra el glifosato, MONGABAY. <https://es.mongabay.com/2019/12/mexico-contra-el-glifosato-plaguicidas/?fbclid=IwAR3zQjRZw26keJ1MbsyiSA-Sc10AJHHunogfBlrnkUcw7YeueBd9WAqrijA8>
- González, C. (2001, 28 agosto). Defiende gobierno transgénicos. Reforma. Recuperado de Castro, 2012, p. 190.

- Greenpeace. (2003, 18 septiembre). Demanda Greenpeace a los 6 culpables de la contaminación genética del maíz mexicano. Biodiversidad LA. [http://www.biodiversidadla.org/Noticias/Demanda Greenpeace a los 6 culpables de la contaminacion genetica del maiz mexicano](http://www.biodiversidadla.org/Noticias/Demanda%20Greenpeace%20a%20los%206%20culpables%20de%20la%20contaminacion%20genetica%20del%20maiz%20mexicano)
- Greenpeace México. (1999, 25 de mayo). Estados Unidos introduce maíz transgénico a México, confirma Greenpeace.
- Grupo ETC. (2016, 11 de febrero). Fusión entre Syngenta y ChemChina. <https://www.etcgroup.org/es/content/fusion-entre-syngenta-y-chemchina>
- Hernandez, J. (2019, 27 de mayo). Astillero. La Jornada. <https://www.jornada.com.mx/2019/05/27/opinion/008o1pol>
- La Cooperacha. (2021, 16 de febrero). Monsanto y funcionarios de EU presionan a México para impedir prohibición de glifosato. La Cooperacha. <https://lacoperacha.org.mx/monsanto-funcionarios-eu-presionan-mexico-para-impedir-prohibicion-glifosato-2021/>
- La Redacción. (2020, 31 de agosto). Víctor Toledo renuncia a la Semarnat por 'motivos de salud. PROCESO. <https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/8/31/victor-toledo-renuncia-la-semarnat-por-motivos-de-salud-248578.html>
- Lázaro V.( 2021, 27 de junio). Agroindustria va por segundo round para intentar evadir Decreto contra el glifosato. El Universal. <https://www.eluniversal.com.mx/opinion/viridiana-lazaro/agroindustria-va-por-segundo-round-para-intentar-evadir-decreto-contra-el?fbclid=IwAR2fnzi1fr>
- Lázaro, V. (2020, 30 de octubre). ¡No al decreto Scherer-Villalobos! México debe ser libre de transgénicos. Greenpeace. <https://www.greenpeace.org/mexico/blog/9129/no-al-decreto-scherer-villalobos-mexico-debe-ser-libre-de-transgenicos/>
- Liconsá S.A de C.V.( 2019, 23 de enero). SEGALMEX: Productividad agroalimentaria y distribución de alimentos [blog]. <https://www.gob.mx/liconsa/articulos/segalmex-productividad-agroalimentaria-y-distribucion-de-alimentos-188609>
- Lira I. (2020, 02 de junio). Este Gobierno arrancó cultivos nativos y “sembró” transgénicos: Premio Nacional de Ciencias 2017. Sin Embargo <https://www.sinembargo.mx/02-06-2018/3423774>
- López L. (2021, 17 de abril). Propuestas de políticas públicas frente a la eliminación del glifosato y a la prohibición del uso de semillas transgénicas: ANEC. Número 163 Suplemento Informativo de La Jornada del Campo.



- <https://www.jornada.com.mx/2021/04/17/delcampo/articulos/politicas-publicas-glifosato.html>
- Lorot A. (2012, 14 octubre). Los transgénicos son la nueva colonización de las semillas: Ana de Ita. DesInformememos. <https://desinformememos.org/los-transgenicos-son-la-nueva-colonizacion-de-las-semillas-ana-de-ita/>
- Morales, R. (2021, 22 de marzo). Asociaciones de alimentos y agricultura de EU ven alarmas para sus exportaciones a México. El Economista. <https://www.economista.com.mx/empresas/Asociaciones-de-alimentos-y-agricultura-de-EU-ven-alarmas-para-sus-exportaciones-a-Mexico--20210322-0043.html>
- Morbiato, C. (2021, 13 de febrero). Advierten ONGs sobre límites y alcances del decreto presidencial sobre el glifosato. El Sur. <https://suracapulco.mx/advierten-ong-sobre-limites-y-alcances-del-decreto-presidencial-que-prohibe-el-glifosato/>
- Nacho España (2021). @NachoEspaña (cuenta personal). <https://www.facebook.com/profile.php?id=100009878105191>. Consultado 10 de enero de 2021.
- Oropeza, D. (2020, 6 de septiembre). La agroindustria nos vende veneno”. Píe de página. <https://piedepagina.mx/la-agroindustria-nos-vende-veneno/>
- Perea, E. (2020, 9 de noviembre). Corrigen Salud y Conacyt decreto de Sader sobre glifosato y sugieren eliminar igual importación de maíz transgénico. Imagen Agropecuaria. <https://imagenagropecuaria.com/2020/corrigen-salud-y-conacyt-decreto-de-sader-sobre-glifosato-y-sugieren-eliminar-igual-importacion-de-maiz-transgenico/>
- Pérez, M. (2008, 17 de diciembre). Denuncian ONG intento gubernamental de sustituir el régimen de protección al maíz”. La Jornada <https://www.jornada.com.mx/2008/12/17/index.php?section=sociedad&article=043n2soc>
- Persistente uso de plaguicidas afecta abejas en Yucatán (2018, 30 de septiembre). Regeneración. <https://regeneracion.mx/persistente-uso-de-plaguicidas-afecta-abejas-en-yucatan/>
- Plattaforma Nacional (2019, 26 de septiembre). Agroempresarios No Requieren Apoyo Del Gobierno: Sader. <https://plattaforma.com/agroempresarios-no-requieren-apoyo-del-gobierno-sader/>
- Ramírez, E. (2020, 13 de enero). Sader busca erradicar agroquímicos del campo nacional: Víctor Suárez. CONTRALINEA. <https://contralinea.com.mx/sader-busca-erradicar-agroquimicos-del-campo-nacional-victor-suarez/>

- Red de Desarrollo Sostenible (2020, 2 de junio) Carta apoyamos la negativa a la importación de glifosato y pedimos su prohibición en México en una transición agroecológica del sistema alimentario. [comunicado de prensa]. <https://rds.org.co/apc-aa-files/ba03645a7c069b5ed406f13122a61c07/carta-glifosato-mexico-junio-2020.final.pdf>
- Ribeiro, S. (2020, 4 de enero). Niños orinan agrotóxicos en Jalisco. La Jornada. <https://www.jornada.com.mx/2020/01/04/opinion/014a1eco>
- Riveiro, S. (2005, 22 de enero). Ley Monsanto: parece mala pero es peor. <https://www.jornada.com.mx/2005/01/22/023a2pol.php>
- SADER. (2019, 11 de diciembre). Colaboración intersecretarial para impulsar la producción, comercialización y uso de bioinsumos [prensa]. <https://www.gob.mx/agricultura%7Cnuevoleon/prensa/colaboracion-intersecretarial-para-impulsar-la-produccion-comercializacion-y-uso-de-bioinsumos-229947>
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (2019, 14 de enero). Presenta SADER nuevos programas en 2019 [blog]. <https://www.gob.mx/sader/yucatan/articulos/prersenta-la-sader-nuevos-programas-en-2019?idiom=es>
- Secretaría de Bienestar. (2020, 06 de noviembre). Programa Sembrando Vida. <https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-sembrando-vida>
- Secretaría de Desarrollo Rural Campeche. (2021). @desarrolloruralcampeche. <https://www.facebook.com/desarrolloruralcampeche>. Consultado 8 de enero de 2021.
- Seguridad Alimentaria Mexicana. (2019, 02 de julio). SEGALMEX: Productividad agroalimentaria y distribución de alimentos [blog]. <https://www.gob.mx/segalmex/articulos/segalmex-productividad-agroalimentaria-y-distribucion-de-alimentos-207362>
- Semarnat. (2021, 07 de mayo). Tribunal Colegiado revoca suspensión provisional en el amparo contra el decreto sobre glifosato y maíz transgénico [comunicado]. <https://www.gob.mx/semarnat/prensa/tribunal-colegiado-revoca-suspension-provisional-en-el-amparo-contra-el-decreto-sobre-glifosato-y-maiz-transgenico>
- Sistema de información agropecuaria. (2016). Campeche Infografía Agroalimentaria 2016. [https://nube.siap.gob.mx/gobmx\\_publicaciones\\_siap/pag/2016/Campeche-Infografia-Agroalimentaria-2016](https://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/pag/2016/Campeche-Infografia-Agroalimentaria-2016). Consultado 19 de agosto de 2020.
- Solano, L. (2005, 2 de julio). Llama Bolívar Zapata a no satanizar avances de la biotecnología y la ciencia genómica. La Jornada.



[https://www.youtube.com/watch?v=Ku9\\_R8NuEs8&t=354s&ab\\_channel=Andr%C3%A9sManuelL%C3%B3pezObrador](https://www.youtube.com/watch?v=Ku9_R8NuEs8&t=354s&ab_channel=Andr%C3%A9sManuelL%C3%B3pezObrador)

Aristeguí Noticias. (2020, 3 de marzo). Por supuesto que no voy a renunciar: Romo. Archivo de video. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=nG10o189R7I&t=350s>

Campaña Nacional Sin maíz no hay país. (2021, 26 de enero). Panel 3: "Políticas de gobierno sobre el campo ante transgénicos". Coloquio: Defender los maíces y la milpa para la soberanía alimentaria. Archivo de video. Facebook. <https://www.facebook.com/556870934825967/videos/151998783255462>

Comisión Nacional de Derechos Humanos. (2018) Recomendación núm. 85. Sobre la violación a los derechos humanos a la alimentación, al agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud por el incumplimiento a la obligación general de debida diligencia para restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, en agravio de la población en general, 26 de diciembre. Disponible en: [https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec\\_2018\\_082.pdf](https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2018_082.pdf)

Revista Leisaal. (2013, 13 de diciembre). Victor Toledo nos explica qué es la agroecología. Archivo de video. YouTube. [https://www.youtube.com/watch?v=bsHG3G8Pfgg&fbclid=IwAR3GxMTTWx3mSsks8YiGzoPrpJWco3Q79sg4p37yw8rQG4dAB7ggaEl7m0&app=desktop&ab\\_channel=RevistaLeisaal](https://www.youtube.com/watch?v=bsHG3G8Pfgg&fbclid=IwAR3GxMTTWx3mSsks8YiGzoPrpJWco3Q79sg4p37yw8rQG4dAB7ggaEl7m0&app=desktop&ab_channel=RevistaLeisaal)

## **Seminarios**

Paulín, R. (2020, 20 de octubre). Seminario Internacional “Diálogos hacia la construcción de la *soberanía* y seguridad *alimentaria* en México”. En E. Lazos (Moderador), Sesión 01. Soberanía y Seguridad Alimentaria: conceptos, escalas e implicaciones. Instituto de Investigaciones sociales de la UNAM.

Suárez, V. (2020, 20 de octubre). Seminario Internacional “Diálogos hacia la construcción de la *soberanía* y seguridad *alimentaria* en México”. En . Lazos (Moderador), Sesión 01. Soberanía y Seguridad Alimentaria: conceptos, escalas e implicaciones. Instituto de Investigaciones sociales de la UNAM.

De Ita, A., Salgado. A. (2020, 12 de noviembre). Seminario Internacional: Diálogos para la construcción de la seguridad y soberanía alimentaria En P. Rosset (Moderador), Sesión 08. Agroecología y movimientos sociales por la soberanía alimentaria. Instituto de Investigaciones sociales de la UNAM.

## Documentos de gobierno

DOF Plan Sectorial de Desarrollo Rural del estado de Campeche (2015-2021) Disponible en: <http://www.seplan.campeche.gob.mx/copladecam/ps/ps-sdr.pdf>

DOF Programa Sectorial de Desarrollo Rural (2016-2021). Gobierno del Estado de Campeche. <http://www.seplan.campeche.gob.mx/copladecam/ps/ps-sdr.pdf>. Consultado 17 de enero de 2021.

DOF Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (2020). “Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024”. 25 de junio de 2020. Disponible en [https://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5595549&fecha=25/06/2020#:~:text=El%20Programa%20Sectorial%20de%20Agricultura,establecido%20en%20el%20art%C3%ADculo%2040.](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595549&fecha=25/06/2020#:~:text=El%20Programa%20Sectorial%20de%20Agricultura,establecido%20en%20el%20art%C3%ADculo%2040.)

Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024). (2019). Gaceta Parlamentaria. Cámara de Diputados. Disponible en: <http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf>.

## Fuentes secundarias

Bourdieu, P. (1997). Capital Cultural, Escuela y Espacio Social. Siglo XXI Editores. ISBN 978-6070302909

Durand, L., Figueroa, F., & Guzmán, M. (2012). *La naturaleza en contexto: Hacia una ecología política mexicana*. Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Centro Regional de -Investigaciones Multidisciplinarias.

Escobar, A. (2008). *Territories of Difference: Place, Movements, Life, Redes*. Durham: Duke University Press.

Fischer, F. (2003). *Reframing public policy: Discursive politics and deliberative practices*. Oxford: Oxford University Press.

Freeman, R., & Maybin, J. (2011). Documents, Practices and Policy. *Evidence & Policy*, 7(2), 155-170. [https://www.research.ed.ac.uk/portal/en/publications/documents-practices-and-policy\(88450712-b952-437a-92df-c1de61136f72\).html](https://www.research.ed.ac.uk/portal/en/publications/documents-practices-and-policy(88450712-b952-437a-92df-c1de61136f72).html)

González, B. (2006). La revolución verde en México. *Agraria*, 4, 40-68.

Greenpeace México, 2000, Maíz transgénico. Documentos de campaña, México, Greenpeace.

Hernández, G. M. G. (2018). *La esperanza o la barbarie. Luchas campesindias en defensa de la vida*. CEDICAR. México.

- Linck, T. (1992). Cambio técnico y marco macroeconómico de la “modernización” de la agricultura campesina. Revisado en agosto, 25.
- Micheli, J. (2002). Política ambiental en México y su dimensión regional. *Región y sociedad*, 14(23), 129-170.
- Morales, V. Carmen. (2004). Identidad y modernización agrícola en Los Chenes, Campeche, México. *Perspectivas Latinoamericanas* 1: 123-143.
- Navarro, M. L. (2013). *Luchas por lo común contra el renovado cercamiento de bienes naturales en México*. *Bajo el volcán*, 13(21), 161-169.
- Otero, G. & Pechlaner, G. (2008). The third food regime: neoliberal globalism and agricultural biotechnology in North America. *Sociologia ruralis*, 48(4), 351-371.
- Sina L., Feindt P. H., Winkel G. & Keller R. (2019) Discourse analysis of environmental policy revisited: traditions, trends, perspectives, *Journal of Environmental Policy & Planning*, 21:5, 445-463.
- Watts, M., & Peet, R. (1996). Towards a theory of liberation ecology. *Liberation ecologies: Environment, development, social movements*, 260-269.
- Yúnez, A. (2010). *Los grandes problemas de México. Economía rural*. Volumen XI. México: El Colegio de México AC.